ESTADO DE LA JUSTICIA

Informe Estado de la Justicia 2025

Investigación

Tutela efectiva de derechos en casos judiciales de violencia contra las mujeres

Investigadores:
Evelyn Villarreal Fernández
José Mario Achoy Sánchez
Karlissa Calderón Zúñiga

San José, 2024

362.79
V719t

Villarreal Fernández, Evelyn
Tutela efectiva de derechos en casos judiciales de violencia contra las mujeres / Evelyn Villarreal Fernández, José Mario Achoy Sánchez, Karlissa Calderón Zúñiga . -- Datos electrónicos. -- San José, C.R. : CONARE - PEN, 2024.
1 recurso en línea (124 páginas): archivos de texto PDF, 2450 KB

ISBN 978-9930-636-61-9
Investigación para el Informe Estado de la Justicia 2024

1. DELITOS CONTRA LA MUJER. 2. VIOLENCIA CONYUGAL. 3.VIOLENCIA FAMILIAR. 4. VIOLENCIA DE GÉNERO. 5. DERECHOS DE LA MUJER. 6. ACCIÓN DE TUTELA. 7. RECURSO DE TUTELA. I. Título.

Indice

Descargo de responsabilidad 6

Introducción 6

Antecedentes y contexto de la violencia contra las mujeres 8

Precisiones conceptuales 8
Violencia contra las mujeres 8
Violencia sexual 8
Acceso a la justicia 10
Áreas de riesgo de la tutela efectiva de derechos 12
Antecedentes de investigación 15
Esfuerzos previos por definir y medir la violencia contra las mujeres en Costa Rica 15
Cobertura mediática de la violencia contra las mujeres 19
Desarrollo de la normativa costarricense asociada a la prevención, atención, sanción y reparación de las violencias contra las mujeres 22

Capacidades institucionales del Poder Judicial en materia de violencia contra las mujeres 24

Dinamismo en las acciones institucionales se concentra en espacios de capacitación 25
Instancias judiciales de alto rango contribuyen en la perspectiva de género con limitados recursos y articulación 29
Desarrollo de espacios para la atención de las víctimas presenta desafíos de cobertura 32

Balance general estadístico 35

Delitos relacionados con violencia contra la mujer acumula casi el 20% de los casos en materia penal 36
Solo 14% de las denuncias asociadas a violencia contra las mujeres terminan en juicio 40
23% de expedientes terminados con solicitud de sobreseimiento por violencia sexual prescribieron 42
Cerca de la mitad de los casos en etapa de juicio cierran en una absolutoria 44
Duración de los procesos judiciales en casos terminados de violencia contra las mujeres 46
Duración de procesos judiciales en delitos sexuales asciende a más de cuatro mil días en promedio 47
Duración de expedientes de delitos sexuales es mayor en la fase de juzgados 48
Duración de casos de la LPVcM 49
Rangos de duración de casos de la LPVcM se diferencian según circuito judicial. 51
Duración de la etapa recursiva 55
Víctimas no obtienen reparación económica en sus procesos 57

Tutela efectiva de derechos en casos de violencia contra las mujeres: muestreo de expedientes 59

Riesgo de acceso a la información 61
Ausencia de constancia sobre el acceso material a derechos sexuales y reproductivos por parte de las mujeres víctimas de violación 63

85% de los imputados cuenta con salario o bienes a su nombre, pero solo en el 8% de expedientes analizados se presentó una acción civil resarcitoria 66
Riesgo de labor probatoria..... 67
La prueba pericial impacta el desenlace de los casos de violencia contra las mujeres..... 68
Testimonio de la víctima como única prueba 72
Es necesario fortalecer los mecanismos para que las víctimas cuenten con los elementos de prueba que necesitan en sus procesos 73
Riesgo de duraciones..... 77
El proceso de las víctimas para llegar a la denuncia..... 78
Denuncia temprana en las siguientes 72 horas tiene efectos positivos en las etapas iniciales 83
Duraciones extendidas en las etapas iniciales se incrementan por cambios de audiencias84
Prescribieron siete casos relacionados con violencia contra las mujeres..... 85
Riesgo de revictimización en la labor judicial..... 87
Suspensiones de audiencia y juicios atribuibles a personas operadoras judiciales..... 87
Riesgo por factores externos..... 89
Afectación diferenciada según perfil de las partes..... 90

Consideraciones finales..... 95

Recomendaciones 98

Reconocimientos..... 103

Referencias bibliográficas 105

Anexos metodológicos..... 112

Advertencia:

Los resultados que se presentan a continuación son parte de de una línea de investigación abierta, cuya versión sintetizada, revisada y con procesamientos más sofisticados que será incorporada como capítulo en el Informe Estado de la Justicia 2025. La publicación previa se realiza con el fin de aprovechar la coyuntura del año caracterizada por una serie de discusiones sobre reformas legales significativas relacionadas con estos temas. Además, publicar este estudio de manera anticipada pretende generar atención y debate, que se podría diluir con la multiplicidad de capítulos del Informe Estado de la Justicia.

Si los datos de este documento no concuerdan con el Informe Estado de la Justicia 2025, se deberán tomar como finales los incorporados en el Informe, pues pueden haber sufrido revisiones

Descargo de responsabilidad

Esta investigación se realizó para el *Informe Estado de la Justicia 2025*. El contenido es responsabilidad exclusiva de su autor, y las cifras pueden no coincidir con las consignadas en el capítulo respectivo, debido a revisiones posteriores. En caso de encontrarse diferencia entre ambas fuentes, prevalecen las publicadas en el Informe.

Introducción

Este documento desarrolla los hallazgos de uno de los estudios realizados para la preparación del *Quinto Informe Estado de la Justicia*: "El proceso judicial en los casos de violencia contra las mujeres en Costa Rica". Esta investigación se enmarca en una alianza entre el Programa Estado de la Nación-Conare y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través del proyecto Infosegura. De acuerdo con esta alianza, el *Informe Estado de la Justicia 2025* caracterizará, con base en evidencia, la situación y capacidades actuales del sistema de justicia para tutelar de manera oportuna y efectiva los derechos humanos y fundamentales en casos de delitos relacionados con violencia contra las mujeres, así como plantear oportunidades y medios de mejora para el cumplimiento de este propósito.

Costa Rica es un país signatario de las principales herramientas internacionales para combatir la violencia contra las mujeres, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, también llamada "CEDAW" y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como "Belem Do Pará"; y a su vez ha avanzado normativamente en su legislación interna con la finalidad de prevenir, atender y sancionar este tipo de violencia. Desde principios de siglo XXI se observa un reforzamiento de las iniciativas internas del Poder Judicial en materia de atención a la violencia contra las mujeres. Estos esfuerzos, acompañados por las luchas de organizaciones, colectivos y alianzas de mujeres, se han plasmado en la creación de instancias, normativas, políticas y acciones variadas.

Frente a estos avances, diversos datos provistos por el Subproceso de Estadísticas del Poder Judicial, la Subcomisión Interinstitucional de Prevención de Femicidios, el PNUD-Infosegura, el Programa Estado de la Nación y muchos otros informes registran estadísticas crecientes en homicidios contra mujeres, femicidios, casos de violencia intrafamiliar, acoso y hostigamiento sexual.

En un Estado de derecho la aspiración es que estas conductas violentas se sancionen por medio de mecanismos de justicia pronta, cumplida, independiente y equitativa. Pese a que las denuncias se contabilizan y monitorean cada vez más, en pocas ocasiones las fuentes de información existentes dan cuenta de cómo se judicializan estos casos, cómo se procesan y cómo se garantiza la tutela efectiva de derechos de las mujeres en la tramitación de las denuncias penales por violencia en la sede judicial.

En Costa Rica, existen algunos antecedentes de estudios sobre la efectividad de la materia penal relacionados con hechos de violencia contra las mujeres; por ejemplo, el Subproceso de Estadísticas del Poder Judicial recaba datos cuantitativos de casos, tipos de delitos y formas de resolución. También el Informe Estado de la Justicia ha estudiado a profundidad la tutela efectiva de derechos en materia penal. Entre los principales hallazgos sobresalen que el grupo con mayor riesgo potencial de tutela efectiva de derechos está conformado por poco más de la mitad de los expedientes analizados (51,4%). Entre los cuales tiene una alta presencia los delitos sexuales, contra la vida, contra la autoridad y las infracciones a la LPVcM (LPVcM) (PEN, 2015).

Los estudios y datos disponibles, sin embargo, carecen de información específica sobre la judicialización de la violencia contra las mujeres. Ello motivó esta investigación en la cual se efectúa un análisis de la preparación del Poder Judicial para resolver este tipo de casos, incluyendo como parte de las metodologías un muestreo de expedientes para conocer su secuencia, características y resultados.

Las preguntas de investigación que guiaron el presente estudio son de orden general y específica. La pregunta general fue la siguiente: ¿Cómo el Poder Judicial tutela en la práctica el derecho de acceso a la justicia de las usuarias del sistema penal en los delitos relacionados con violencia contra las mujeres? Por su parte, las preguntas específicas fueron:

- ¿Qué medidas ha adoptado el Poder Judicial para abordar la violencia contra las mujeres en los procesos que se denuncian en esta instancia?
- ¿Qué características presenta la ruta de los casos judiciales relacionados con violencia contra las mujeres y los factores asociados a distintos tipos de cierre o resoluciones?
- ¿Cuáles son los riesgos en el proceso judicial de tutela efectiva de derechos para víctimas de delitos de violencia contra las mujeres?
- ¿Qué recomendaciones se pueden generar para los actores institucionales involucrados en la evolución de un caso judicial de violencia contra las mujeres?

Para dar respuestas a estas interrogantes, el presente Informe se organiza en cinco capítulos, cada uno de los cuales desarrolla abordajes teóricos o metodológicos desde perspectivas distintas. El primer capítulo introduce los conceptos básicos, el contexto y los antecedentes bibliográficos que sustentan la justificación para el estudio de la judicialización de la violencia contra las mujeres. En el segundo capítulo se presenta un panorama general de la preparación que tiene el Poder Judicial para tramitar estos casos. El objetivo es compilar y sistematizar los esfuerzos institucionales, pues la información sobre ellos se encuentra dispersa y fragmentada. El tercer capítulo hace una sistematización de las estadísticas oficiales judiciales que evidencian los volúmenes de casos que ingresan al Poder Judicial y cómo éste responde, manera general o agregada. En el cuarto capítulo se presenta, mediante el muestreo de expedientes específicos, un análisis sobre la ruta de los casos, desde su inicio hasta su cierre en cada instancia del proceso. Esta es la parte medular del trabajo, pues aporta la mayor cantidad de información y trazabilidad en cada instancia con el fin de identificar los riesgos de tutela efectiva de derechos. Finalmente, el quinto capítulo está enfocado en una sección propositiva y de agenda futura de investigación. Como anexo se incluye la metodología detallada que se utilizó en cada sección.

Antecedentes y contexto de la violencia contra las mujeres

Este capítulo proporciona el encuadre conceptual y metodológico al presente estudio sobre la violencia contra las mujeres. Se divide en tres acápites. En el primero se precisan los conceptos que son posteriormente empleados a lo largo del estudio. En particular, interesa definir las nociones de violencia de género y violencia contras las mujeres, acceso a la justicia y áreas de riesgo para la tutela de derechos. En el segundo acápite se abordan dos antecedentes importantes para el presente estudio. Por una parte, la literatura, relativamente escasa aún, que se ha venido desarrollando en Costa Rica para definir y medir la violencia contra las mujeres. Por otra, se resumen los resultados sobre la cobertura mediática a los casos de este tipo de violencia, un aspecto que acompaña el tratamiento que el Poder Judicial da a estos casos. Finalmente, la sección concluye con una síntesis del marco normativo que regula la respuesta penal a la violencia contra las mujeres.

Precisiones conceptuales

Un repaso de los conceptos centrales que esta investigación empleó para el estudio de la violencia contra las mujeres es de gran importancia para clarificar el alcance de conceptos que son complejos y con diversos, en ocasiones, significados en disputa. No se pretende aquí zanjar discusiones teóricas de la literatura especializada, pero sí definir, con la mayor precisión posible, los marcos de análisis utilizados.

Violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres refiere a cualquier conducta violenta contra mujeres o niñas por serlo, sea la víctima cis o transgénero. La conducta puede tener o no efectos dañinos y provocar o no sufrimiento sobre la persona, pero sí debe tener potencial de causarlos (Peralta y Segura, 2023; Fry et al, 2021).

La violencia contra las mujeres y las niñas representan una violación de derechos humanos y fundamentales, parte de una desigualdad de poder estructural por sus roles de género, relaciones asimétricas de poder, y puede estar permeada también por elementos particulares de la relación entre la víctima y el agente (WHO, 2021; OPS, 2013). En otras palabras, no parte de la disyuntiva naturaleza/sexo, sino en cultura/género.

Dicha violencia se puede manifestar en el ámbito público o privado. Asimismo, sin que implique una lista taxativa, puede ser física, sexual, psicológica, patrimonial, política, religiosa o gineco-obstétrica (Naciones Unidas, 1979; WHO, 2021; Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, 1994, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2021).

Violencia sexual

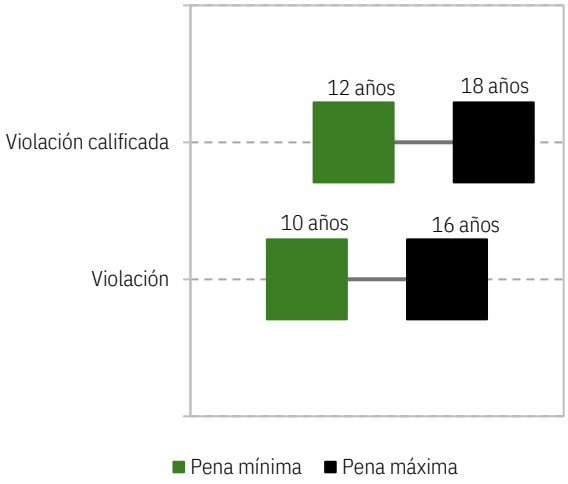
Por su parte, la violencia sexual alude a todo acto corporal o no con connotación sexual que realice el agente contra una o varias personas (u obligue a la/s otra/s persona/s a realizar, ver o soportar) sin que, por cualquier motivo, medie consentimiento. Sin que implique una lista taxativa, la ausencia de consentimiento puede deberse, entre otros motivos, al uso de fuerza física o violencia moral contra la víctima, también por el aprovechamiento vinculado a su edad, condición de salud, consumo voluntario o involuntario de sustancias o la relación de poder del

agresor frente la víctima. La finalidad libidinosa del agente o la satisfacción de sus "deseos" no representa un criterio único para definir qué es violencia sexual (Peralta y Segura, 2023; Álvarez et al. 2021; Echeburua y Guerricaechebarria, 2021).

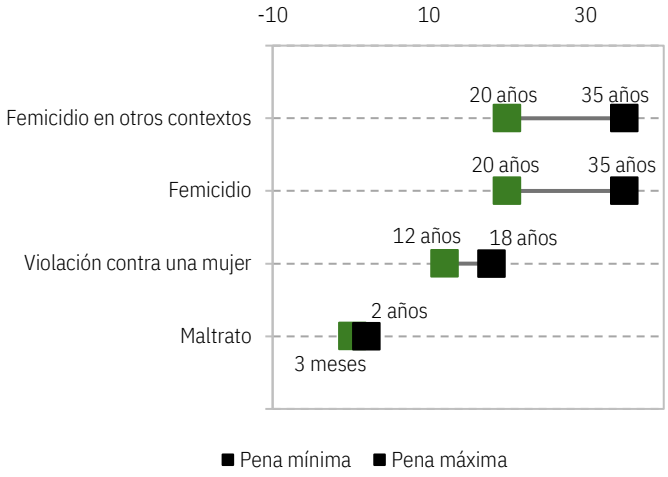
Para efectos de esta investigación, sin embargo, es necesario que los conceptos se refieran a tipos de delitos específicos, susceptibles de judicializarse, pues lo que se estudió fue la tutela efectiva de los derechos en casos de violencias contra las mujeres, asunto que ocurre (o no) en el ámbito de la justicia penal. Basados en los conceptos teóricos anteriormente definidos, se escogieron ciertas figuras penales relacionadas directamente con el fenómeno de violencia contra las mujeres. Con este propósito, se lograron identificar preliminarmente un total de 49 tipos de delitos (anexo 3), a los que se les aplicó tres filtros con base en los criterios de inclusión y de exclusión, la fusión de tipos de delitos y la priorización de criterios de víctima, incidencia y pena. Tras la aplicación de los filtros, se seleccionaron tres grupos de delitos, a saber: i) maltrato, ii) violación (violación, violación calificada y violación contra una mujer) y tentativa de violación, y iii) femicidio (femicidio y femicidio en otros contextos) y tentativa de femicidio (gráfico 1).

Gráfico 1
Penas mínimas y máximas de los delitos penales relacionados con el concepto de violencia contra las mujeres que se consideraron para el estudio, según la normativa que los establece[a/]

a) Código Penal (Delitos sexuales)



b) Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres



a/ Se excluyeron los casos de violencia doméstica dado que el estudio abarca el derecho de acceso a la justicia de las usuarias del sistema penal. También, se excluyeron casos de personas menores de edad para hacer viable operativamente la investigación.
Fuente: Bogantes, 2024, con datos del Código Penal (nº 4573) y la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres (nº 8589).

La agrupación de femicidio comprende dos tipos penales. El primero es el tipo penal de femicidio establecido en el artículo 21 de la LPVcM (LPVcM, nº 8589), vigente desde 2007 y reformado en mayo de 2021. Esta figura sanciona a quien siendo o habiendo sido pareja sentimental de una mujer, le da muerte.

El segundo tipo penal de la agrupación es el femicidio ampliado, contemplado en el artículo 21 bis de la LPVcM. La introducción de este tipo penal, en el ordenamiento jurídico nacional en el año 2021, refleja que la violencia contra las mujeres no se da únicamente en el contexto de pareja, sino que reconoce el femicidio como figura más allá de lo jurídico; en otras palabras, implica que se mate a una mujer por serlo.

El tipo penal de femicidio ampliado significa un paso significativo para plasmar en la legislación nacional que la violencia contra las mujeres va más allá de la violencia sufrida en el marco de relaciones de pareja. Contempla aquellos casos en los que el femicida se haya aprovechado de una relación o vínculo de confianza, amistad, parentesco, autoridad o relación de poder que tuviera con la mujer víctima; o bien, cuando el hecho ocurre dentro de las relaciones familiares de consanguinidad o afinidad hasta tercer grado. Además, este tipo penal tiene mayor adherencia a lo establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, instrumento jurídico internacional que obliga a los estados firmantes, como Costa Rica, a sancionar penalmente las diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres.

El procedimiento para la clasificación estadística de muertes violentas de mujeres como femicidios se realiza en la Subcomisión Interinstitucional para la Prevención del Femicidio[1]; donde se analizan los casos y en conjunto determinan de manera definitiva la clasificación estadística. El Observatorio de Violencia de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial publica en su sitio *web* el resumen de los casos de femicidio actualizados al mes anterior (Subcomisión Interinstitucional para la prevención del Femicidio, s.f.).

Resulta importante mencionar que la clasificación estadística realizada por la Subcomisión Interinstitucional para la Prevención del Femicidio no significa necesariamente que el proceso judicial haya concluido o que jurídicamente se considere el hecho como un femicidio o un femicidio ampliado. Sin embargo, el esfuerzo de dicha Subcomisión ha sido valioso en cuanto visibiliza la problemática, dado que incluso previo a la introducción del tipo penal de femicidio ampliado a la normativa, ya los contabilizaba, lo que colaboró a hacer ver a las personas legisladoras la necesidad de reformar la LPVcM, que se concretó en 2021.

Acceso a la justicia

El acceso a la justicia se define como la facultad que tienen las personas de poseer mecanismos legales que garanticen el reconocimiento y protección de sus derechos, ofreciendo una resolución adecuada y oportuna (Poder Judicial, 2021). Si bien desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1948) se menciona dicho derecho, este legado estaba muy lejos de realmente ser universal y no solo porque hace alusión a los hombres en su título dejando de lado a las mujeres, sino que resultó un instrumento clasista y misógino, dado

[1] Conformada por el Poder Judicial, el Subproceso de Estadística, la Fiscalía Adjunta de Género, el Organismo de Investigación Judicial, la Secretaría Técnica de Género y el Observatorio de Violencia de Género y Acceso a la Justicia; por el Poder Ejecutivo, el Instituto Nacional de las Mujeres, los Ministerios de Seguridad Pública, Salud, Educación y Justicia y Paz, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el Patronato Nacional de la Infancia y la Organización No Gubernamental CEFEMINA.

que ni las mujeres ni las personas no propietarias podían ser consideradas ciudadanas (“El contrato moral de Diana Maffia”).

No solo dicha Declaración resultó insuficiente para positivizar o garantizar el derecho humano y fundamental a la justicia para todas las personas, de particular interés para estudio, para las mujeres, sino que aún existen obstáculos prácticos para que el artículo 41 de nuestra Constitución Política (1949), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) y la Convención Americana de Derechos Humanos (1978) se apliquen a entera conformidad cuando se trata del acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia.

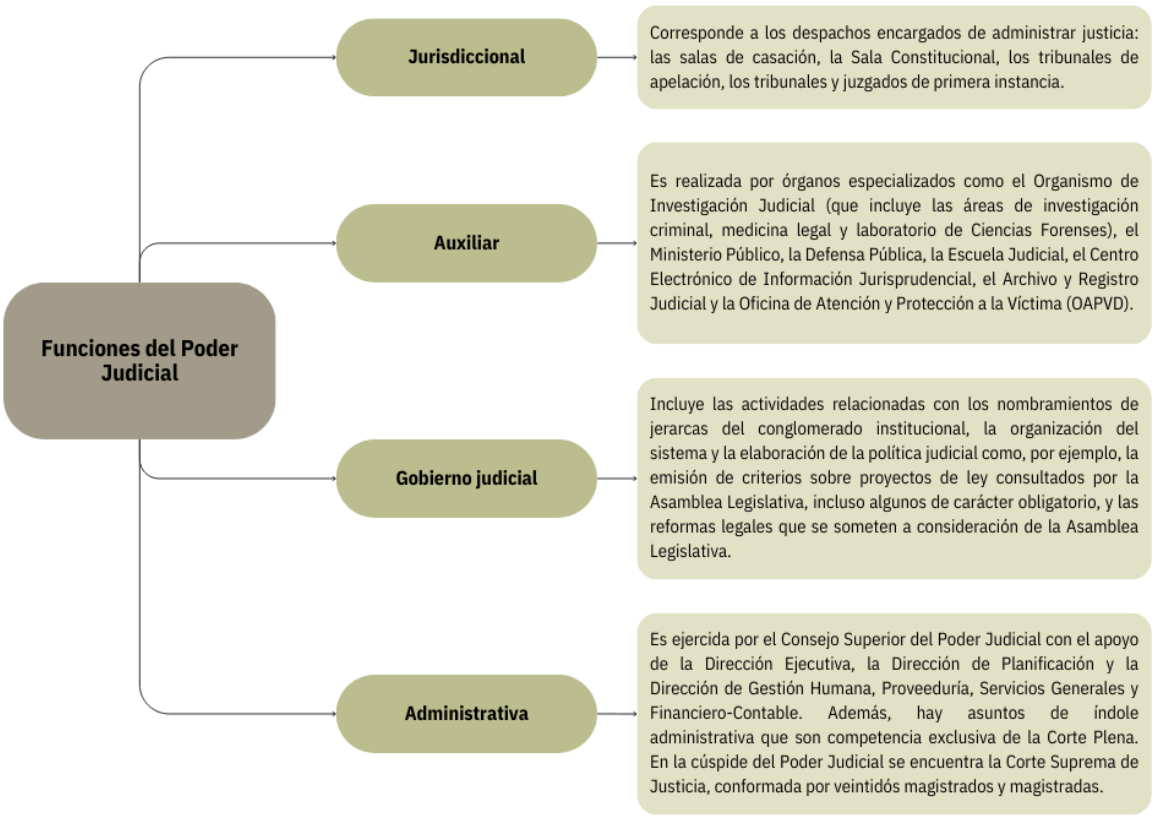
En años posteriores se generaron instrumentos jurídicos internacionales especialmente dirigidos a resguardar los derechos de las mujeres, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como "Convención Belem Do Pará" (1994); así como las alusiones que hacen las Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de población en condiciones de vulnerabilidad (2008) y su actualización (2018) sobre las mujeres; sin embargo, aún existen impedimentos para que las mujeres accedan a la justicia en condiciones de igualdad.

Y es precisamente por las dificultades aún existentes para el acceso material a la justicia para las mujeres que en el siguiente capítulo se desarrollará en detalle un conjunto de compromisos para la aplicación del derecho de acceso a la justicia con perspectiva de género.

En Costa Rica, el Poder Judicial es el principal responsable del sistema de administración de justicia y, por lo tanto, es el objeto que estudia investigación. Si bien es cierto, una parte de la problemática de violencia contra las mujeres se gestiona en órganos administrativos del Poder Ejecutivo (Ministerio de Seguridad Pública, Inamu, PANI, 911) e incluso en municipalidades (comisiones de género o sociales, policías municipales), el estudio se delimita al proceso judicial para poder manejar la complejidad del tema según los recursos y plazos con que se cuenta, y además porque es uno de los mayores vacíos de conocimiento, como se verá en los antecedentes.

En este documento se define al Poder Judicial como un conglomerado de entidades, que desarrolla cuatro funciones por medio de distintas oficinas y órganos (figura 1).

Figura 1
Funciones del Poder Judicial



Fuente: Calderón, 2024 con datos de PEN, 2015.

Áreas de riesgo de la tutela efectiva de derechos

El estudio se enfoca en identificar áreas de riesgo de tutela efectiva de derechos en el acceso a la justicia. La tutela efectiva se define como "el libre acceso de todas las personas al sistema de administración de justicia, para obtener una resolución de fondo ajustada al marco legal vigente, que garantice el cumplimiento de los derechos ciudadanos o la defensa de un interés legítimo" (PEN, 2015). Asimismo, está vinculada al deber de debida diligencia reforzada[2] para casos de violencia contra las mujeres y delitos sexuales según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)[3].

[2] Según la Corte IDH, "los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)" (CEJIL, 2010).

[3] Sentencias de la Corte IDH en los casos Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1987); Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú (2006); Ríos y otros vs, Venezuela (2009); Fornerón e hija vs. Argentina (2012); González y otras ("Campo Algodonero") vs. México (2009), Rosendo Cantú y otra vs. México (2010); Atalia Riffo y Niñas vs. Chile (2012), Gelman vs. Uruguay; Cabrera García y Montiel Flores vs. México (2010); Veliz Franco y otros Vs. Guatemala (2014); Velásquez Paiz y otros vs. Guatemala (2015); Favela Nova Brasilia Vs. Brasil (2017); V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua (2018); Manuela y otros vs. El Salvador (2021); Vicky Hernández y otras vs. Honduras (2021); y Angulo Losada vs. Bolivia (2022).

Además, como parte de la tutela se incluye en la investigación el grado de preparación del Poder Judicial para responder a este fenómeno, como se verá más adelante. Este marco conceptual permite seguir la ruta de los casos de violencia contra las mujeres e identificar riesgos que atenten contra la tutela de derechos.

El riesgo de tutela efectiva de derechos refiere a una "situación en la que puede documentarse la existencia de una vulnerabilidad procesal que contraviene los principios de tutela estipulados en el marco normativo vigente. El riesgo debe entenderse como un potencial perjuicio o daño para las personas usuarias" (PEN, 2015). Para efectos de la presente investigación, se identifican seis riesgos de tutela efectiva de derechos (cuadro 1).

La identificación de riesgos se realiza por medio de una revisión exhaustiva de un conjunto de expedientes de violencia contra las mujeres. Se utilizó la técnica de muestreo de expedientes para lograr un nivel de datos desagregados (microdatos) y su cruce y procesamiento, que por ahora es imposible de lograr con las estadísticas judiciales oficiales.

El muestreo de expedientes utilizó la técnica de estudio de cohortes, la cual permite el seguimiento de un grupo a lo largo del tiempo, rastrear su historia de principio a fin, es decir desde la apertura del expediente con el número único hasta su terminación en el proceso judicial. Busca determinar tipos de salida, tipos de casos, duraciones, perfiles de mujeres usuarias, riesgos de tutela de derechos en el proceso, entre otros (véase más detalle en los anexos metodológicos al final del texto).

La revisión de los expedientes se guio por medio de un cuestionario que incluye preguntas para la verificación del cumplimiento de los principios de tutela efectiva de derechos. Además, el cuestionario recopila evidencias sobre los siguientes riesgos, los cuales fueron definidos a partir de la literatura especializada y la consulta con especialistas.

Cuadro 1
Riesgos de la tutela efectiva de derechos

Riesgo identificado	Definición	Método de estudio
Capacidades institucionales	• Respuesta diferenciada cuando interviene personal especializado. • Cambio en el servicio judicial ante el esfuerzo de capacitar su personal. • Tecnicidad de las acusaciones y acciones civiles resarcitorias. • Panorama completo de la debida diligencia reforzada.	Examen de: • Las acusaciones y acciones civiles con determinación de tiempo, modo y lugar. • La participación de fiscalías especializadas.
Acceso a la información	Información certera y oportuna: • Que las víctimas tengan acceso material a la información. • Devolverles a las víctimas poder de decisión sobre su proceso y proyecto de vida.	Indagación acerca de: • La existencia o no de manifestación en la que la víctima asegura haber entendido y no tener dudas. • Los tiempos de toma de denuncias.

Riesgo identificado	Definición	Método de estudio
		• La notificación de actos oportunamente y a la persona correcta por el medio indicado. • La gestión de apoyo legal privado. • La información sobre ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. • El ejercicio o no de la querella y la acción civil resarcitoria.
Labor probatoria	Abordaje oportuno de las investigaciones judiciales: • La búsqueda exhaustiva. • El agotamiento de líneas de investigación. • La gestión de la totalidad de la prueba solicitada por las partes. • La remisión de los expedientes al Juzgado Penal hasta que se finalice la etapa de investigación en su totalidad. • La visualización del panorama general de la violencia en cada caso.	Registro de: • La adecuación de los tipos de pruebas solicitadas. • La participación o no de la víctima • La obtención de toda la prueba solicitada por las partes. • El uso o no de anticipo jurisdiccional de prueba y de cámaras de Gesell.
Duración	• Procesos judiciales con tiempos de respuesta extensos en detrimento de derechos de las víctimas y las personas imputadas. • Pérdida de prueba o detrimento en su calidad. • Tiempos que necesitan para denunciar.	Análisis de: • La duración entre hechos y denuncias. • El lapso de la etapa de investigación. • Los tiempos para realizar la audiencia preliminar o el requerimiento fiscal. • La duración de etapa de impugnación, contando el plazo que toman los despachos en remitir los expedientes al competente.
Revictimización en la labor judicial	• Ampliaciones o aclaraciones de denuncia. • Pruebas psicológicas, psiquiátricas o de trabajo social sin objetivo determinado en el proceso o rutinarias. • Necesidad de las víctimas de acudir a diversas instancias antes de llegar al despacho correspondiente. y volver a practicar pruebas periciales. • Uso de estereotipos de género en el litigio. • Cambio constante de personal.	Determinación de: • La existencia o no de ampliaciones de denuncias y gestionadas por quién. • La clase de preguntas en las pericias y quién las gestiona. • Las declaraciones de incompetencia. • La participación de las víctimas en el proceso. • El cambio o no de persona fiscala a cargo del expediente y cuántas veces sucede por expediente.

Riesgo identificado	Definición	Método de estudio
	• Gestiones para que la víctima participe activamente del proceso sin temor de ver de nuevo al imputado. • Materialización de acceso a derechos sexuales y reproductivos.	
Factores extrajudiciales	Interseccionalidad y estigmatización.	Indagación sobre: • La relación entre víctima y agresor. • Las características sociales y económicas de las víctimas. • Las diferencias de edad.

Fuente: Elaboración propia.

Antecedentes de investigación

Esfuerzos previos por definir y medir la violencia contra las mujeres en Costa Rica

Durante la década de 1990, la violencia contra las mujeres fue reconocida como un problema social de amplias dimensiones. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), en conjunto con las instituciones de derechos humanos de Centroamérica, publicó en 2006 el I Informe regional: situación y análisis de femicidio en Centroamérica, en el cual se reconocía la tendencia creciente de la violencia contra las mujeres en un contexto institucional y normativo que apenas daba sus primeros pasos. Incluso en ese año no todos los países de la región tenían incluida esta figura por lo que las estadísticas que se presentaban eran de homicidios de mujeres, en general (IIDH, 2006).

En Costa Rica, desde 1990, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) registra indicadores de género mediante el Sistema de Indicadores Estadísticos de Género (SIEG), que informa sobre los avances o retrocesos de las brechas entre hombres y mujeres (Escalante, 2022). Sin embargo, fue hasta el 2002, cuando las investigadoras Ana Carcedo y Montserrat Sagot realizaron un estudio sistemático sobre los asesinatos de mujeres en Costa Rica por razones asociadas al género, en el período 1990-1999, que se realizó un primer estudio sobre el tema en el país. En esta investigación se analizó sus características y factores asociados y se colocó en la agenda pública el concepto de femicidio. Se lograron identificar 44 femicidios que no estaban en los anuarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), “haciendo del subregistro de agresiones otra forma de hacer violencia contra las mujeres” (Carcedo y Sagot, 2002).

En 2009, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) presentó los resultados de la investigación Femicidio en Costa Rica 2000-2004, realizada por Ana Hidalgo y coordinada por el Centro Feminista de Información y Acción (Cefemina). Entre sus principales hallazgos se destaca las mejoras en el registro de estadísticas del Poder Judicial y los avances en la respuesta social y estatal para enfrentar el femicidio, mediante la generación de conocimiento, estadísticas e indicadores. Por ejemplo, la creación del Sistema Unificado de Medición Estadística de la Violencia de Género en Costa Rica (SUMEGIV). Este consiste en un conjunto de indicadores

estadísticos que se han actualizado en varias ocasiones, aunque no siempre con la totalidad de indicadores (SUMEGIV, 2009, 2014 y 2018).

El plan de acción del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI 2010-2015) contempló el fortalecimiento y consolidación del SUMEGIV y ya para el 2018 los indicadores respondían a los ejes estratégicos establecidos en el PLANOVI 2017-2032 (Inamu, 2018). Pese a este esfuerzo, continúa la ausencia de un registro único sobre la ruta crítica institucional que siguen las mujeres víctimas de violencia y se identifican muchas oportunidades de mejora en materia de registros administrativos. Al respecto, el proyecto Infosegura/PNUD elaboró un informe de análisis de los indicadores del SUMEGIV durante el período del 2006 al 2021. Si bien fue un análisis descriptivo, brindó una serie de recomendaciones para mejorar el sistema, incluyendo como acción adicional una herramienta de visualización de datos que ayuda a ordenar y mejorar la conceptualización de los indicadores (Argüello, 2023).

En paralelo, fueron surgiendo otras fuentes de información que contemplan datos e indicadores sobre violencia contra las mujeres tales como la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh), la Encuesta Continua de Empleo (ECE), y la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) del INEC. También, la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, la Encuesta Nacional de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, la Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la UCR (CIEM-UCR), y la Encuesta Nacional de Percepción sobre los Derechos de las Mujeres (Enfermo) del Inamu (recuadro 1), entre otros (Escalante, 2022). Esta última institución también publica desde 2011 los informes denominados Estado de los Derechos de las Mujeres en Costa Rica con el objetivo de "reflejar los cambios relacionados con el estado de los derechos de las mujeres, de cara a los compromisos estatales asumidos tanto en el ámbito internacional como nacional" (Inamu 2011, 2015 y 2019). Esta última no se actualiza desde 2019.

Recuadro 1
Encuesta nacional de percepción sobre los derechos de las mujeres Costa Rica 2021

En 2021, la Encuesta Nacional de Percepción sobre los Derechos de las Mujeres (Enpedmu) que desarrolló el INAMU con el propósito de tener un acercamiento a las percepciones de la ciudadanía acerca del ejercicio y goce de los derechos humanos de las mujeres encontró que el cambio cultural no se da de forma simultánea o sincrónica en todos los ámbitos, provocando ambigüedades o contradicciones. Por ello, aún se evidencian barreras que obstaculizan su avance.

En términos generales, se determinó que el 58% de las personas encuestadas percibió un aumento de la violencia contra las mujeres, principalmente mujeres (65%). Entre los tipos de violencia mencionados, se destacaron la física (45%), la psicológica (40%) y la sexual (9%). El 59% de las mujeres consultadas consideró el miedo como la principal razón por la cual las mujeres permanecen en relaciones de violencia. Cabe señalar que, en el año 2020, se registraron 48.786 solicitudes de medidas de protección por violencia doméstica, interpuestas en su mayoría por mujeres (Poder Judicial, 2020 citado por Inamu, 2021).

Por otra parte, se le consultó a la población el grado de aceptación sobre algunos tipos de violencia. Entre las expresiones de violencia menos rechazadas por la población, se encontraron las relaciones sexuales entre una persona menor de edad y una persona adulta, con una diferencia etaria igual o mayor a cinco años. Este indicador evidencia "cierto grado de permisibilidad ante el establecimiento de relaciones sexuales en un marco de violencia y abuso de poder" (Inamu, 2021, p.141). La aceptación de estas prácticas y acciones es mayor en los hombres (17%) con relación a las mujeres (13%). Por lo tanto, es "apremiante dirigir esfuerzos para garantizar la protección de las menores de edad y prevenir la violencia sexual" (Inamu, 2021, p.143).

Asimismo, la mitad de las personas consultadas percibió que "las mujeres utilizan las leyes a su favor y para castigar a los hombres", mientras que la cuarta parte de las personas consultadas considera que "las leyes y las instituciones sólo protegen a las mujeres". Según el Inamu (2021), tales narrativas se enmarcan en corrientes, como el *backlash* y el posmachismo, que buscan reaccionar y retroceder los avances en materia de igualdad de género.

A pesar de tales consideraciones, más del 60% de las personas consultadas consideró insuficiente la respuesta estatal y jurídica ante la violencia contra las mujeres. Este hallazgo hace un llamado de atención a las instituciones responsables para "fortalecer su capacidad de gestión y de respuesta de manera que esta sea más efectiva y evidente" (Inamu, 2021, p.145).

Fuente: Elaboración propia con datos del Inamu, 2021.

Otras organizaciones se sumaron a la recolección y producción de información en materia de violencia contra las mujeres. Tal es el caso de la Comisión Técnica Interinstitucional sobre Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Comesco) que, en alianza con el Proyecto Regional Infosegura/PNUD, realizó un estudio sobre el tema durante el período 2015-2017. Sus hallazgos permitieron describir los múltiples escenarios sociales, culturales y materiales en que se manifiesta una desigual e inequitativa distribución de los recursos, brechas de acceso y participación, y expresiones de violencias diferenciadas por sexo y género.

A partir de 2020, el Proyecto Regional Infosegura/PNUD realizó un análisis de la violencia contra las mujeres a lo largo del ciclo de vida en Costa Rica. A la fecha, se han publicado tres actualizaciones (Infosegura 2020, 2021 y 2022). En el estudio de 2021, se identificaron cinco vacíos: escasa o inexistente información sobre ciertos delitos, datos no registrados, inconsistencias, datos no actualizados y dificultad para realizar comparaciones entre países (Infosegura, 2021).

Más recientemente, en 2024, se realizó un estudio sobre "el poder de la investigación, la generación de datos y la transformación cultural para la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas en Costa Rica" (Brenes y Camacho, 2024). Asimismo, se publicó el Informe Anual de Situación de Femicidios 2020, el cual realiza autopsias psicosociales de los femicidios que afrontó el país durante ese año (PNUD et al, 2024a y 2024b). En ambos se avanzó en el conocimiento de la problemática y coincidieron en que una de las fronteras de la información estaba constituida por la forma en que se tratan los casos una vez que ingresan al Poder Judicial.

En esa línea, la presente investigación se enmarca en una alianza entre el Programa Estado de la Nación-Conare y el proyecto Infosegura/PNUD para darle continuidad y solventar algunos temas no cubiertos por estas investigaciones. El Informe Estado de la Justicia en sus ediciones 2015,

2020 y 2022 realizaron estudios en profundidad para detectar riesgos de tutela de derechos en las materias penal, laboral y contencioso administrativa. En esta edición, se adaptó esta metodología de muestreo de expedientes para analizar el tratamiento de los casos de violencia contra las mujeres una vez que ingresan a la etapa judicial.

El Poder Judicial creó el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia en el año 2014. La plataforma contiene un inventario sobre el accionar del Poder Judicial en materia de violencia contra las mujeres, incluyendo información sobre sus derechos, oficinas de ayuda, guías para detectar la violencia, normativas, jurisprudencia, entre otros. Asimismo, integra indicadores estadísticos de cada tipo de violencia, a saber, femicidios, LPVcM, violencia doméstica, violencia sexual y pensiones alimentarias (Poder Judicial, 2020b).

Sobre la aplicación de la LPVcM hay al menos dos estudios, uno realizado por la Dirección de Planificación del Poder Judicial y otro contratado por el Inamu. Ambos hacen referencia a las altas cifras de desestimaciones y sobreseimientos, asimismo, algunos puntos consignados en este estudio que podría decirse son "crónicos" (véase capítulo 3 y 4). Desde el año 2016, la Comisión de Género identificó está problemática; por ello, desarrolló un plan de trabajo aprobado por el Consejo Superior, desarrollado por tres fiscalas de género a quienes se sacó de sus funciones habituales para asumir la tarea de definir un modelo de atención a las denunciantes de los delitos de la LPVcM, similar al empleado en las Plataformas Integradas de Servicios de Atención a la Víctima (Pisav).

Sin embargo, en el año 2020, la problemática persiste. De los delitos relacionados con la LPVcM, el 85% fue desestimado o sobreseído, solamente el 9,6% tuvo una orden de apertura de juicio. Mientras que en los delitos sexuales el 73% fue desestimado o terminado con un sobreseimiento, y se llevaron a juicio un 17,4% del total de los casos entrados a juzgados (Poder Judicial, 2022).

Si bien la información cuantitativa señala un problema, a la fecha, no existen estudios que documenten las causas de estos altos porcentajes de desestimación, más allá de apreciaciones casuísticas o de hipótesis que señalan especialistas en la materia. Es decir, hasta ahora no se puede contestar con datos rigurosos la pregunta: ¿por qué terminan de esta forma estos casos?

En este estudio, el *Informe Estado de la Justicia* realizó un análisis para caracterizar, con base en evidencia, la situación y capacidades actuales del sistema de justicia para tutelar de manera oportuna y efectiva los derechos en casos de delitos relacionados con violencia contra las mujeres, así como plantear oportunidades y medios de mejora para el cumplimiento de este propósito. La investigación aplicada brindará insumos para mejorar la capacidad del sistema judicial de procesar efectivamente estos casos y contribuirá a lograr un mejor entendimiento sobre el abordaje de estos desafíos.

Cobertura mediática de la violencia contra las mujeres

Un área de mucha importancia para el estudio de la violencia contra las mujeres es la cobertura mediática de noticias relacionadas con femicidios, debido al papel fundamental que los medios de comunicación tienen al presentar información que puede contribuir a reforzar o, por el contrario, evitar los estereotipos que fomentan este fenómeno. De parte del PNUD-Costa Rica y del PEN se cuenta con recientes estudios sobre esta temática.

El PEN ha sistematizado alrededor de 23.147 noticias sobre el quehacer judicial para el período 2014-2023, reportado en los medios de comunicación, concretamente en el Semanario Universidad, La Nación y Diario Extra. En esta cobertura sobresale un incremento de la cantidad de noticias que reportan delitos contra la vida, especialmente en femicidios con 370 registros (Calderón et al, 2024). Por su parte, la investigadora Carolina Urcuyo ha publicado las investigaciones aplicadas *"Reporteando sobre femicidios en el primer año pandémico: construcción discursiva en los medios de comunicación costarricenses durante el año 2020"* y *"Análisis sobre la influencia de las narrativas periodísticas de medios de comunicación con presencia digital"* (recuadro 2).

No a todos los femicidios se les da cobertura mediática, ni mucho menos con un seguimiento sostenido por parte de la prensa. En el período 2014-2023, las 370 noticias registradas sobre femicidios que refieren a 68 mujeres distintas. Sin embargo, en las estadísticas judiciales para este período se registran en total 238 femicidios.

En esta cobertura mediática, 57 casos (84%) cuentan únicamente con una noticia, es decir no hubo ningún tipo de seguimiento. Mientras que tres concentran 244 noticias, a saber: María Luisa Cedeño, Allison Bonilla y Luany Salazar a los que se les hizo un seguimiento del proceso judicial por parte de los medios de comunicación durante un lapso de cuatro años (2020, 2021, 2022 y 2023). Además de la frecuencia, se les dio una mayor relevancia mediática al aparecer 16, 14 y 7 veces en las portadas de Diario Extra y La Nación, respectivamente.

A manera de ejemplo, la cobertura del femicidio de María Luisa Cedeño, cometido el 20 de julio de 2020, contó con 106 noticias que le hicieron referencia entre los años 2020 y 2023, colocándose como el femicidio con mayor cobertura mediática entre los registrados. Este caso fue clasificado como femicidio por la Subcomisión Interinstitucional para la prevención del Femicidio, pero penalmente fue sancionado como homicidio calificado, pues ocurrió antes de la reforma a la LPVcM, que incluye el femicidio en contexto ampliado, es decir, cometido por personas que no son o fueron la pareja sentimental de la víctima.

Calderón et al (2024) hace una sistematización de las pautas para realizar una cobertura mediática adecuada de los femicidios, a partir de las recomendaciones emitidas por la academia y organismos especializados (ONU Mujeres, proyecto Infosegura/PNUD, entre otros). En primer lugar, debe contextualizarse de forma completa el hecho, no cubrir los mismos como un crimen aislado sino como parte del fenómeno de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico o público y basado en género. Asimismo, el homicidio debe abordarse periodísticamente como tal, por ello, se insiste en utilizar el término explícito de "femicidio" (Alexanian, 2009 citado en Ortega, 2021; Rojas, 2022), y exponer las cifras semestrales o anuales al momento para informar y concientizar sobre este fenómeno violento.

En este sentido, se puede observar un patrón en las noticias, por el cual las palabras como "asesinato", "muerte" o "acusado" son comunes, en lugar de "femicidio", "femicida" o “feminicida” (durante el período de 2014-2023 que cubre la base de datos de noticias judiciales). Únicamente 47 noticias de las 370 vinculadas a femicidios mencionan el término en sus titulares.

En segundo lugar, las personas comunicadoras deben consultar a personas expertas en violencia basada en género que permita profundizar en los hechos y contribuir a la explicación desde su conocimiento técnico. En el período de estudio, solo 7 artículos son de opinión sobre el femicidio: 4 de parte de personas externas al proceso judicial, quienes no mencionan su experiencia en temas de violencia de género, y 3 de familiares de las víctimas y personas funcionarias del sistema judicial.

En tercer lugar, se recomienda difundir líneas de ayuda, para que las personas que atraviesan violencia basada en género puedan acceder a esta información y conozcan distintas vías para pedir ayuda (ONU Mujeres, 2023). Sin embargo, no se identificaron noticias que cumplan tal recomendación. Al respecto, la página *web* del Observatorio de Violencia de Género y Acceso a la Justicia contiene un directorio de oficinas de ayuda para brindar atención a víctimas de violencia en todo el país.

Por último, al momento de complementar la nota periodística, se recomienda buscar imágenes y vídeos que no contribuyan a la revictimización de la mujer y su familia. Lo anterior para mantener el respeto hacia la víctima y su imagen, considerando el consentimiento de la familia en el uso de estas (Urcuyo, 2024a).

En el estudio se logró determinar que casi una de cada siete noticias (15,1%) contribuyeron a la revictimización de la mujer asesinada producto del tratamiento inadecuado de sus titulares. De éstas, poco más de la mitad (57,1%) culpabilizan a las víctimas; es decir, se centran en las acciones de las mujeres víctimas que pudieran haber provocado la reacción del femicida. Por ejemplo: "haber generado celos, abandonar el hogar, separarse de la pareja, no realizar los deberes domésticos, entre otras causales que no hacen más que reforzar los estereotipos de género” (Cepaz, 2020 citado en Calderón et al, 2024). Cuatro de cada diez noticias (42,9%) son características de un enfoque amarillista que responde, entre otras cosas, a la espectacularización de la violencia contra las mujeres como un fenómeno normalizado.

La cobertura mediática debe ser incorporada como parte de las acciones de prevención, atención y sanción de los femicidios. Se pueden consultar una serie de lineamientos y guías de abordaje para las personas periodistas (Urcuyo, 2024a; ONU Mujeres 2023; CEPAZ, 2020). Sin embargo, el reto mayor se encuentra en las estrategias de mercadeo de los medios de comunicación, la gran mayoría de formato digital.

Recuadro 2
Análisis de contenido de redes sociales, femicidios y proceso judicial

La investigación desarrollada por Urcuyo (2024a) determinó que la estrategia discursiva sensacionalista identificada en un 51% de las noticias, junto con la escenificación y espectacularización, teatraliza hechos atroces. También, se destaca cómo la reiteración casi obsesiva por resaltar detalles de los cuerpos y la tortura que sobrellevaron perjudica no solo la libertad y dignidad de las mujeres, sino que establece un marco cognitivo para que otros medios hagan de *copycats* (copia o inspiración para hacer lo mismo) y podría promover efectos negativos en personas lectoras (Urcuyo, 2024a).

Quedó en evidencia cómo los medios de comunicación seleccionan, excluyen o silencian ciertos temas políticos en el debate informativo. En este caso, es notorio un orden social que invisibiliza a ciertas personas y las traslada a un segundo plano. Ser mujer, migrante y adulta no parece generar mayor ruido y atención mediática (Urcuyo, 2024a). En este tratamiento diferenciado, reforzado por los medios, también se evidenció que los casos que generaron más noticias y seguimiento significativo en las agendas mediáticas sobre los procesos judiciales durante el año 2020 fueron los de María Luisa Cedeño y María Tacsan. Se observa que el 82% de las noticias son sobre María Luisa, versus el 18% de las noticias relacionadas con el femicidio de María Tacsan.

En ambos casos, hay un énfasis especial a la sobreexposición de pruebas y evidencias y a la lectura de las sentencias, las cual continúan objetivando a las mujeres víctimas, desde las estrategias discursivas de espectacularización (Urcuyo, 2024a) y sensacionalismo (Ananías y Vergara, 2016) que a su vez generan violencia mediática sexista para vigilar los cuerpos de las mujeres, ejerciendo poder y control por parte del medio.

En términos de contenido de redes sociales, los comentarios más comunes por parte de las personas usuarias se refieren al proceso judicial. Las personas consumidoras de Facebook que interactúan en estas noticias asumen un rol de justicieras, estudiando y tutelando aspectos del proceso judicial (falta de justicia, corrupción mediática) y de la propia cobertura mediática del mismo (relaciones entre medios e imputados) desde un rol de denuncia. Es importante destacar que también hay grupos de familiares que, en un ejercicio democrático, crean páginas para exigir el cumplimiento de los deberes del Estado, estableciendo un sistema de pesos y contrapesos, pidiendo cuentas y exigiendo prontas respuestas.

De todos los comentarios analizados, en 1.001 se le atribuye la responsabilidad del femicidio al agresor, en 463 se menciona al Poder Judicial como responsable y en 149 se señala a los medios de comunicación. También en los en grupos de discusión, se desprende una preocupación y desconfianza en el Poder Judicial. Las mujeres, algunas de ellas sobrevivientes de violencia, reconocieron la necesidad de mejorar el acceso a la justicia por parte del Estado, destacando que no hay un personal especializado para abordar los casos de violencia contra las mujeres con una perspectiva de género.

Posterior a la lectura de la sentencia, la retórica gira en torno a la apelación de “la justicia divina que todo lo puede”, para pelear contra la impunidad. Sin embargo, no se menciona la Ley de reparación integral para personas sobrevivientes de femicidios ni se destacan acciones resarcitorias. Previo a la lectura del “por tanto” las personas usuarias expresan el tipo de justicia que los imputados deberían recibir, abogando por un linchamiento, punitivismo y sanciones fuertes.

En los grupos de discusión, se destacó el impacto concreto de estas notas y comentarios en las vidas de las mujeres. Ellas mencionan como estos casos le han provocado repercusiones a largo plazo, tienen miedo de caminar por la calle, de viajar solas y han tenido afectaciones emocionales y psicológicas a partir de la cobertura que han hecho los medios de comunicación y la ausencia institucional que perciben.

A pesar de estas diferencias en el abordaje y en las discusiones en el espacio digital, en ambos casos, después de que se cierra el proceso judicial, la conversación pierde fuerza y todo vuelve a una aparente normalidad. En este sentido, cuando se acaba el juicio, no hay noticias que exploren las causas de la violencia estructural detrás de los femicidios. Después de los procesos penales predomina un silencio y una falta de cobertura sin acciones futuras y concretas de prevención.

Fuente: Elaboración propia con datos de Urcuyo, 2024b.

Desarrollo de la normativa costarricense asociada a la prevención, atención, sanción y reparación de las violencias contra las mujeres

A partir de las últimas décadas, la violencia contra las mujeres ha sido incorporada en el campo del Derecho a nivel global, aunque es una problemática con una historia antigua que había sido no solo invisibilizada, sino además justificada en el marco de una sociedad patriarcal de raíces milenarias[4]. En Costa Rica, en legislaciones anteriores, el diseño de la ley penal habilitaba la exoneración de responsabilidad para el hombre que mataba a la mujer por causas asociadas a configuraciones de género. Por ejemplo, el Código de Carrillo con la minimización o exención de culpa por exceso en el maltrato del marido hacia la mujer; así como la legislación de enjuiciamiento criminal en la era liberal (finales del siglo XIX y muy afín a la legislación española de la época). También, el artículo 10 del Código Penal de 1880 eximía de responsabilidad al marido que mataba o hería a la mujer por encontrarla en adulterio[5]. Igual lo regulaba el artículo 32 del Código Penal de 1924, y facultaba la exención para el padre o hermano que mataba a su hija o hermana al encontrarla en ilegítimo concúbito[6]. Igualmente, el artículo 210 del Código Penal de 1941 reducía considerablemente la pena para quien mataba a su cónyuge por encontrarle en ilegítimo acto carnal[7] (Guillén, 2024).

Así, por medio de la ley operaba una legitimación institucional y social de la muerte de la mujer como símbolo de control y dominación, configurándose un comportamiento histórico de impunidad en materia de femicidios. Aunque dichas normas, en su formalidad, fueron extinguidas del ordenamiento, representan un antecedente importante en el acercamiento a la realidad jurídica actual en materia de femicidios (Guillén, 2024).

Desde la década de 1990, Costa Rica desarrolló normativa interna vinculada a violencia contras las mujeres y las niñas en distintos ámbitos de la vida pública y privada. Desde el año 2007 se cuenta en el país con la LPVcM (nº 8589), la cual tipificó expresamente el femicidio. Su

[4] "En Roma el Pater Familiae era el jefe, el jerarca, pero la familia se entendía de manera extensa y no necesariamente los unía una relación sanguínea. El Pater Familiae tenía toda la representación y la potestad civil y jurídica de la familia, los demás eran Alieni iuris, o sea no eran sujetos de derecho". CIJUL, "La Familia desde la perspectiva de género", 2008, p. 12. La Familia Desde La Perspectiva De Género (ucr.ac.cr)

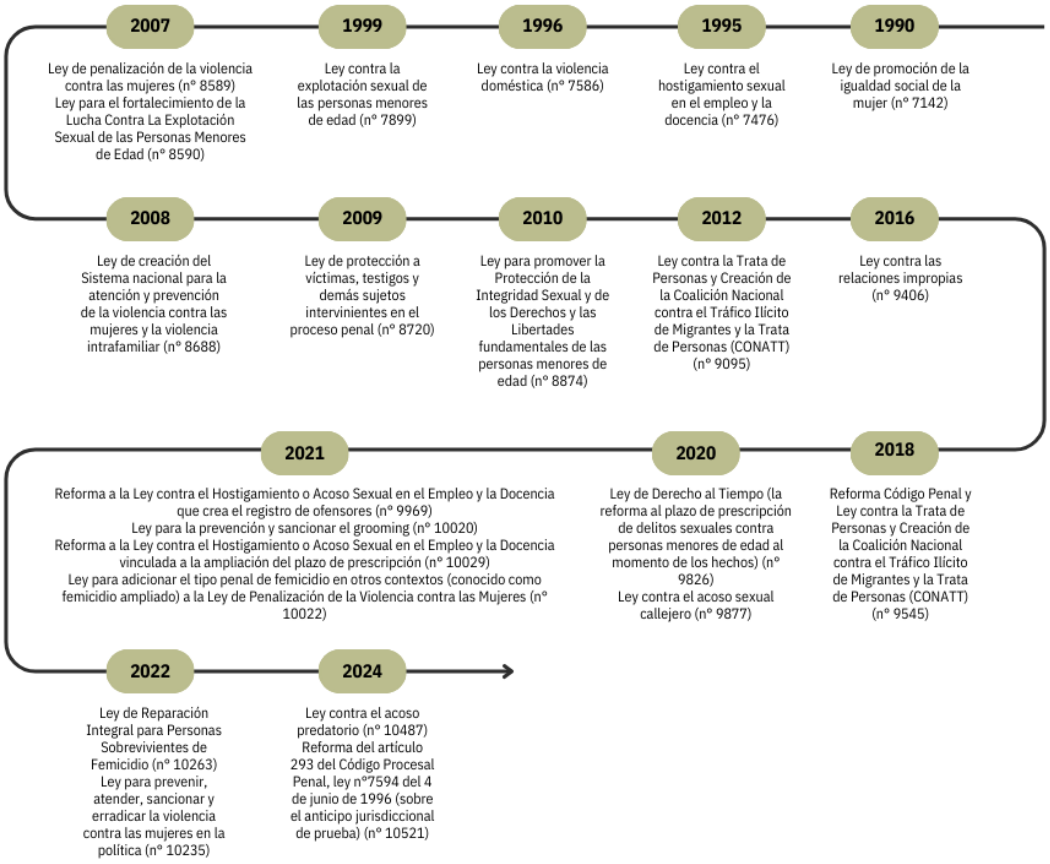
[5] Asamblea Legislativa de Costa Rica, "No. 0: Código Penal de 1880; 27 de abril de 1880".

[6] Asamblea Legislativa de Costa Rica, "No. 11: Código Penal de 1924; 22 de abril de 1924".

[7] Asamblea Legislativa de Costa Rica, "No. 368: Código Penal de 1941; 21 de agosto de 1941".

aprobación fue el resultado de largos procesos de lucha de organizaciones de mujeres por contar con legislación especial en esta materia, atendiendo a su vez los mandatos de la Convención Belém Do Pará (Ibid). Desde 1990 a la fecha, la Asamblea Legislativa ha aprobado diversas iniciativas que crean legislación o modifica la existente (figura 2).

Figura 2
Normativa aprobada por la Asamblea Legislativa de Costa Rica sobre prevención, atención, sanción y reparación de las violencias contra las mujeres, según año de vigencia. 1990-2024



Fuente: Segura, 2024 con información del Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ) y Achoy, 2024.

Desde principios de la década de los años 2000 se observa un reforzamiento de la legislación vinculada con la respuesta institucional que debe implementar el Poder Judicial en materia de atención a la violencia contra las mujeres. Como parte de ello, según lo ha explorado este estudio, no solo se han creado tipos penales que sancionan conductas de este fenómeno delictivo, sino que también se han aprobado disposiciones para que se desarrollen medidas administrativas en beneficio de las víctimas.

Esas disposiciones se han materializado por medio de la creación de instancias, normativas, políticas y acciones variadas. El estudio que se presenta a continuación pretende compilar estos avances de tal forma que se cuente con un panorama menos disperso de cuáles son las capacidades institucionales del Poder Judicial para atender esta problemática.

El presente estudio se efectúa, pues, en una época en la que, a diferencia de algunas décadas atrás, el país ha aprobado una legislación especializada, desde la cual se ha fortalecido la previsión normativa de la justicia penal para atender asuntos asociados a violencia contra las mujeres. No obstante, más allá de la aprobación legislativa, resulta necesario estudiar la eficacia y efectividad en la implementación de estas normas. Para ello, este estudio se aproxima por medio de dos investigaciones empíricas destinadas a conocer, por un lado, el estado de las capacidades institucionales del Poder Judicial para su implementación y para la protección de las mujeres en situaciones de violencia; y, por otro, las estadísticas judiciales que se han generado como producto de estas leyes.

Capacidades institucionales del Poder Judicial en materia de violencia contra las mujeres

El país ha desarrollo normativa en materia penal especializada en la sanción de las conductas asociadas a la violencia contra las mujeres y los delitos sexuales, tal como se mencionó en el capítulo anterior. La implementación efectiva de esos tipos penales se deposita en las instituciones encargadas de su aplicación, dentro de las cuales resalta por su papel clave el Poder Judicial.

Este capítulo estudia las capacidades institucionales de las diversas dependencias judiciales que tienen responsabilidad en el diseño, implementación, ejecución y cumplimiento de las medidas que se emiten para proteger a las víctimas de violencia y delitos sexuales contra las mujeres.

La investigación se limitó al Poder Judicial, pese a que la institucionalidad pública encargada del tema va más allá e involucra a todos los poderes del Estado. Sin embargo, con los recursos de tiempo y recursos disponibles, no fue posible abarcar toda la institucionalidad relevante, lo que queda como una tarea pendiente para futuros estudios. Aún en el caso del órgano judicial, se reconoce que es un conglomerado de entidades que comprende los tribunales, los órganos auxiliares de justicia, los órganos administrativos y el gobierno judicial liderado por la Corte Suprema de Justicia.

Múltiples instancias y dependencias participan en varias partes del proceso judicial, ya sea emitiendo las medidas, implementándolas o supervisando su ejecución. Este estudio analiza las capacidades institucionales que hacen referencia a las condiciones necesarias para que una entidad pueda alcanzar las metas y objetivos que le corresponden.

La literatura ha desarrollado diversas concepciones sobre la capacidad institucional, ejes para su análisis e indicadores para su evaluación (Rosas, 2019). Este concepto se define como “la habilidad de las instituciones para desempeñar sus funciones, resolver problemas, fijar y lograr objetivos” (Fukuda-Parr et al., 2002, citado por Olivera y Castro, 2011).

Dinamismo en las acciones institucionales se concentra en espacios de capacitación

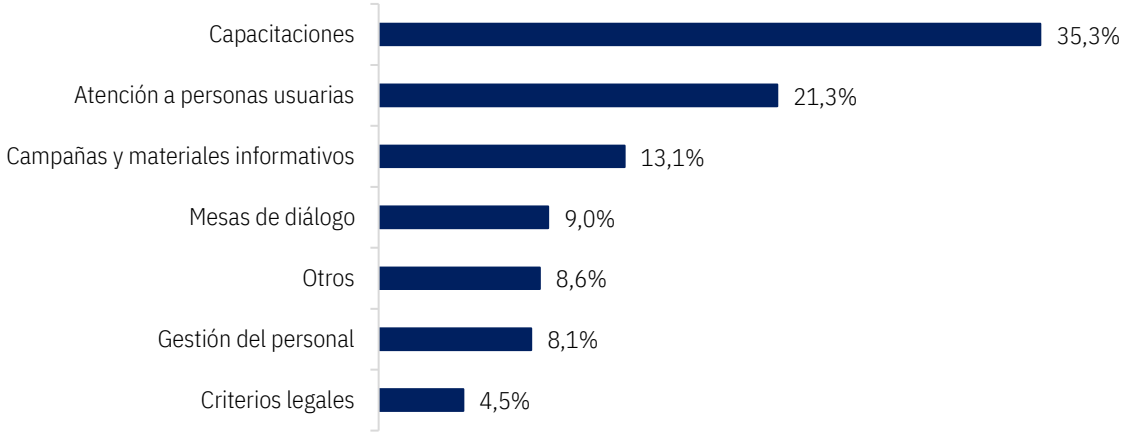
En el Poder Judicial existen múltiples instancias que emiten medidas para favorecer la atención y respuesta en casos de violencia contra las mujeres. Esto es positivo, porque representa un conjunto global de esfuerzos interdependientes para el abordaje de este tema; pero también podría representar desafíos de articulación frente a las necesidades reales de las víctimas.

Esta investigación se concentró en identificar y compilar las medidas tomadas por las oficinas judiciales en materia de violencia contra las mujeres entre 2017 y 2022. Para ello, se recopilaron todas las acciones realizadas por las oficinas judiciales en esta materia y publicadas en los documentos oficiales de la Corte Plena, el Consejo Superior, la Comisión de la Jurisdicción Penal, la Comisión de Género, la Secretaría Técnica de Género, el Ministerio Público y la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito. Luego de la revisión de 1.141 documentos se contabilizaron 221 medidas en materia de violencia contra las mujeres entre 2017 y 2022.

Se encontró que un 75% de las medidas son de carácter interinstitucional; esto significa que son medidas aprobadas por el Poder Judicial en conjunto con otras instituciones, por lo que la gestión de estas intervenciones no está en manos exclusivas del órgano judicial y depende de la voluntad y compromiso de otros entes gubernamentales para su avance y continuidad.

El análisis evidenció que las capacitaciones, la atención a personas usuarias, y las campañas y materiales informativos son los tipos de medidas predominantes que pone en marcha el Poder Judicial para crear mayores capacidades de atención de casos de violencia contra las mujeres. Y, que lo hace mediante sus distintos órganos auxiliares y despachos (gráfico 2).

Gráfico 2
Distribución porcentual de las medidas en materia de violencia contra las mujeres, por tipo de medida. 2017-2022



Fuente: Calderón, 2024 con datos de la base del inventario de medidas en materia de violencia contra las mujeres 2017-2022 del PEN, 2023b.

Las capacitaciones son el tipo predominante de medidas. Según datos brindados por la Defensa Pública, la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público y la Escuela Judicial, se realizaron 474 capacitaciones en materia de violencia contra las mujeres entre enero de 2015 y junio de 2023, las cuales contaron con una participación total de 10.819 personas: 69% mujeres y 31% hombres (cuadro 2). La disparidad en los porcentajes muestra que los hombres participan menos en estas preparaciones, contemplando la totalidad de hombres y mujeres que trabajan en cada instancia.

Estos datos visibilizan que la capacitación en materia de violencia contra las mujeres, aunque ha alcanzado a una importante población, está, sin embargo, primordialmente concentrada en pocas instancias. De la mano con lo expuesto en el taller de consulta realizado el 25 de octubre de 20238, es necesario sensibilizar su enfoque para que integre también a poblaciones en condiciones particulares de vulnerabilidad.

Además, en este taller realizado con personas operadoras judiciales y representantes de organizaciones no gubernamentales, se identificó la necesidad de incrementar la sensibilización sobre el tema. A modo de ejemplo, se hizo referencia sobre la especial relevancia que tiene el rol de la comunicación institucional del Poder Judicial y cómo debiera constituirse en un eje fundamental para el acceso a la justicia. Lo anterior, a propósito de la problematización que se genera cuando es preciso llevar estos mensajes, capacitaciones y medidas en general a poblaciones en condición de vulnerabilidad como mujeres indígenas o migrantes.

Cuadro 2
Cantidad de personas participantes en capacitaciones, por instancia según sexo. 2015-2023

Instancia responsable	Cantidad de capacitaciones	Sexo		
		Mujeres	Hombres	Total
Defensa Pública	19	121	90	211
Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público	41	468	314	782
Escuela Judicial	414	6.857	2.969	9.826
Total	474	7.446	3.373	10.819

Fuente: Calderón, 2024 con datos de la Defensa Pública, 2023, Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, 2023 y la Escuela Judicial, 2023.

La falta de información impide conocer si estas capacitaciones se implementan efectivamente en la atención a las personas usuarias. En este punto es importante anotar la necesidad de que la oferta de capacitación institucional se enlace a los testimonios, realidades y experiencias de las víctimas, con el propósito de que se atiendan sus principales necesidades.

[8] Esta sesión tuvo como objetivo presentar los hallazgos preliminares de la sistematización y procesamiento de datos estadísticos. Además, se realizaron grupos de trabajo para definir el efecto, la implementación y el mecanismo de seguimiento de cientos de medidas judiciales en materia de violencia contra las mujeres.

La literatura especializada en políticas públicas apunta a que los mecanismos de evaluación son, esencialmente, los principales indicadores para medir su eficacia y efectividad. En su mayoría, las políticas que tienen bajos niveles de implementación carecen de esos mecanismos y, por ello, se recurre a otro tipo de fuentes, como testimonios y experiencias, para informar el impacto real sobre el interés público (Mueller, 2020; McConnell, 2015).

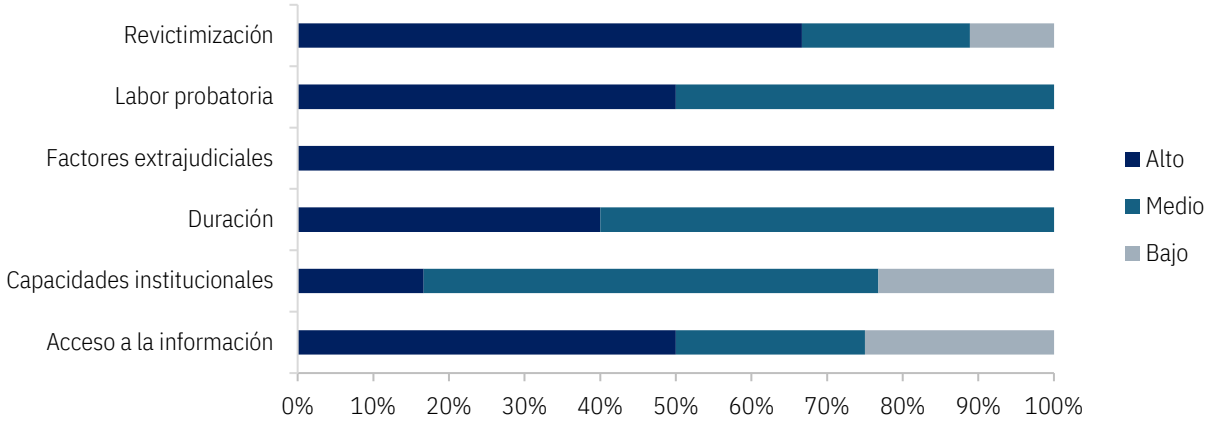
Con respecto a los mecanismos de control, se identificó que el 62% de las acciones tenían previsiones para su supervisión y cumplimiento. Entre esos mecanismos se destaca la presentación de informes, oficios y registros al Consejo Superior (41%), la Comisión de Género (21%) y la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia (15%). No obstante, se carece de datos para verificar si el mecanismo es, en sí mismo, efectivo y aplicado.

De hecho, en el taller de consulta se mencionó la "reiteración" de las medidas, debido a los flujos de traslado y movimiento de personal. Sobre el tema, las personas participantes señalaron que *"la reiteración de circulares es algo sumamente común dentro del Poder Judicial porque hay funcionarios nuevos, que no están acostumbrados a las circulares".* Es decir, incluso si se toma como referencia la amplia cobertura alcanzada por capacitación, según consta en los registros institucionales, ese esfuerzo parece estar afectado por el constante ingreso de nuevo personal o traslados, para lo cual la institución ha tenido que recurrir a una constante repetición de sus propias disposiciones para ponerlas en conocimiento de las personas encargadas de su puesta en marcha frente a las víctimas.

En esta investigación se efectuó un esfuerzo para asociar las medidas institucionales arriba comentados con un tema sustantivo: ¿cómo esas medidas se vinculan a los riesgos de tutela que enfrentan las víctimas, que fueron definidos en la sección anterior de este documento?

El principal riesgo de tutela vinculado a las medidas identificadas es el de la falta de capacidades institucionales con 198 medidas, de las cuales 33 son de efecto alto, representando la mayor cantidad de medidas segregadas por riesgo y efecto (gráfico 3). Mientras que los otros cinco riesgos de tutela tienen en promedio 2,6 medidas de alto efecto entre 2017 y 2022.

Gráfico 3
Distribución porcentual de las medidas en materia de violencia contra las mujeres, por riesgo de tutela, según tipo de efecto[a/]. 2017-2022



a/ Alto: medidas con efectos directos sobre los derechos fundamentales de las personas y la provisión de servicios públicos. Por ejemplo: atención a usuarios y virtualización de trámites y servicios. Medio: medidas administrativas y operativas con efectos sobre las entidades y sus funcionarios públicos. Por ejemplo: capacitaciones, gestión del personal y mesas de diálogo. Bajo: medidas administrativas con efectos no identificados. Por ejemplo: campañas, materiales informativos, entre otros.
Fuente: Calderón, 2024 con datos de la base del inventario de medidas en materia de violencia contra las mujeres del PEN, 2023b.

Las capacidades institucionales son amplias cuando se trata de emitir medidas para la atención y respuesta de la violencia contra las mujeres; pero, según se mencionó en el taller de consulta *"hay acciones y medidas que en sí mismas se agotan"*. No obstante, si se profundiza sobre la capacidad institucional de implementar y evaluar esas medidas, los datos reflejan una facultad más reducida en ese ámbito del Poder Judicial. Esto podría relacionarse con la ausencia de recursos humanos y financieros suficientes para implementar las medidas desde un sentido estructural e integral más amplio.

Los esfuerzos para mejorar la capacidad institucional en este ámbito podrían prestar atención a las medidas de alto impacto, atribuyéndoles los recursos necesarios y los mecanismos de control requeridos para supervisar su cumplimiento. Además, en el taller de consulta las personas participantes coincidieron en que *"hay acciones pequeñas que, a nivel general, podrían ser de gran impacto"*. Por ello, debe ser prioritario identificar y replicar aquellas acciones afirmativas que están ocurriendo desde la experiencia individual de los despachos judiciales y que merecen una atención institucional para potenciar su efecto de alcance y efectividad.

Un detalle importante es que en el taller de consulta también se hizo mención del carácter personalista de las medidas institucionales: *"Algunas medidas están desfasadas y obsoletas, pero no porque no hayan servido en su momento, sino porque hay personas que ya no son parte del Poder Judicial o ya no son del todo aplicables".* Es decir, las personas que participaron de esta sesión resaltaron que, en alguna medida, las capacidades institucionales están asociadas a las personas que laboran en puestos clave y su rol en la emisión e implementación de las políticas en mención. No obstante, cuando estas personas dejan su cargo, se limita la capacidad institucional porque la medida o política no es posteriormente asumida ni cuenta con mecanismos administrativos de seguimiento e implementación.

Lo anterior se refuerza cuando, en relación con algunas de las medidas, las personas participantes del taller hicieron anotaciones como *"(...) siempre ha sido una mujer preocupada por temas de género, todas sus implementaciones son positivas"* para referirse a estas disposiciones. Es decir, incluso tratándose de medidas institucionales como es el caso de una política, un informe o una determinada acción, las personas asociaron el éxito de su implementación a determinadas funcionarias y ello coincide con las manifestaciones asociadas al componente personalista del que dependen las capacidades institucionales. Además, este aspecto trasciende al Poder Judicial, porque en el propio taller se mencionó que hay medidas de carácter interinstitucional obstruidas por cambios en las jerarquías, por ejemplo, *"existen intentos de articular, pero cada vez que cambia la jerarquía del PANI, hay que empezar de nuevo".*

El hecho de que la implementación de las políticas, medidas o disposiciones para proteger a las víctimas dependa de las personas, generalmente mujeres, que ocupan los distintos cargos representan, en sí mismo, un riesgo institucional que erosiona las capacidades institucionales para responder a este fenómeno.

Instancias judiciales de alto rango contribuyen en la perspectiva de género con limitados recursos y articulación

En el estudio se identificó que existe una estructura y organización institucional relacionada con la respuesta del Poder Judicial con la violencia contra las mujeres, compuesta por múltiples instancias, varios tipos de dependencias y divergencias en sus jerarquías. Un levantamiento de medidas asociadas a esta respuesta identificó la creación de la Comisión de Género, la Subcomisión de seguimiento a la LPVcM, la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia (misma que alberga al Observatorio de Violencia de Género contra las mujeres y Acceso a la Justicia), la Sección Especializada en violencia de género, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes del Organismo de Investigación Judicial, las Plataformas Integradas de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV) y la Fiscalía Adjunta de Género y Delitos Sexuales; así como la participación en los Comités Locales para la Atención Inmediata y el Seguimiento de casos de alto riesgo por Violencia contra las Mujeres (CLAIS).

El estudio presenta como hallazgo que las capacidades para brindar una respuesta institucional a la violencia contra las mujeres están asociadas a la emisión de medidas provenientes de diversos tipos de instancias y dependencias del Poder Judicial. Cada una de ellas está delimitada por el ámbito institucional a su cargo y en el marco de la estructura organizacional. La literatura sobre el tema también ha señalado la importancia de que, aun existiendo múltiples instancias

emisoras de reglas y normativa, exista una coordinación y articulación que promueva fluidez y efectividad en la gobernabilidad sobre esas medidas (Torres, 2006). A pesar, pues, de la existencia de múltiples instancias y medidas para fortalecer las capacidades en esta materia, es necesario que la estructura institucional reconozca la importancia de que esos procesos estén primordialmente orientados hacia las víctimas.

A nivel estructural, el Poder Judicial cuenta con dos instancias de alto rango para la emisión de políticas específicas asociadas a la perspectiva de género, así como a la prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres. La Comisión de Género, creada en 2001, tiene a su cargo la emisión de los lineamientos necesarios para la incorporación de la perspectiva de género en las labores de la institución y se apoya en la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia para los procesos de seguimiento y verificación de cumplimiento. En la estructura organizacional, esta comisión es la instancia que puede alcanzar el mayor ámbito de espacios del Poder Judicial, considerando que sus medidas impactan a una buena parte del entramado institucional y porque reúne a representantes de diversos ámbitos de la estructura organizacional que compone a la institución.

Por su parte, la creación de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia obedeció a una condición establecida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el contrato del segundo préstamo en el marco del proceso de modernización del Poder Judicial, que logró su consolidación permanente para ejecutar y brindar seguimiento a los acuerdos que emana la Corte Plena y la Comisión de Género en esta materia. A pesar de que se trata de una dependencia con tres ejes de trabajo (Área de Género, Área Legal y Observatorio de Violencia de Género contra las mujeres y Acceso a la Justicia) y que la cantidad de medidas se ha incrementado en el transcurso del tiempo, esa dependencia se desempeña con una cantidad limitada de 10 funcionarias para brindar apoyo a todas las instancias que conforma el Poder Judicial en los 3 ejes de trabajo antes indicados.

La documentación de las acciones del Poder Judicial fue sistematizada mediante el establecimiento del Observatorio de Violencia de Género contra las mujeres. Esta plataforma contiene un inventario del accionar judicial e integra indicadores estadísticos de cada tipo de violencia. Sin embargo, en el proceso de investigación se logró comprobar que, en algunas ocasiones, la actualización y publicación de los datos difiere con respecto a las estadísticas que emiten otras instancias como el Ministerio Público. Este desafío no es exclusivo de la Secretaría Técnica, sino que se trata de un reto institucional del Poder Judicial en materia de integridad y de información estadística. No obstante, cuando se trata de analizar la situación real de poblaciones vulnerables, como es el caso de la violencia contra las mujeres, dicha circunstancia complejiza más la atención y respuesta institucional oportuna y eficaz.

En el funcionamiento de estas instancias el Poder Judicial invierte recursos humanos, de infraestructura y financieros. Sin embargo, los datos disponibles resultan insuficientes para estudiar a profundidad las capacidades de cada una de estas iniciativas institucionales o interinstitucionales de las que forma parte del Poder Judicial. En los documentos de presupuestos y de recursos humanos no es posible desagregar cuánto se dirige a esta temática, salvo excepciones.

Para más información sobre las capacidades institucionales en el Poder Judicial, véase Segura et al, 2024.

Sin la cantidad suficiente de funcionariado ni de recursos económicos, resulta materialmente imposible que alguna instancia estatal pueda cumplir su cometido, a pesar de cualquier esfuerzo extraordinario de personas específicas. Es importante recordar que el planteamiento, creación, recaudación de recursos y ejecución de presupuestos públicos está íntimamente vinculado a poder cumplir con la materialización de los Derechos Fundamentales y Humanos de la población, que el Estado no es un fin en sí mismo. A esta teoría se le denomina la Hacienda Pública en sentido dinámico (Segura, 2021).

De acuerdo con Catania (2005), la Hacienda Pública en sentido dinámico es "la actividad financiera del Estado como proceso dirigido a obtener recursos y realizar el gasto público, mejor expresado como sistema de recaudación de ingresos para solventar el gasto público demandado por la atención de los cometidos básicos del Estado" y para tutelarla no se debe tomar en cuenta únicamente la percepción de los tributos, sino que también las defraudaciones en sistemas de reintegros y devoluciones.

Dentro de las obligaciones estatales, principalmente recogidas en la Convención Belem do Pará y que incluso tiene asidero constitucional nacional, es que las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia, así como a prevención, atención, sanción y reparación ante la violencia ejercida en su contra. Al tutelar la actividad financiera estatal, como bien jurídico intermedio, se están finalmente tutelando la materialización de Derechos Fundamentales y Humanos de la población (Segura, 2021).

"Las llamadas finanzas públicas (hacienda pública, economía financiera del sector público, actividad financiera del Estado) se encuentran gobernadas por el Derecho (derecho constitucional, pactos internacionales en materia de derechos humanos, derecho tributario, derecho del crédito público, derecho patrimonial del Estado y derecho presupuestario y del gasto público) y cumplen tres funciones constitucionales: 1) proveer prestaciones y bienes públicos y sociales a los ciudadanos; 2) promover el desarrollo económico; y 3) promover el desarrollo humano y la justicia social. Dichas tres funciones (instrumentos, medios de acción), a su vez, con una finalidad constitucional común y única: efectivizar los derechos de los ciudadanos a la salud, a la educación, a la cultura, a la seguridad social, a la vivienda y a la justicia (...)" (Corti, 2003).

El mismo sentido, debemos recordar que, desde el punto de vista del Derecho Presupuestario y la utilización de los recursos públicos, es fundamental tomar en cuenta que existe una estrecha relación entre el Derecho Presupuestario y los Derechos Humanos. Tal y como sostiene el connotado jurista argentino Horacio Corti (2011):

"La ejecución Administrativa del presupuesto consiste, sencillamente en el conjunto de hechos y actos jurídicos llevados a cabo por las instituciones públicas, a fin de resguardar los derechos fundamentales". "Una de las finalidades de la Ley de Presupuesto es la de hacer efectivo el conjunto de los derechos humanos, de ahí que ella devenga inconstitucional si no cumple con dicho cometido o si, al desarrollarse lesiona de alguna manera un derecho fundamental".

Desarrollo de espacios para la atención de las víctimas presenta desafíos de cobertura

El Poder Judicial cuenta con tres espacios para la atención y respuesta institucional de la violencia contra las mujeres: la Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (Pisav), la Oficina de Defensa Civil de la Víctima (ODCV) y la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD).

Los espacios institucionales del PISAV son una ventana de oportunidad para el fortalecimiento de las capacidades del Poder Judicial en esta materia. En esta plataforma se busca reunir a todos los despachos y dependencias vinculados a la atención y sanción de la violencia contra en una misma ubicación física, con el propósito de que la víctima no se vea obligada a desplazarse a diversas oficinas para recibir atención. Tratando de prevenir la revictimización y brindar un abordaje integral, de modo que en un solo espacio físico es posible encontrar varias oficinas judiciales para brindar un servicio interdisciplinario e interinstitucional a víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, así como aquellos servicios dirigidos a personas usuarias de la materia de pensiones alimentarias.

Por su parte, la Oficina de Defensa Civil de la Víctima es un ente encargado de representar a las víctimas de delitos de manera tal que puedan presentar una acción civil resarcitoria (ACR). Ello les implica la posibilidad de solicitar una compensación económica a la persona imputada por los daños y perjuicios causados con su conducta delictiva. En el caso de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD), el Poder Judicial delega en esta dependencia la atención y protección a las víctimas y demás personas vinculadas a los procesos penales en el país que así lo requieran.

No obstante, el estudio identificó desafíos pendientes para que las capacidades institucionales asociadas a estas dependencias puedan tener mayor impacto en la realidad que enfrentan las víctimas. El primer punto por abordar se trata de un aumento en la descentralización territorial de los servicios. A modo de ejemplo, las PISAV solamente tienen presencia en tres ubicaciones GAM (La Unión, Pavas y San Joaquín de Flores) y una ubicación fuera de la GAM (Siquirres). La ODCV y la OAPVD tienen mayor presencia territorial y atienden casos de todos los circuitos judiciales del país, sin embargo, la cantidad de oficinas es limitada y no están en todas las comunidades donde existen otras oficinas judiciales.

Adicionalmente, en el estudio se identificaron algunas dificultades en el acceso a los servicios de estas oficinas. Por ejemplo, para acceder a la atención que brinda la Oficina de Atención y Protección de la Víctima del Delito, existe una condicionante de carácter legal: la víctima está obligada a interponer la denuncia en contra del presunto agresor. Al respecto, se plantean dos posiciones encontradas. Por un lado, se cree que ese requisito limita la posibilidad a muchas víctimas que, en forma inmediata y por el carácter de conmoción de este tipo de violencia, aún no se encuentran preparadas para la denuncia, pero sí requieren del resto de servicios integrales que se prestan en este tipo de oficinas. Por otro lado, se considera que cuando se abre la posibilidad de atender víctimas sin interposición de denuncia formal, se puede estar abriendo demasiado la oferta del servicio, sin ninguna consecuencia para quien denuncie y sin un marco formal institucional que lo procese adecuadamente.

En cuanto a la reparación patrimonial que asume la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, los datos muestran que, de las 1.026 acciones civiles resarcitorias presentadas por la ODCV entre 2015 y 2022, solo 238 fueron declaradas con lugar. Es decir, solo se alcanzó un 23% de respuesta satisfactoria para las víctimas mujeres que así lo solicitaron en este periodo. En el proceso de investigación se consultó a esta dependencia acerca de los criterios para solicitud y acceso a los servicios, así como los aspectos determinantes que utiliza para formalizar la interposición de la ACR. En ese sentido, la ODCV señaló que se valora la denuncia en cuanto al dato personal sobre el salario del imputado, profesión, ingreso mensual, así como la titularidad sobre bienes muebles e inmuebles, participación en sociedades, registros en CCSS, y cualquier otro dato adicional que se vislumbre dentro del expediente para analizar la viabilidad de una eventual reparación patrimonial.

En el taller de consulta se problematizó en torno a la sistematización de los datos y de la información, pues las personas participantes mencionaron que esta Oficina no contó con plataforma informática para el registro estadístico hasta el año 2018. Realizar un análisis previo a ese año presenta dificultades debido a que la información era consignada manualmente por la Oficina.

Finalmente, en los diversos talleres que se llevaron a cabo para este estudio, las personas participantes coincidieron en la necesidad de pensar si el Poder Judicial debe contar con una instancia especializada para la representación legal gratuita de las víctimas. Y la mayor deuda que se puede identificar en este tema es la ausencia de representación legal gratuita para las víctimas de escasos recursos económicos, dado que la persona imputada cuenta con la Defensa Pública, sin embargo, el Ministerio Público (Fiscalía) no representa a las víctimas, sino al poder punitivo estatal o poder de castigar del Estado, de conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio Público. A criterio de las personas expertas que participaron en los talleres, esa circunstancia desequilibra procesalmente a las partes.

Desde el año 2008, se cuenta con una instancia especializada como la Fiscalía Adjunta de Género. Los datos obtenidos reflejan que solo un 29,7% de las oficinas del Ministerio Público tienen una persona nombrada exclusivamente para conocer la materia de violencia contra las mujeres y la mitad de las fiscalías territoriales cuenta con una persona fiscala auxiliar nombrada para llevar este tipo de casos. Dado que los casos de violencia sexual y penalización de la violencia contra las mujeres pueden ser conocidos tanto en la Fiscalía Adjunta de Género como en cualquier fiscalía territorial, de flagrancia y del PISAV, no es posible tener un dato fidedigno de cuánta es la cantidad de expedientes entrados o terminados por persona fiscala en 2019 o 2022 en estas materias.

En el taller de consulta, diferentes sectores coincidieron en el hecho de que las medidas institucionales en muchas ocasiones distan de las necesidades reales que enfrentan las víctimas. Existe una multiplicidad de factores que parecen estar distanciando a las víctimas respecto de la efectividad de las medidas diseñadas para atender sus necesidades. En esta actividad resultó claro que, a propósito de ese distanciamiento, las respuestas que requieren las víctimas no son necesariamente satisfechas, sino que se canalizan en alguna medida por otras vías y mecanismos que les auxilian desde lo externo de la institucionalidad judicial.

La información de carácter cualitativo recopilada por medio de las manifestaciones del taller concluye en la importancia de considerar un enfoque interseccional de las diferentes poblaciones de mujeres y las garantías que se les da para el acceso a la justicia. Este aspecto lo encuentran en su mayoría a través de organizaciones sociales y espacios de la sociedad civil que brindan acompañamiento a las víctimas, pero no necesariamente en las medidas que presta el Poder Judicial a estas poblaciones.

Entre algunos de esos aspectos se encuentra la forma en la que las víctimas acceden, gracias a organizaciones sociales y entidades externas, a una comprensión del lenguaje aplicable en los procesos. Por ejemplo, algunas de ellas desconocen lo que representa e implica querellar; como consecuencia de esa situación, en el Ministerio Público se consigna un "no" en el espacio que corresponde a la indicación sobre si la víctima procederá con la querella. No obstante, esa falencia del sistema llega a ser atendida cuando la víctima se acerca a otros tipos de espacios en los cuales le brindan una mejor comprensión del término legal y del proceso penal en general.

Según relataron participantes del taller, un ejemplo de ello es lo que ocurre en una organización como Cefemina. A este espacio acuden mujeres antes y durante los procesos judiciales, normalmente víctimas de violencia doméstica a quienes se les han negado las medidas de protección o que renuncian por la escasa sensibilización. Por ejemplo: *"existe un recibimiento de los escritos con actos invasivos a la privacidad"*. Debe recordarse que ellas llegan en una posición de vulnerabilidad y el sistema judicial, las recibe con un lenguaje jurídico carente de sensibilización y que más bien les distancia de la respuesta judicial que requieren en ese momento.

Las mujeres se sienten violentadas, atacadas y revictimizadas porque el sistema les distancia de la comprensión acerca de lo que un proceso penal conlleva, como producto de los tecnicismos y la ausencia de efectividad de las medidas institucionales que han sido diseñadas para evitar tal situación. Se afirmó que sí hay normativa, pero no acceso efectivo a la justicia y, por ello, muchas no continúan con el proceso.

Aunque es positiva la existencia de espacios ajenos al Poder Judicial que auxilian a las víctimas, también es cierto que el sistema judicial no puede mantener ajeno de este tema, que también forma parte de su competencia institucional. Esto es así, porque también en el taller se destacaron defectos y riesgos cuando se acude a espacios externos al Poder Judicial. Un ejemplo de ello fue el caso de las defensorías sociales del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, las cuales fueron problematizadas porque, si bien son un espacio importante para brindar asistencia legal accesible a víctimas y tienen un potencial de cobertura, se indicó que *"no es cierto que lleven todos los casos, solo algunos. Eso es voluntario, sin paga, entonces dejan los casos y perdemos las capacitaciones porque luego van y defienden a los agresores*".

Frente a las garantías, los derechos y los compromisos a los que se encuentra obligado el Estado desde el plano constitucional y convencional, se destacó la necesidad de prever acceso a una representación legal gratuita para las víctimas, que tenga la posibilidad de querellar (presentar una acusación privada) los casos, más allá del rol del Ministerio Público.

A pesar de que algunas de las medidas institucionales fueron reafirmadas como necesarias y efectivas, también se destacó que muchas de ellas presentan obsolescencia, falencias en su implementación, seguimiento y supervisión. Las personas participantes en las diversas fases de este estudio coincidieron en la necesidad de que las medidas institucionales tomen como punto de partida las realidades y experiencias que enfrentan las víctimas cuando se acercan a buscar respuestas por parte de la institucionalidad judicial.

En resumen, el proceso de investigación acerca de las instancias y dependencias responsables en materia de violencia contra las mujeres refleja el necesario fortalecimiento en el abordaje, atención y posicionamiento prioritario de las víctimas, de modo que sus procesos puedan superar algunos de los obstáculos que actualmente existen en materia de acceso y calidad a los servicios integrales.

Balance general estadístico

El Poder Judicial registra los delitos relacionados con violencia de género en varias de sus plataformas estadísticas. En esta tercera sección del documento se presenta un panorama de las estadísticas judiciales disponibles relacionadas con las denuncias por violencia de género, de tal forma que se pueda documentar el volumen y comportamiento de estos casos en el tiempo, y en el territorio.

La información recopilada incluye indicadores de casos entrados, terminados, y duraciones y formas de terminación. Pese a diversas limitaciones, estas fuentes de información oficial disponible presentan un panorama para varios años del universo total de casos que tramita el Poder Judicial, con lo cual se puede dimensionar la gravedad del problema. El objetivo no es duplicar la sistematización ya existente en fuentes como el Observatorio de la Violencia o Infosegura, si no generar procesamientos con un ángulo distinto que pueden convertirse en indicadores de seguimiento a futuro.

La principal fuente de información utilizada en este capítulo se generó a partir de la información facilitada mediante el oficio 680-PLA-ES-2023, que corresponde al listado de expedientes de violencia contra las mujeres que se encuentren **terminados** o cerrados en los años 2019 y 2022 en todos los despachos jurisdiccionales de la materia penal en el país. En las fuentes de este capítulo se denominará “Base de datos PEN de casos terminados”. Un caso terminado no significa que concluyó el proceso judicial, si no que la oficina encargada del caso “lo cerró” en lo que a ellos compete y lo traslada a la siguiente etapa, es un cierre estadístico para contabilizarlo en sus indicadores de gestión. Por ejemplo, un caso cerrado en una fiscalía es un expediente al cual se le traslado al juzgado penal (ver metodología en anexos).

La base de datos tiene un total de 56.421 registros de expedientes cerrados en los años 2019 y 2022, distribuidos 44.117 registros para Juzgados Penales, 9.828 para Tribunales Penales, 1.786 para Tribunales de Apelación y 690 para los procesos tramitados ante la Sala de Casación Penal. Se incorporan los delitos sexuales previstos en el Código Penal y los delitos de la LPVcM, para un total de 12 tipos penales más frecuentes (véase precisiones conceptuales.

La presentación de la información sigue el orden cronológico de un expediente judicial desde la interposición de la denuncia, la fase preparatoria, la fase intermedia y la fase de juicio y apelación o apelación, cualquiera que haya sido la resolución final.

Delitos relacionados con violencia contra la mujer acumula casi el 20% de los casos en materia penal

La materia penal es la segunda de mayor tamaño en el Poder Judicial, solamente superada por la jurisdicción de cobros. En 2022, los casos nuevos que ingresaron en penal (entrada neta) representan el 24% del total de casos recibidos por las catorce materias que este Poder atiende. La dedicación de recursos a la materia penal asciende a un 60% del presupuesto total del Poder Judicial, tomando en cuenta el funcionamiento de los órganos auxiliares (cuadro 3).

En varias ediciones del *Informe Estado de la Justicia (2015, 2019, 2022*) se ha constatado que es una materia cuyos indicadores de demanda se mantienen en el tiempo en un rango de 160 mil a 200 mil denuncias nuevas ingresadas por año, y a la vez se resuelven menos casos por persona juzgadora (véase capítulo de seguimiento), en otras palabras, en años recientes -en general- se estabiliza la demanda y desciende la respuesta desde la justicia penal.

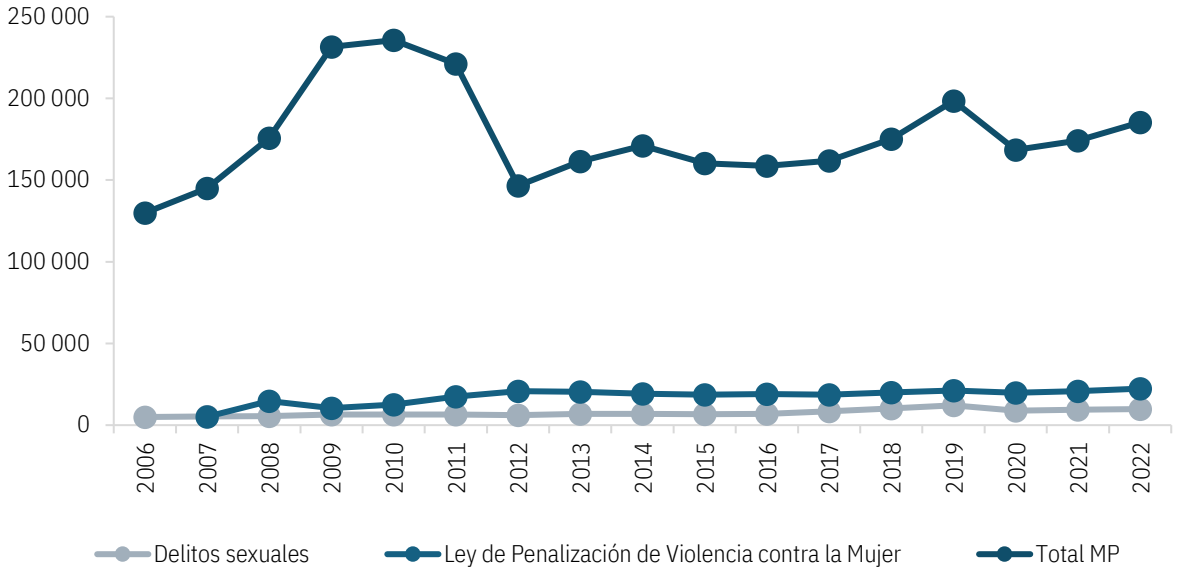
Cuadro 3
Total de expedientes relacionados con violencia contra las mujeres del total de expedientes en la materia penal[a/]. 2019 y 2022

Tipos de expedientes	2019	2022
Expedientes terminados correspondientes a delitos sexuales y LPVcM (grupo de 14 delitos seleccionados)	27.566	26.379
Expedientes terminados en materia penal correspondientes a otros delitos	126.200	133.888
Total	153.766	160.267

a/ Incluye despachos de Juzgado Penal (ordinario, flagrancia y turno extraordinario) y Tribunal Penal (ordinario y flagrancia). No incluye expedientes del Juzgado de Ejecución de la Pena.
Fuente: Achoy, 2023, con datos de la base sobre estadísticas judiciales en materia de violencia contra las mujeres, del PEN, 2023a.

La magnitud del problema de violencia contra las mujeres es significativa porque afecta potencialmente a la mitad de la población, durante todo su ciclo de vida, y además por sus altos volúmenes estadísticos. La incidencia de este tipo de delitos es alta y con un crecimiento constante cada año, desde el 2009 (gráfico 4). Otro aspecto que se debe señalar es que su trámite judicial se canaliza por medio de diversas vías según la conducta ocasionada en perjuicio de la víctima. Por ejemplo, la estructura institucional para atender a la materia de violencia doméstica es distinta respecto de la que atiende asuntos asociados a delitos como violación y femicidio. Aunque en la práctica el comportamiento de violencia contra las mujeres se interrelaciona entre esos ámbitos jurisdiccionales, en este proceso de investigación se destacó que hay poca articulación a nivel institucional para enfrentar al problema en su globalidad.

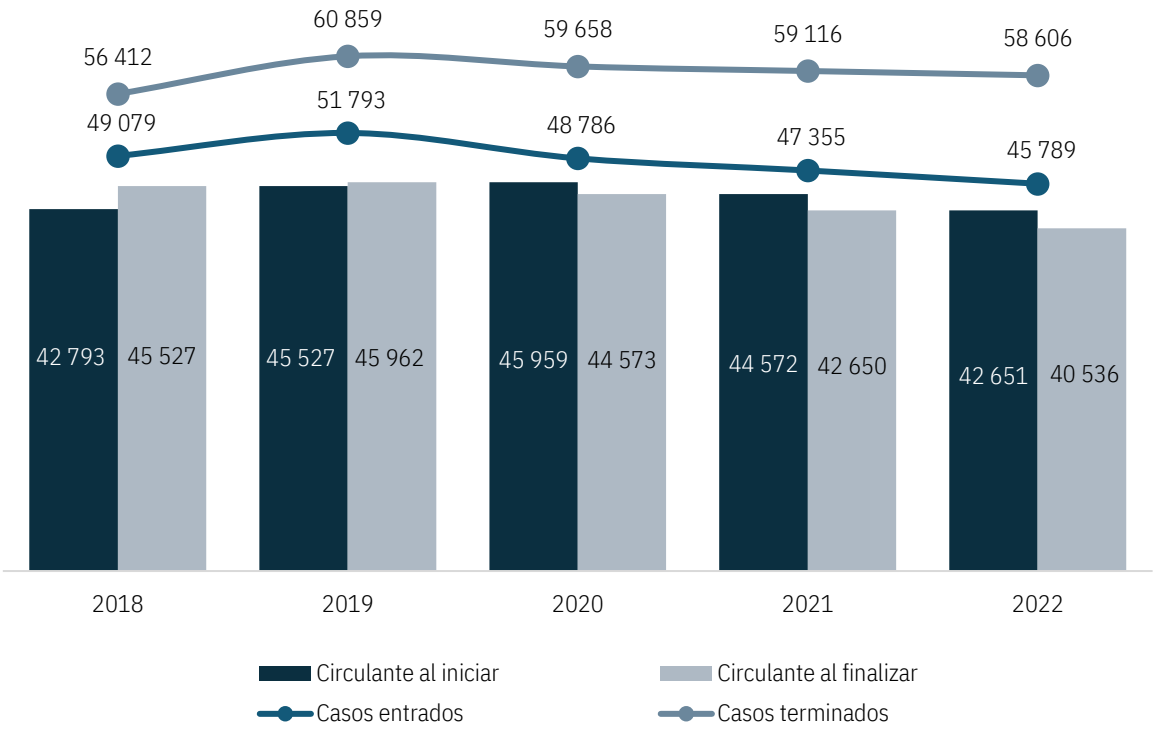
Gráfico 4
Entrada neta de casos por delitos sexuales y LPVcM, en relación con entrada total de casos en materia penal



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, Varios años.

Solamente en 2022, ingresaron 32.194 denuncias por delitos sexuales y violencia contra la mujer al Ministerio Público (gráfico 5). Si a esta estadística se suma la jurisdicción de violencia doméstica, estos casos alcanzan más de 77.000 por año (el 15% de los ingresos nuevos del Poder Judicial anualmente).Los datos reflejan que en el país existe un volumen considerable de casos relacionados con este tipo de conductas en perjuicio de las mujeres. Además, tal como se expuso en la introducción del capítulo, podría existir un nivel de subregistro correspondiente a las víctimas que no denuncian.

Gráfico 5
Entrada y terminación de expediente de la jurisdicción de violencia doméstica. 2018-2022



Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, 2023c.

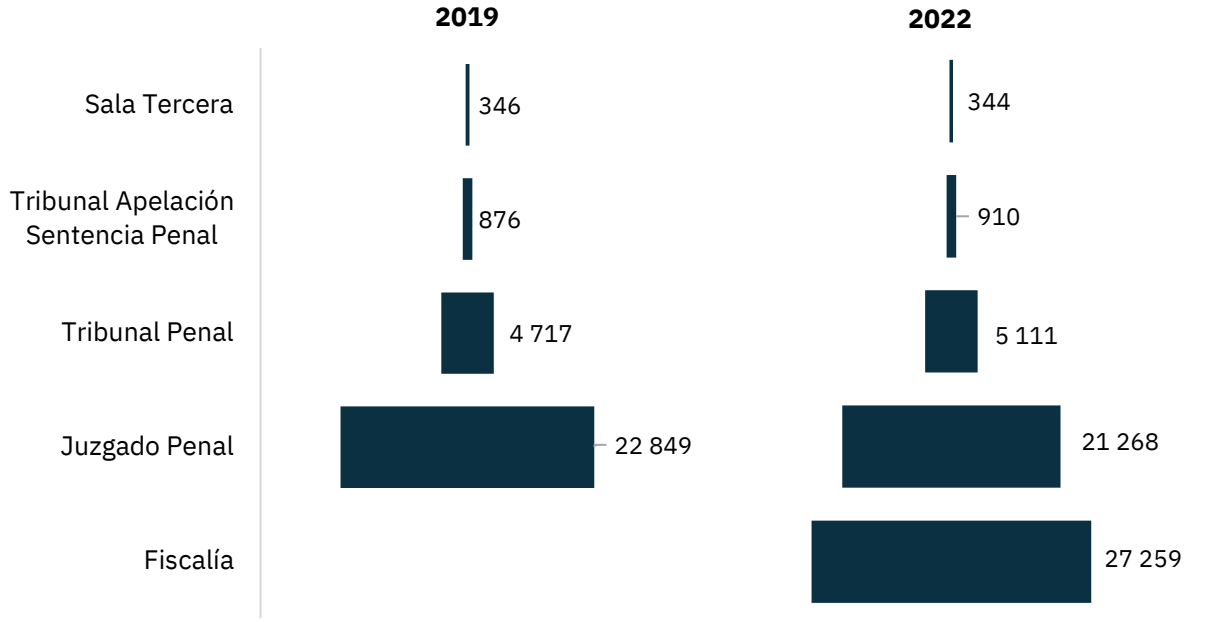
Como lo demuestran las estadísticas, la vía judicial es un acceso relevante para las mujeres víctimas que acuden a interponer denuncias cada año. Dentro del ordenamiento nacional, los tribunales son la única forma de garantizar los derechos violentados de estas víctimas, cuando ya otras instituciones y herramientas de prevención han fallado, como la denuncia administrativa en el INAMU u otros mecanismos similares. Sin embargo, el acceso a presentar una denuncia judicial es solo el primer paso de un complejo proceso judicial, del que se esperan las máximas garantías de tutela efectiva de derechos, entendida como el libre acceso a la justicia, para obtener una resolución de fondo ajustada al marco legal vigente, que garantice la aplicabilidad de los derechos de la ciudadanía o la defensa de un interés legítimo (PEN, 2022).

Frecuentemente se asume que las sentencias absolutorias o condenatorias son el producto final de un proceso penal, sin embargo, esta es solo una de las formas de resolver que tiene el sistema penal. La gran mayoría de terminaciones son de otro tipo y se cierran los casos previos a llegar a una etapa de juicio, como se demostrará en esta sección.

En el estudio se seleccionaron los años 2019 y 2022 como periodos de referencia para conocer si existieron diferencias a nivel institucional antes y después de la pandemia en esta materia. Según la base de datos de casos terminados del PEN, en el año 2019, los delitos asociados a LPVcM y delitos sexuales resueltos en Juzgados y Tribunales Penales representaron casi una quinta parte de todos los expedientes terminados en materia penal (18%). Para el año 2022 esta cifra se redujo a un 16%.

Al centrarse en la forma de resolución de los 14 tipos penales más frecuentes de violencia contra las mujeres, para los años 2019 y 2022, se observa que no todos los expedientes que ingresan a la Fiscalía tienen una resolución de los Tribunales Penales. Los datos muestran que en la instancia de Juzgado Penal, solo sobrepasa esta condición un 13,6% de los expedientes terminados a nivel del Subproceso de Estadística en Fiscalía en 2019 y con una pequeña reducción en 2022. En las siguientes secciones se explica la evolución de las estadísticas para cada una de las instancias (gráfico 6).

Gráfico 6
Expedientes terminados en casos seleccionados[a/] de violencia contra las mujeres, según tipo de instancia



a/ Los datos corresponden a los tipos penales relacionados con Abuso sexual, Femicidio, Incumplimiento de una medida de protección, Maltrato, Relaciones sexuales con persona menor de edad, Trata de personas con fines de embarazo forzado, aborto forzado y la ejecución de cualquier forma de explotación sexual y Violación (véase metodología), es decir, los referidos en el oficio 680-PLA-ES-2023.
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos sobre estadísticas judiciales en materia de violencia contra las mujeres del PEN, 2023a.

Solo 14% de las denuncias asociadas a violencia contra las mujeres terminan en juicio

La ruta de los expedientes penales inicia en la etapa preparatoria: un momento en el que interviene la Fiscalía con el fin de llevar a cabo el proceso necesario para que el proceso continúe a la siguiente fase. No toda la labor de investigación conduce necesariamente a un avance del expediente para efectos de resolución condenatoria, pues también es posible que ese trabajo se dirija a solicitar una terminación distinta del proceso, por alguno de los motivos que justificarían que el mismo no sea elevado a una etapa de juicio.

El Ministerio Público está dividido en 74 oficinas: 42 fiscalías territoriales, 14 fiscalías especializadas, 14 fiscalías de flagrancia y 4 fiscalías de la Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV). El Ministerio Público cuenta con una oficina especializada en casos de violencia de género, denominada Fiscalía Adjunta de Género. Debido a la importancia de la perspectiva de género y las particularidades de estos casos sensibles, es importante conocer si una Fiscalía especializada presenta resultados similares o distintos a los que se muestra en aquellas dependencias del Ministerio Público que no necesariamente están especializadas y atienden todos los delitos.

Estas fiscalías reportan estadísticamente un caso como terminado cuando se presenta al juzgado penal con las solicitudes de cierre previo a juicio, que pueden ser:

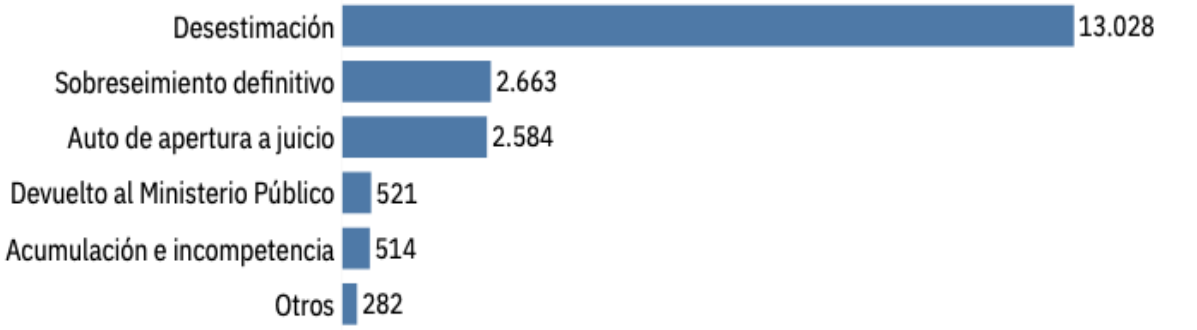
- Auto de apertura a juicio: continúa el proceso hacia la etapa de juicio en los tribunales penales.
- Archivo fiscal: no se logra identificar a un imputado.
- Desestimación: la denuncia no constituye un delito tipificado, no hay suficiente prueba, la fiscalía no puede proceder por algún impedimento legal.
- Sobreseimiento definitivo o provisional: no hay certeza de que hubo delito, de que lo cometió el sospechoso, de que la conducta encaje en el tipo penal solicitado o, bien, se venció el plazo legal para procesar la causa. Es definitivo cuando se cierra el caso, y provisional cuando no concluye el proceso y puede ser reabierto ante nuevos desarrollos o evidencias.

En esta etapa también interviene el Organismo de Investigación Judicial para diligenciar la investigación y obtener prueba para determinar si considera que lo denunciado sucedió o no y si configura o no un posible delito. También puede intervenir una representación legal privada de la víctima, llamada querellante, así como la representación de la víctima para efectos civiles, que puede ser pública a través de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima o privada con la persona abogada que contrate la víctima para esos efectos; asimismo, en ocasiones interviene la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.

En cualquiera de estas terminaciones, el Ministerio Público debe efectuar una solicitud ante el Juzgado Penal para que el caso concluya; o, en su defecto, avance con una solicitud de apertura a juicio. El Juzgado es la fase intermedia, también conocido como juez o jueza de garantías, que debe enfrentar un expediente penal para determinar su continuidad o su cierre, a partir de los elementos recopilados en el proceso de investigación y las diligencias que hubiese desarrollado la Fiscalía.

Para 2019 y 2022, en los delitos seleccionados como prioritarios para este estudio, las fiscalías terminaron 18.486 expedientes. De ellos los juzgados solamente registran 14% con apertura a juicio. La mayoría de los casos, pues no superan la etapa preliminar, en un 66% se concluyó en desestimaciones y sobreseimiento definitivo (gráfico 7).

Gráfico 7
Casos terminados en Juzgado Penal, según tipo de terminación[a/]. 2019 y 2022



a/ Incluye tipos penales del grupo 2, es decir: femicidio, maltrato, tentativa de femicidio, tentativa de violación, violación, violación agravada, violación calificada y violación contra una mujer.
Fuente: Calderón, 2023 con datos de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, 2020a y 2023b.

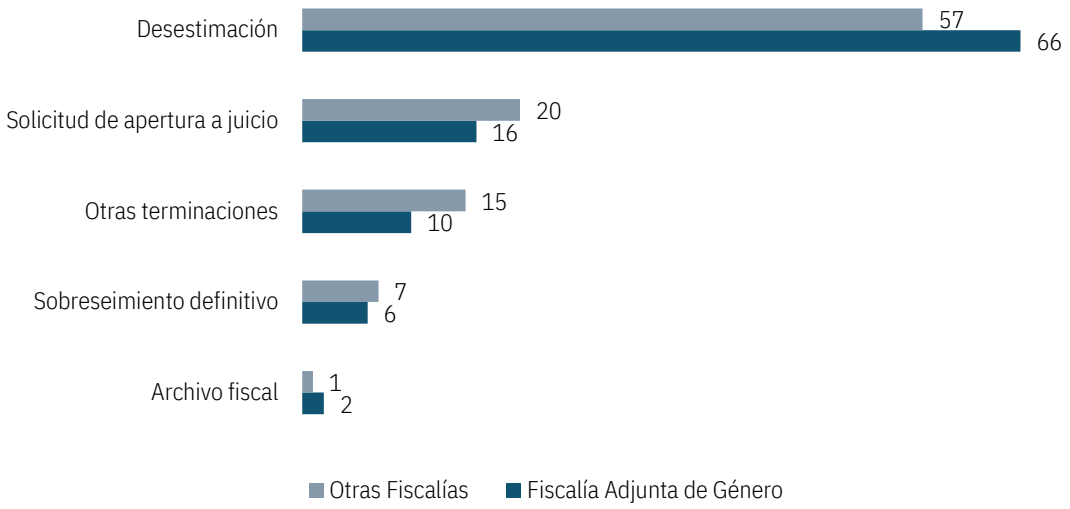
La etapa preliminar constituye un primer gran filtro para los casos de violencia contra las mujeres, al cual no sobreviven la mayoría; es decir, no logran pasar a la siguiente etapa procesal. Además, la Fiscalía Adjunta de Género no logra mejores resultados por su especialización, más bien se acusan menos casos que en las fiscalías no especializadas.

En general, las Fiscalías territoriales se logra que los juzgados penales de la localidad eleven más procesos a juicio que aquellos tramitados por la Fiscalía Adjunta de Género en San José. Para los años 2019 y 2022, un 20% en promedio fueron elevados a la siguiente etapa con una solicitud de apertura a juicio. En contraste, el dato desciende a 16% si se analiza el mismo aspecto para la Fiscalía Adjunta de Género.

Esto quiere decir que, para la materia específica de violencia contra las mujeres, existen retos y desafíos para que se obtengan resultados más efectivos desde las oficinas especializadas en materia de género como es el caso de la Fiscalía Adjunta. Según se observa en los datos disponibles, para el año 2022 la Fiscalía de Género solicitó más desestimaciones y gestionó más archivos que las otras Fiscalías (gráfico 8).

Este hallazgo contraintuitivo fue sujeto de una deliberación durante el taller de consulta al que se sometió esta investigación. Las posibles explicaciones que se mencionaron en la discusión se refieren a una alta rotación del personal en el Ministerio Público y recurso humano de muy reciente ingreso, que dificulta contar con el recurso humano verdaderamente especializado en las áreas. También se indicó que las víctimas presentan dificultades para continuar con el proceso y presentar evidencias, más allá de los testimonios. Y, finalmente, hubo una discusión sobre la actualización de la estadística registrada en los sistemas de gestión que efectivamente se comprobó que presentan discrepancias entre distintas fuentes internas de la institución (anexo).

Gráfico 8
Distribución porcentual de requisitorias fiscales concluidas, según tipo de terminación y tipo de Fiscalía. 2022



Fuente: Segura, 2023 con datos de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, 2023a.

Puede afirmarse que la etapa preliminar constituye un primer gran filtro para los casos de violencia contra las mujeres. La mayoría de los casos no sobrevive esta etapa. Además, la Fiscalía Adjunta de Género no logra mejores resultados por su especialización y sensibilización de la perspectiva de las mujeres. En años recientes acusan menos casos que las fiscalías no especializadas. En efecto, las Fiscalías territoriales elevan más casos a juicio que aquellos tramitados por la Fiscalía Adjunta de Género en San José.

Este hallazgo muestra que, para la etapa preparatoria de la persecución penal y la investigación del proceso, la especialización de una dependencia en el Ministerio Público como lo es la Fiscalía Adjunta de Género presentó dificultades para mejorar las tasas de apertura a juicio en su circulante durante el periodo de estudio.

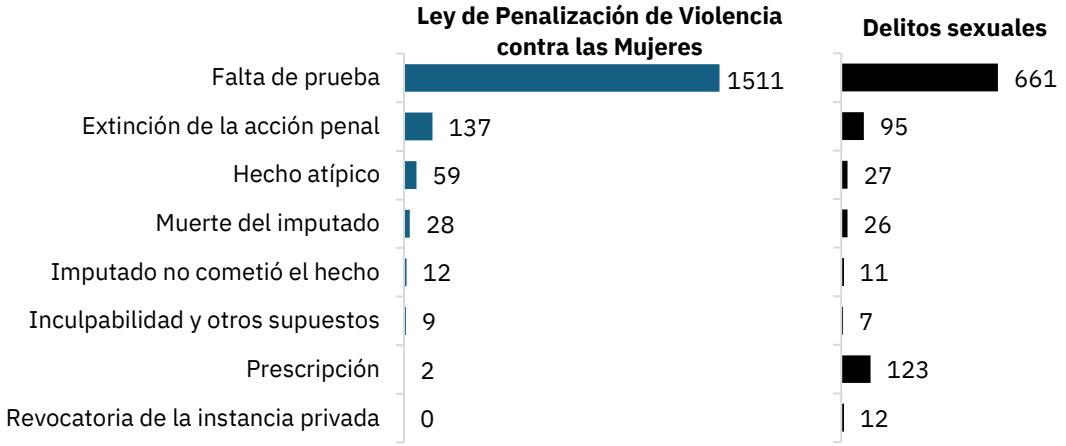
23% de expedientes terminados con solicitud de sobreseimiento por violencia sexual prescribieron

Para efectos de este estudio se analizaron con particular atención los sobreseimientos que solicitó la Fiscalía. Los cuales pueden ser provisionales o definitivos. En Costa Rica se pueden requerir por diversos motivos que justifican una terminación del proceso distinta a la de elevación del caso a juicio, como es el caso de la prescripción, suspensión del proceso por periodo de prueba, muerte del imputado, entre otros.

Con los datos proporcionados por el Ministerio Público se profundizó en los motivos por los cuales las Fiscalías solicitaron los sobreseimientos de procesos asociados a la LPVcM y delitos sexuales del Código Penal. Lo anterior fue suministrado solo para los casos cerrados en el año 2022.

En la mayoría de los casos, la solicitud del fiscal de sobreseer un caso se fundamenta con base en la ausencia o falta de prueba. De un total de 2.720 casos vinculados a la LPVcM y delitos sexuales en el año bajo análisis, la Fiscalía fundamentó la requisitoria de sobreseimiento por falta de elementos de prueba en 2.172 expedientes, más de siete de cada diez (gráfico 9). Este aspecto no representa necesariamente que el imputado sea inocente sino que las capacidades institucionales y las particularidades específicas del proceso de investigación no permitieron contar con suficientes elementos de prueba para dar continuidad a la solicitud de apertura a juicio. Este aspecto será profundizado en el capítulo siguiente por medio de la revisión de expedientes.

Gráfico 9
Distribución de los casos terminados en Fiscalía, por sobreseimiento según motivo y familia de delitos. 2022

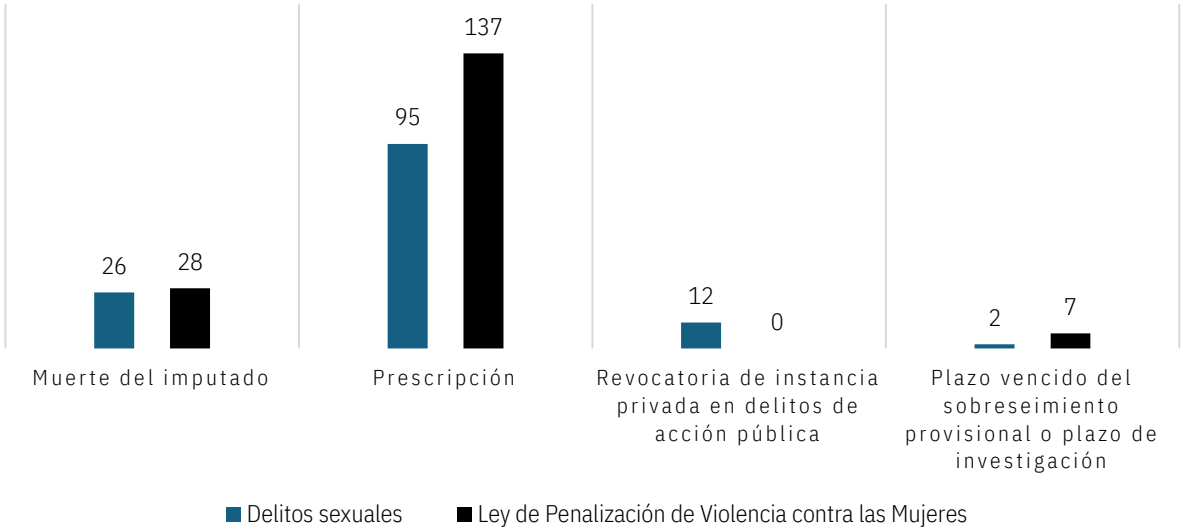


Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos sobre estadísticas judiciales en materia de violencia contra las mujeres del PEN, 2023a.

Una alerta que se debe notar es la de sobreseimientos con base en prescripción para el caso de los delitos sexuales. Según los datos disponibles, 123 expedientes se cerraron por sobreseimiento definitivo con apego a las disposiciones de prescripción. Ello implica que el expediente no logró ser atendido en un plazo dentro del parámetro legal necesario para solicitar la apertura a juicio; y, por el contrario, debió solicitarse la prescripción por superarse el tiempo para dar continuidad al proceso.

A pesar de que esta prescripción representa un número reducido con respecto al total, este tipo de terminación implica un riesgo de tutela efectiva de derechos para las víctimas, pues por la dilación del sistema no obtuvieron acceso a la justicia. Aunado a lo anterior, los datos muestran un incremento en las solicitudes de sobreseimiento por extinción de la acción penal (gráfico 10).

Gráfico 10
Ministerio Público: Solicitudes de sobreseimiento definitivo, por extinción de la acción penal según motivo. 2022



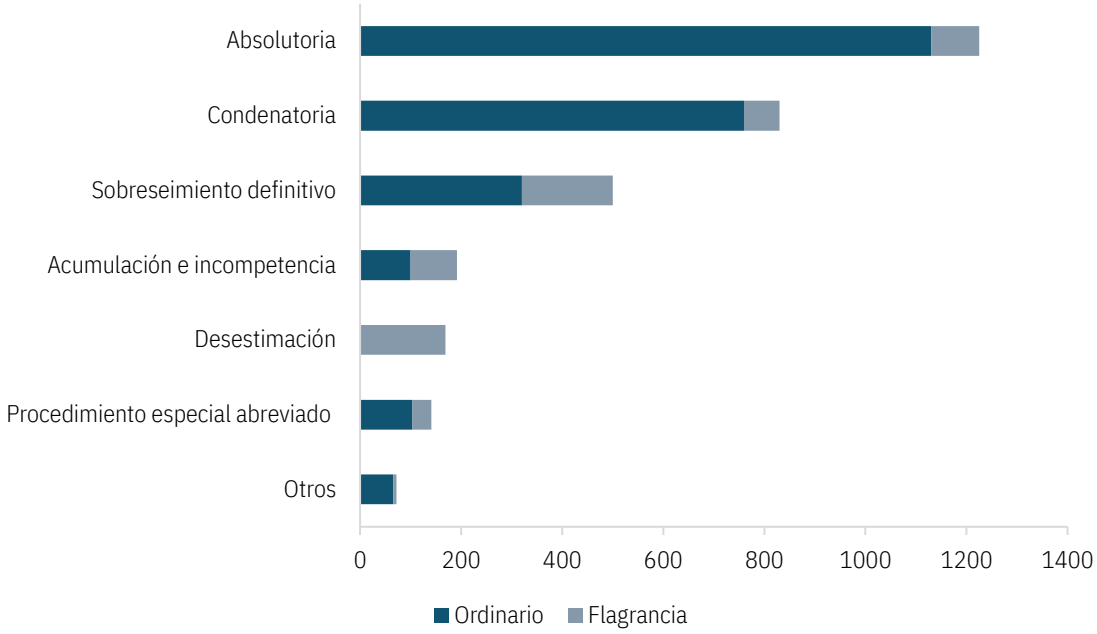
Fuente: Segura, 2023 a partir de la base de datos sobre estadísticas judiciales en materia de violencia contra las mujeres del PEN, 2023a.

En resumen, los datos muestran que la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres que se canalizan a través del Ministerio Público no concluyen la etapa preparatoria con una acusación. Por el contrario, una parte importante de las denuncias asociadas a la LPVcM y delitos sexuales presentan formas de terminación distintas. Algunas de ellas trascienden las capacidades institucionales (como la muerte del imputado), pero otras sí obedecen a una respuesta tardía del sistema judicial para enfrentar la persecución del delito de violencia contra las mujeres (como la prescripción o vencimiento del plazo de investigación).

Cerca de la mitad de los casos en etapa de juicio cierran en una absolutoria

Del 14% de los casos de violencia contra las mujeres a los que el Juzgado Penal le dicta un auto de apertura a juicio, un 48,8% recibe una sentencia absolutoria al llegar a la instancia de Tribunal Penal, un 4,5% llega a un procedimiento especial abreviado y un 32,8% es condenado (gráfico 11). Otro dato que llama la atención es que en un 13,8% se registran sobreseimientos definitivos, lo que puede implicar un riesgo de tutela por prescripción de causas. Este aspecto se analizará en el estudio a partir del muestreo de expedientes del *Informe Estado de la Justicia*.

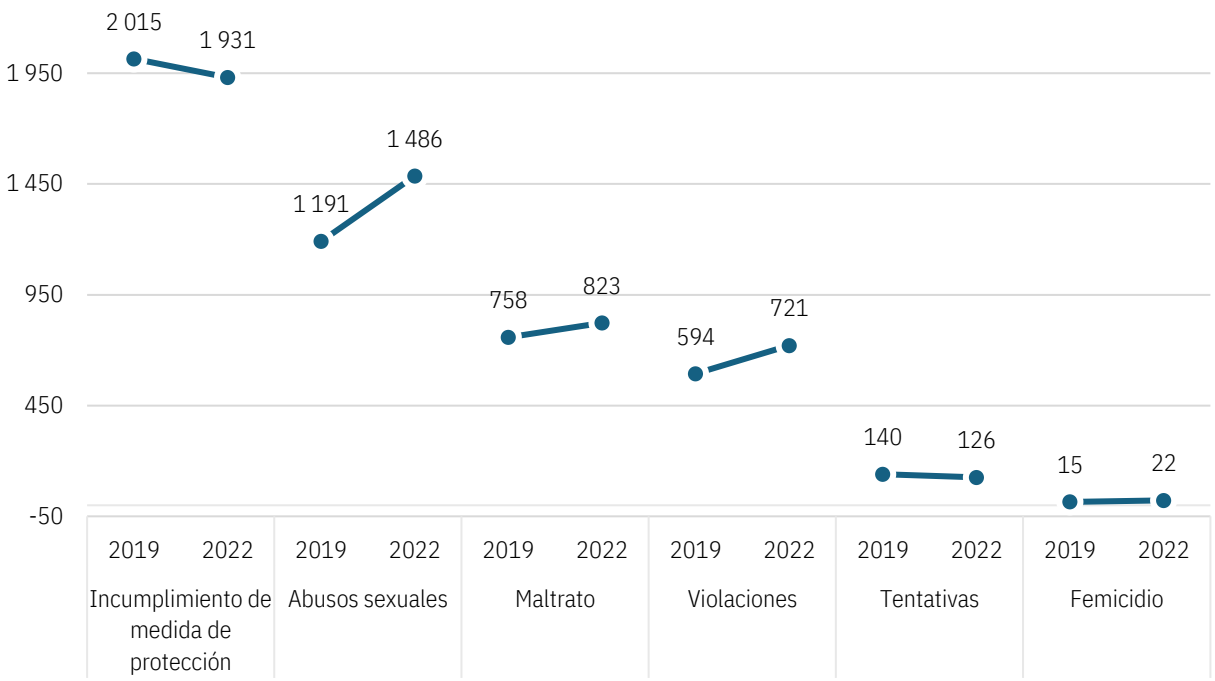
Gráfico 11
Casos terminados[a/] en tribunales, por tipo de término. 2019 y 2022



a/ Incluye tipos penales del grupo 2, es decir: femicidio, maltrato, tentativa de femicidio, tentativa de violación, violación, violación agravada, violación calificada y violación contra una mujer.
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos sobre estadísticas judiciales en materia de violencia contra las mujeres del PEN, 2023a.

Por otra parte, los datos también permiten identificar cuál conducta delictiva consume mayor trabajo por parte de los Tribunales Penales. Al hacer un análisis a profundidad de los expedientes terminados permitió identificar que la principal causa corresponde a situaciones en las que se accionó el sistema penal por incumplimiento de una medida de protección. Los abusos sexuales y los casos de maltrato ocupan una importante cantidad de trabajo por parte de este tipo de despachos judiciales (gráfico 12).

Gráfico 12
Distribución de expedientes terminados en Tribunal Penal, por año según delito. 2019 y 2022



a/ Los datos corresponden a los tipos penales relacionados con Abuso sexual, Femicidio, Incumplimiento de una medida de protección, Maltrato, Relaciones sexuales con persona menor de edad, Trata de personas con fines de embarazo forzado, aborto forzado y la ejecución de cualquier forma de explotación sexual y Violación (véase metodología), es decir, los referidos en el oficio 680-PLA-ES-2023.
Fuente: Elaboración a partir de la Base de datos sobre estadísticas judiciales en materia de violencia contra las mujeres del PEN, 2023a.

Duración de los procesos judiciales en casos terminados de violencia contra las mujeres

La siguiente información corresponde a los cálculos de duraciones promedio en cantidad de días, según el delito, su tipo de terminación o cierre y el tipo de despacho judicial donde se atendió. Los también fueron categorizados entre las fases del proceso penal; de tal modo que es posible visualizar las comparaciones entre la etapa preliminar y la de juicio, con respecto a la recursiva ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal y la Sala de Casación Penal.

Debe indicarse que, en esta sección, se omite el análisis de duraciones del Tribunal de Flagrancia (Goicoechea) y demás secciones de Flagrancia de los Tribunales que también conocen delitos relacionados a la LPVcM como el incumplimiento y maltrato. Dicho procedimiento se ampliará en el capítulo final del Informe Estado de la Justicia 2025.

Duración de procesos judiciales en delitos sexuales asciende a más de cuatro mil días en promedio

El delito de tentativa de violación es el que más tarda en ser atendido por los Juzgados y los Tribunales Penales, pues su duración suma en total un promedio de 4.383 días entre ambas instancias. Ello quiere decir que, desde el momento en que se presenta la acusación ante el Juzgado y el acto en que el caso es finalmente resuelto por un Tribunal Penal, transcurren aproximadamente 12 años. Los datos muestran que hay más similitudes que diferencias con respecto a la duración promedio en días de estos expedientes para el proceso de la fase intermedia y la de juicio (gráfico 13).

Gráfico 13

Duración promedio de días para los delitos sexuales[a/], según tipo de despacho. 2019 y 2022[b/]

	Juzgado Penal	Tribunal Penal	Tribunal de Apelación	Sala Tercera
Tentativa de violación	1 380	3 003		
Violación calificada	708	1 947	11	
Tent. de abuso sexual contra menor de edad	308	1 566	189	
Tent. de relación sexual con menor de edad	180	2 729		
Violación agravada	47		2 589	
Tentativa de abuso sexual contra mayor de edad	195	1 485		
Tentativa relaciones sexuales remuneradas	413			
Violación	154	936	87	121
Abusos sexuales contra menor de edad	129	905	136	126
Abusos sexuales contra persona mayor de edad	152	742	124	136
Relaciones sexuales con menores de edad	59	694	132	154
Trata para explotación sexual	78	60	11	24

a/ Los datos excluyen expedientes del Tribunal Penal de Flagrancia y los expedientes con duraciones negativas.
b/ Según el planteamiento metodológico, en el cálculo se incluye la duración promedio de los expedientes terminados en 2019 y 2022 acumulados.
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos sobre estadísticas judiciales en materia de violencia contra las mujeres del PEN, 2023a.

Por su parte, los expedientes que se tramitan en menor tiempo son los de trata de personas para explotación sexual, pues suman un total de 138 días en promedio, entre ambas fases del proceso penal (Juzgado y Tribunal). Por su parte, hay delitos que presentan diferenciaciones importantes entre ambas fases; este es el caso de la tentativa de relación sexual con menor de edad o incapaz, donde se presenta un promedio de duración de 180 días en instancia de Juzgado Penal, pero asciende a 2.729 días su tramitación en la instancia de Tribunal Penal.

Tomando como referencia el caso del delito de violación, este tipo penal tiene una duración promedio de 154 días a nivel de Juzgados Penales, 936 días a nivel de Tribunales Penales y, en la fase recursiva, 87 días en Tribunal de Apelación de Sentencia Penal y de 121 días a nivel de Sala de Casación Penal. Esto representa un total de 3,5 años para que el expediente vinculado a esta conducta penal sea resuelto en las fases preliminar, de juicio y recursiva.

Como se observa, para los delitos sexuales existe un promedio de días de tramitación más bajo a nivel de fase recursiva, con respecto a la de juicio y a la preliminar. El plazo más extenso a nivel de apelación corresponde a la violación agravada, con una duración de 2.589 días; y, en el caso de la casación, el plazo más extenso le corresponde a la conducta de relaciones sexuales con menores de edad, con un promedio de 154 días.

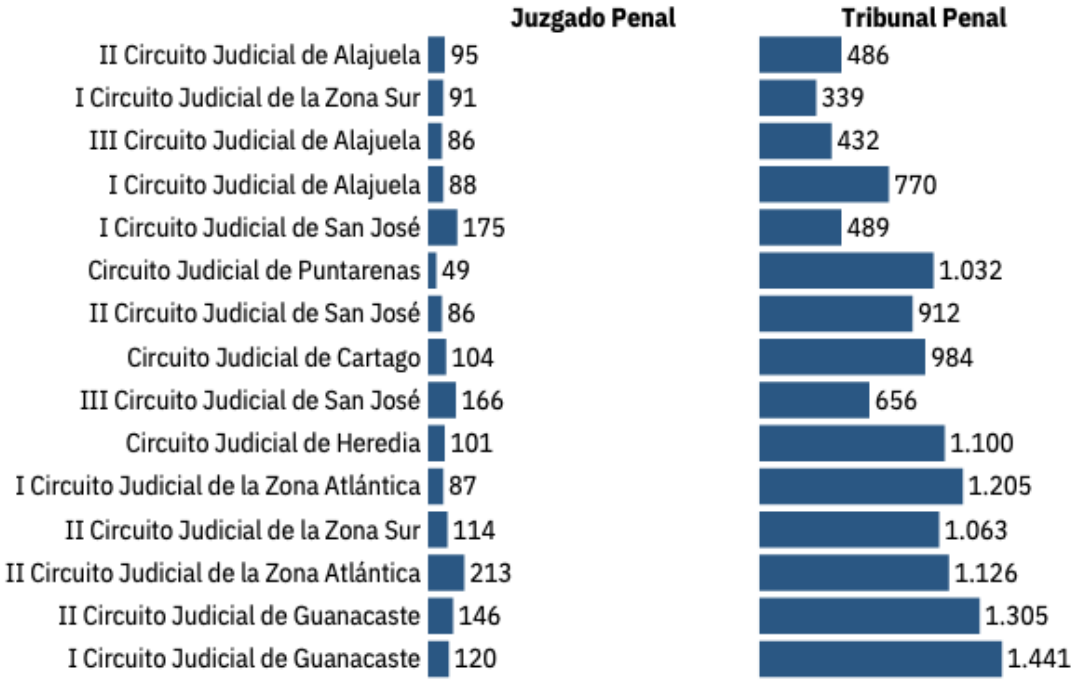
Una precisión acerca del motivo por el que no todos los delitos sexuales se muestran en las fases recursivas, corresponde al hecho de que estos datos reflejan los expedientes terminados en el 2019 y 2022. De tal modo, el rango temporal podría incluir solamente algunos de los tipos penales bajo estudio, pero no necesariamente todos los que pudieron ser analizados en la fase de juicio y la fase preliminar.

Duración de expedientes de delitos sexuales es mayor en la fase de juzgados

El segundo análisis efectuado al caso de los delitos sexuales establecidos en el Código Penal corresponde a la duración promedio en cantidad de días, según el tipo de despacho y el circuito judicial para la fase preliminar y la fase de juicio.

En el caso de los delitos sexuales el rango, considerando todos los circuitos judiciales, se encuentra entre los 49 y los 213 días a nivel de Juzgado Penal; y, por su parte, el rango para la fase de juicio se encuentra entre 329 y 1417 días entre todos los circuitos. Existen diferenciaciones entre los circuitos judiciales que podrían ocasionar una respuesta distinta según la ubicación del expediente. Si un caso se canaliza por medio del Circuito Judicial de la Zona Sur, entre ambas fases, podría sumar un total de 1.155 días; mientras que, si un expediente es tramitado en el I Circuito Judicial de la Zona Atlántica, el plazo promedio casi 200 días (gráfico 14). Esto es importante porque refleja que existen respuestas diferenciadas debido al territorio por parte de la justicia penal al caso de los delitos sexuales.

Gráfico 14
Duración promedio en días para procesos judiciales de delitos sexuales, según circuito judicial. 2019 y 2022[a/]



a/ Los datos de Tribunal excluyen la jurisdicción de Flagrancia. Según el planteamiento metodológico, en el cálculo se incluye la duración promedio de los expedientes terminados en 2019 y 2022 acumulados.
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos sobre estadísticas judiciales en materia de violencia contra las mujeres del PEN 2023a.

Otro aspecto que destaca entre los datos es la variación entre circuitos y tipo de despacho, pues la brecha entre los días promedio de duración por circuito es más pronunciada y divergente a nivel de Tribunal Penal. La diferenciación de días promedio de duración entre circuitos es más reducida; aunque, en promedio, los Juzgados Penales tardan más tiempo que los Tribunales Penales.

Hasta ahora, es posible afirmar que los datos muestran un comportamiento diferenciado en función del tipo de filtro que se utiliza en los análisis. Mientras que a nivel de Juzgado Penal la duración es más corta si se categoriza por delito, este aspecto se invierte cuando se trata de una categorización por circuito judicial. Del mismo modo ocurre con la etapa de juicio, si el filtro aplicado es la categoría de tipo de penal, los Tribunales Penales son la instancia en la que más días promedio de duración existen; pero esa relación es invertida al realizar las agrupaciones por circuito judicial.

Duración de casos de la LPVcM

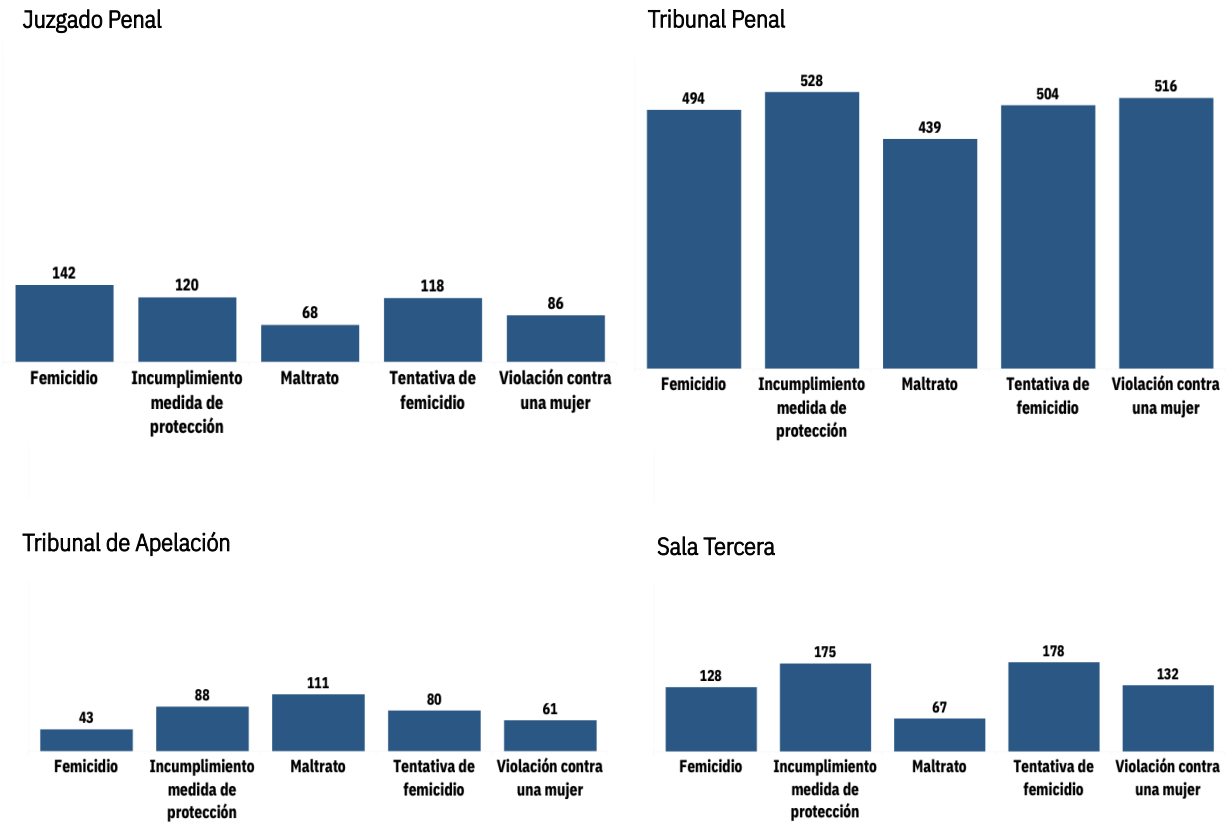
En este caso, el análisis de la información se circunscribe a aquellos tipos penales de la LPVcM respecto de los cuales había datos y registros disponibles en el insumo estadístico facilitado por la Dirección de Planificación (680-PLA-ES-2023).

La información se categorizó entre las fases del proceso penal para estos delitos específicos; de tal modo que es posible visualizar las comparaciones entre la preliminar y la de juicio, con respecto a la recursiva ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal y la Sala de Casación Penal.

Según se muestra en el gráfico 15, el incumplimiento de medidas de protección es la conducta que más tarda en ser atendida por los Juzgados y los Tribunales Penales, pues su duración suma en total un promedio de 648 días entre ambas instancias.

Ello quiere decir que, en promedio, desde el momento en que se presenta la acusación ante el Juzgado y el acto en que el caso es finalmente resuelto por un Tribunal Penal, transcurre poco menos de 2 años.

Gráfico 15
Duración promedio del expediente en días para delitos de la LPVcM, según el tipo de delito y despacho. 2019 y 2022[a/]



a/La visualización excluye a los expedientes con duraciones negativas y a los correspondientes a Tribunal Penal de Flagrancia.
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos sobre estadísticas judiciales en materia de violencia contra las mujeres del PEN, 2023a.

El delito de más célere tramitación es el de maltrato, pues suma un total de 507 días en promedio, entre ambas etapas del proceso penal.

Existen delitos que presentan diferenciaciones importantes entre ambas fases; este es el caso del tipo penal de violación contra una mujer, con una duración aproximada de 86 días a nivel de Juzgado, aunque su duración se aumenta a nivel de Tribunal Penal con una duración promedio de 516 días.

Tomando como referencia el caso del delito de femicidio, este tipo penal tiene una duración promedio de 142 días a nivel de Juzgados Penales, 494 en Tribunales Penales; y, en la fase recursiva, presenta una duración promedio de 43 días en Tribunal de Apelación de Sentencia Penal y de 128 días a nivel de Sala de Casación Penal.

Esto representa un promedio de duración de 807 días, es decir, más de 2 años, para que el expediente vinculado a esta conducta penal sea resuelto en la etapa intermedia, de juicio y recursiva.

En igual sentido que la sección anterior sobre delitos sexuales se debe precisar que no todos los delitos de la LPVcM se muestran en este análisis, debido a la ausencia de registros de algunos de esos tipos penales durante el período de estudio. De tal modo, el rango temporal podría incluir solamente algunos de los tipos penales, pero no necesariamente todos los que se estipulan en la ley.

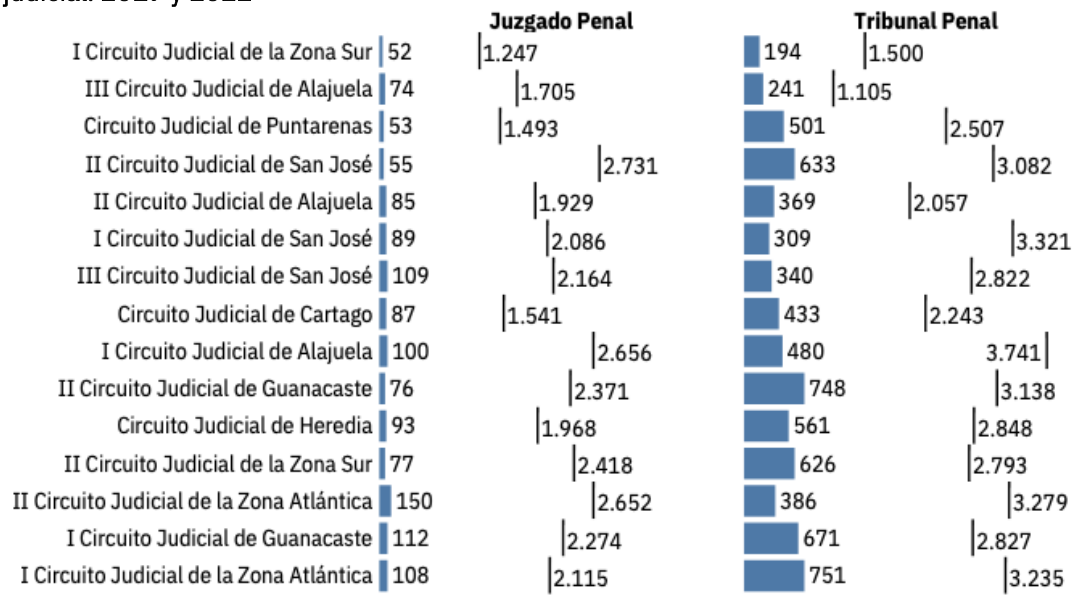
Rangos de duración de casos de la LPVcM se diferencian según circuito judicial.

El segundo análisis efectuado al caso de los delitos de la LPVcM corresponde a la duración promedio en cantidad de días, según el tipo de despacho y el circuito judicial para la etapa intermedia y la etapa de juicio.

Según se observa, en el caso de estas conductas penales existe un rango entre todos los circuitos judicial que se encuentra entre los 52 y los 150 días a nivel de Juzgado Penal; y, por su parte, el rango para la etapa de juicio se encuentra entre 159 y 662 días entre todos los circuitos (gráfico 16).

En este caso, los rangos tienen tiempos mínimos más bajos que la duración antes señalada para los delitos sexuales; pero también presentan medidas máximas significativamente superiores respecto de la duración para esos mismos tipos penales.

Gráfico 16
Duración promedio y máxima en días de los expedientes de delitos de la LPVcM, según despacho y circuito judicial. 2019 y 2022



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos sobre estadísticas judiciales en materia de violencia contra las mujeres del PEN, 2023a.

De igual modo, existen diferenciaciones entre los circuitos judiciales que podrían ocasionar una respuesta distinta según la ubicación del expediente. Si un caso se canaliza por medio del I Circuito Judicial de la Zona Sur, entre ambas fases, podría sumar un total de 211 días; mientras que, si un expediente es tramitado en el I Circuito Judicial de la Zona Atlántica, el plazo promedio se eleva a 770 días. En igual sentido que el caso de los delitos sexuales, este aspecto refleja que existen respuestas diferenciadas debido al territorio por parte de la justicia penal.

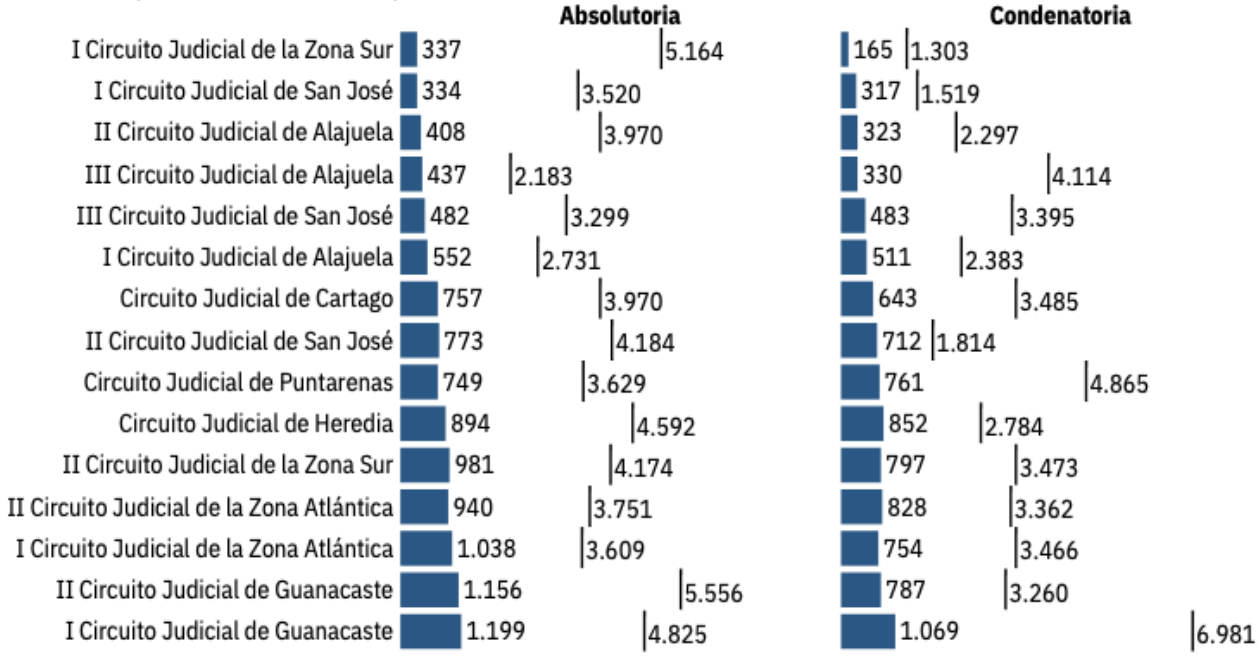
No obstante, ahora se trata también de una diferenciación debido a la familia de delitos. Hay circuitos que podrían tener una respuesta diferenciada si se trata de delitos sexuales o, como es en este caso, de delitos vinculados con la LPVcM.

De modo similar a lo explicado en la sección anterior, los datos muestran un comportamiento diferenciado debido a la variable analizada. Mientras que, a nivel de Juzgado Penal la duración es más corta si se categoriza por delito, este aspecto se invierte cuando se trata de una categorización por circuito judicial. Del mismo modo ocurre con la etapa de juicio, si el filtro aplicado es la categoría de tipo de penal, los Tribunales Penales son la instancia en la que más días promedio de duración existen; pero esa relación es invertida si se categoriza según circuito judicial.

En todos los circuitos las sentencias absolutorias tomaron más tiempo que las condenatorias. Esta diferencia es muy importante en cuatro circuitos, en los que prácticamente se duplica la duración si se trata de una condena. Los cálculos presentados son promedios de todos los casos que se terminan y ciertamente se debe considerar que el número de casos entrados y terminados

varía entre despachos. Por ello, adicionalmente al promedio, se calcularon también las duraciones máximas, es decir cuántos días tardó en resolverse el caso que más tiempo le tomó a ese circuito. Los plazos máximos en la etapa de juicio ascienden a más de 3.500 días, aproximadamente 10 años y se encuentran en la mayoría de los circuitos, con excepción del I Circuito de la Zona Sur y los tres circuitos de Alajuela. Las duraciones extremas son atípicas y responden a uno o pocos casos, pero dejan constancia de las limitaciones del proceso (gráfico 17). Las víctimas debieron esperar en promedio de 165 días para obtener una resolución condenatoria en el I Circuito Judicial de la Zona Sur. Pero si el caso le correspondía a un Tribunal Penal del I Circuito Judicial de Guanacaste, ese promedio ascendía a 1.019 días.

Gráfico 17
Duración promedio y máxima de los expedientes en Tribunal Penal, según circuito judicial y terminación de absolutoria y condenatoria. 2019 y 2022



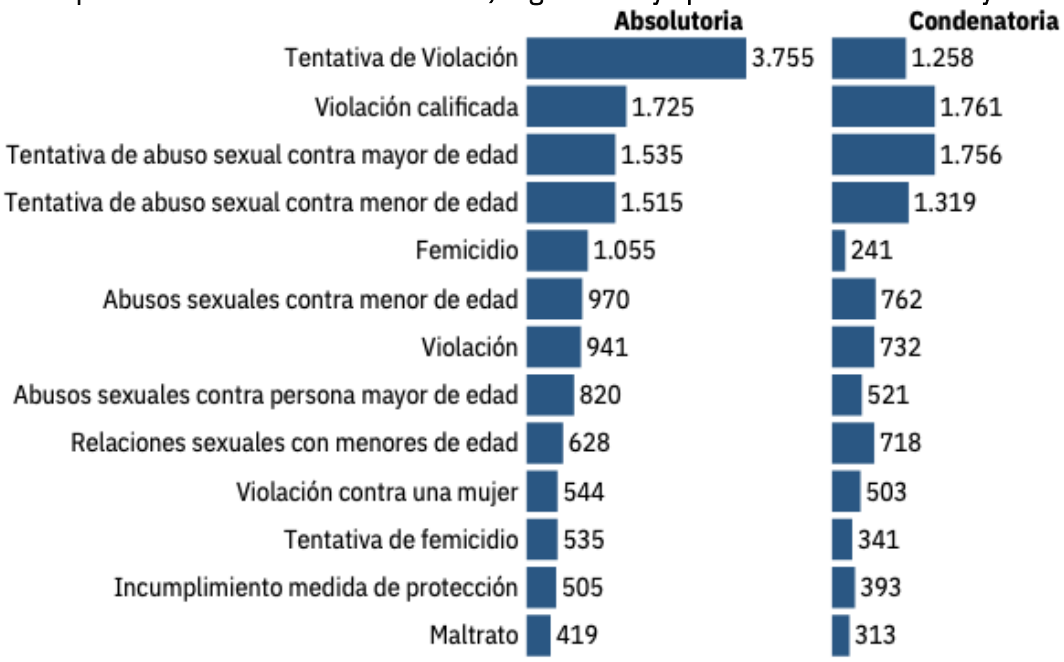
Nota: Los datos excluyen a expedientes con duraciones negativas y a Tribunal Penal de Flagrancia.
Fuente: Achoy, 2023, a partir de la base de datos sobre estadísticas judiciales en materia de violencia contra las mujeres del PEN, 2023a.

Como se observa, las víctimas debieron esperar en promedio 165 para obtener una resolución condenatoria en el I Circuito Judicial de la Zona Sur. Pero si el caso le correspondía a un Tribunal Penal del I Circuito Judicial de Guanacaste, ese promedio ascendía a 1.019 días.

Otro aspecto que resalta son las duraciones máximas, las cuales son más altas en el caso de las absolutorias. Por ejemplo, el II Circuito Judicial de Guanacaste presentó el valor más alto, con un expediente que tardó más de 3.700 días para obtener una resolución absolutoria. Aunque ese mismo circuito presentó un promedio de duración cercano a los 200 días cuando el expediente estaba en etapa intermedia (Juzgado), la realidad que enfrentan los casos al continuar a la etapa de juicio puede ser distinta. Es decir, la celeridad de un despacho a nivel de Juzgado en un mismo circuito no representa necesariamente la posibilidad que el proceso de juicio también obtenga

una resolución pronta. Esta situación también podría presentarse a la inversa. Es decir, que un Juzgado Penal se tome mucho tiempo en emitir el auto de apertura a juicio, pero que ese mismo proceso se resuelva céleremente por el Tribunal Penal (gráfico 18).

Gráfico 18
Duración promedio en días en Tribunal Penal, según delito y tipo de terminación. 2019 y 2022



Fuente: Achoy, 2023, con datos de la base sobre estadísticas judiciales en materia de violencia contra las mujeres del PEN, 2023a.

Los promedios de duración también varían en la instancia de Tribunal Penal si se trata de un determinado delito. En los expedientes terminados fue identificable que el delito de maltrato usualmente presenta bajas duraciones. Sin embargo, cuando se trata de tipos penales más gravosos o con penas más altas, los tribunales tardan más tiempo en brindar una resolución.

En este caso concreto, los promedios varían levemente según la terminación del proceso. Pero hay tres delitos en los que esa variación es más pronunciada. La tentativa de violación tiene un promedio de duración de aproximadamente 10 años si se trata de una absolutoria. Pero ese plazo se reduce a casi 3 años en los casos que terminaron con una condenatoria.

Lo mismo ocurre con el delito de abusos sexuales contra mayor de edad, en el que el plazo promedio de duración de una absolutoria fue de más de 2 años, pero en los expedientes que terminaron con una condenatoria ese plazo promedio se redujo a cerca de 1 año y medio.

El tercer caso que destaca en este análisis es el delito de femicidio. Los procesos con una absolutoria se tomaron en promedio cerca de 3 años. Pero cuando se trató de los expedientes con una condenatoria, el plazo fue inferior a 1 año.

Duración de la etapa recursiva

En los procesos que terminaron los despachos penales en fase recursiva, se procedió a analizar cómo concluyen principalmente los expedientes, la cantidad de casos por delito y la duración promedio por tipo de terminación.

Al revisar estos datos, se identificó que no todos los tipos penales fueron recurridos en los expedientes terminados para los años de 2019 y 2022 (gráfico 19).

Gráfico 19
Expedientes terminados por la instancia de Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal, según delito. 2019 y 2022



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos sobre estadísticas judiciales en materia de violencia contra las mujeres del PEN, 2023a.

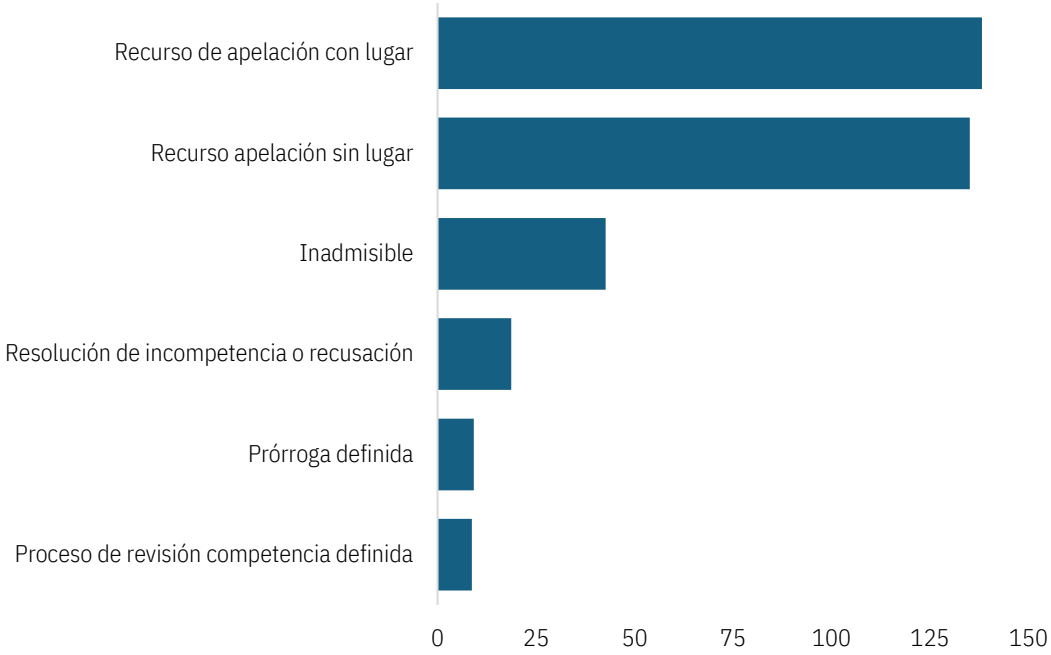
Es común que el delito de maltrato no sea el más recurrido, a pesar de ser el que más se tramita en los despachos de Juzgado o Tribunal. Los expedientes terminados en instancia de Tribunal de Apelación se relacionaron primordialmente con el delito de violación y abusos sexuales contra persona menor de edad.

En cuanto a las apelaciones que corresponden a incumplimiento de una medida de protección, debe precisarse que ese tipo penal se asocia con la jurisdicción especializada de violencia doméstica.

Los promedios de duración según las terminaciones son altos cuando se trata de recursos de apelación. Hay poca diferencia si el caso termina con lugar o sin lugar (gráfico 20). Pero los plazos promedio de resolución sí desciende en otras formas de terminación, como por ejemplo en las resoluciones de inadmisibilidad y en aquellas circunstancias que no se tratan de gestiones

recursivas en sentido estricto, sino de competencia jurisdiccional para temas como la ampliación de prórroga de prisión preventiva.

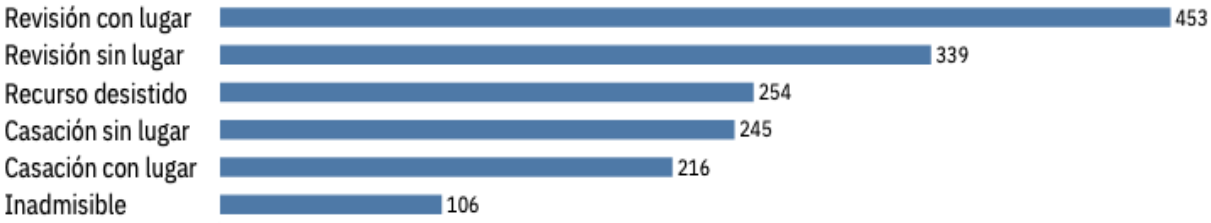
Gráfico 20
Duración promedio en días en la instancia de Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal, según delito. 2019 y 2022.



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos sobre estadísticas judiciales en materia de violencia contra las mujeres del PEN, 2023a.

Al tratarse la instancia de Sala Tercera, los promedios de duración se incrementan si lo gestionado es un recurso de revisión y se otorga un resultado favorable (gráfico 21). En sentido contrario, tratándose de casos con una terminación del recurso de revisión sin lugar, esos plazos bajan.

Gráfico 21
Promedio de duración en días en Sala Tercera, según tipo de terminación. 2019 y 2022



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos sobre estadísticas judiciales en materia de violencia contra las mujeres del PEN, 2023a.

Cuando se trata de recursos de casación, la diferencia es muy leve en el promedio de duración respecto a si termina favorable o no. Es importante tomar en cuenta que un número muy reducido de expedientes llega hasta la instancia de Sala Tercera, tal como se anotó al inicio del balance general de estadísticas judiciales en esta materia.

Lo que sí debe precisarse es que, en aquellas circunstancias en las que un resultado favorable en cualquier tipo de recurso y el Tribunal o la Sala ordenen el juicio de reenvío, esta situación representa un riesgo porque revictimiza en perjuicio de la víctima. Además, el juicio de reenvío por motivos procesales de defectos atribuibles a la institucionalidad judicial refleja una debilidad en las capacidades de justicia calidad para las personas usuarias.

Víctimas no obtienen reparación económica en sus procesos

Costa Rica como país signatario de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como "Belem Do Pará", por el artículo 7 de dicha normativa, se obligó a:

> Artículo 7: Los Estados Parte condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
>
> (...)
>
> g) establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces (...).

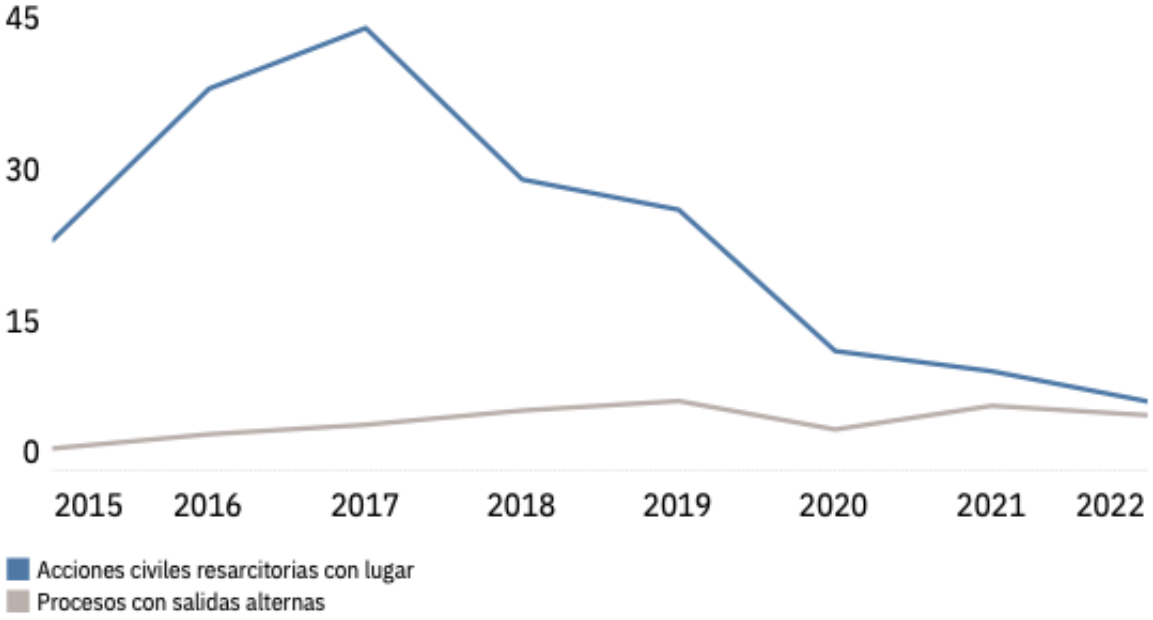
La Oficina de la Defensa Civil de la Víctima (ODCV) del Ministerio Público es la encargada de representar a las víctimas de delitos de manera tal que puedan presentar una acción civil resarcitoria (ACR), es decir, a solicitud de la víctima hace un reclamo económico a la persona imputada por los daños y perjuicios causados con su conducta delictiva, de conformidad al artículo 70 del Código Procesal Penal. Durante el momento de la denuncia, las fiscalías deben informar a la víctima de este derecho, para que delegue en el Ministerio Público la acción civil.

Los niveles de reclamo económico son muy bajos, y aún más los que resultan con lugar. Entre 2015 y 2022, las acciones civiles resarcitorias totales presentadas en casos de delitos sexuales y los vinculados a la LPVcM, fueron 1.026 en total en ocho años. Este es un número de reclamos muy bajo. A manera muy general para tener un parámetro de contraste, solo en el 2022 el Ministerio Público terminó 12.837 casos de delitos sexuales y 24.264 de infracciones a la LPVcM. Aun cuando no todos los casos terminados tiene una acción civil, o incluso la persona delegó pero decide no continuar con el proceso, la diferencia es muy grande entre el número de víctimas y las ACR.

No solo es bajo el número de reclamos económicos, sino que además las declaradas con lugar fueron 238, es decir, solo el 23,2% del total de este período. Las acciones civiles resarcitorias con lugar han venido disminuyendo desde 2018, y se presentó el número más bajo en 2022 con solamente siete. Las salidas alternas se mantienen en un volumen similar, siempre bajo (gráfico 22).

Si se analizan algunos tipos de delitos en particular, por ejemplo, a la ODCV le fue delegada (solicitada) la representación de las víctimas para presentar ACR en casos violación en 401 expedientes, mientras que, en casos de maltrato, solo en 232 causas.

Gráfico 22
Distribución porcentual de las acciones civiles resarcitorias



Fuente: Segura, 2023 con datos de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima del Poder Judicial, 2023.

En cuanto a la distribución territorial de las ACR presentadas entre 2015 y 2022 la oficina de Pérez Zeledón haya interpuso más ACR que la de San José. Estas dos oficinas junto con la Heredia agrupan el 45% de todas las ACR de estos años.

La ODCV utiliza criterios para informar a la víctima cuando valora si presenta una acción civil resarcitoria, especialmente considera si la persona no tiene medios para hacerle frente a una eventual condena patrimonial. Según dicha oficina, a efecto de que la víctima conozca sus posibilidades, se valora la denuncia en cuanto al dato personal sobre su salario, profesión, ingreso mensual, así como la titularidad sobre bienes muebles e inmuebles, participación en sociedades, registros en CCSS, y cualquier otro dato adicional que se vislumbre dentro del expediente. La decisión final de interponer una ACR es de la víctima, no pueden iniciar oficiosamente.

Cuando se declara con lugar la ACR que presentó o se pacta una salida alterna, el monto ha crecido considerablemente desde 20189, ya que se pasó de ₡ 17 millones a ₡41 millones en total lo obtenido por las víctimas (cuadro 5). En cuanto los montos obtenidos por salidas alternas son muy variantes e incluso, en algunos casos, lo que se pacta es una disculpa o no perturbar por un período de tiempo.

Cuadro 5
Montos anuales obtenidos por concepto de acciones civiles resarcitorias y salidas alternas. 2018-2022

	Acción Civil Resarcitoria		Salidas Alternas	
Año	Monto obtenido por todas las víctimas	Cantidad declaradas con lugar	Monto obtenido por todas las víctimas	Cantidad de casos con ACR con salida alterna
2018	₡17 441 088	42	₡16 813 016	20
2019	₡9 520 000	32	₡28 746 000	19
2020	₡25 440 000	15	₡43 600 000	12
2021	₡25 951 000	12	₡72 547 563	17
2022	₡41 320 000	9	₡28 750 000	15

Fuente: Segura, 2023 con datos de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima, 2023.

Aun considerando los criterios prácticos que aplica la ODCV, los datos brindados muestran que los reclamos económicos no son frecuentes en los delitos de violencia contra las mujeres. Las razones para no presentarlas no se dejan constando en el expediente, como se verá en el capítulo siguiente. Además de la valoración sobre la capacidad económica de los imputados, otra de las principales explicaciones posibles apunta al desconocimiento de esta medida por parte de las víctimas.

En la etapa final, si la ODCV logra la condena civil, la víctima que no contaba con recursos para contratar servicios privados de abogacía para llevar el caso, deberá obtenerlos si quiere ejecutar la sentencia. El Tribunal penal podrá condenar no solo en abstracto sino concretar la condena a un monto, que en firme se convierte en un título que podrá cobrar en el Juzgado civil respectivo, pero para ello requerirá abogado (Núñez, 2015).

Tutela efectiva de derechos en casos de violencia contra las mujeres: muestreo de expedientes

El proceso penal, independientemente de la resolución final, debe garantizar la tutela efectiva de derechos para las mujeres víctimas de violencia. Este concepto implica el libre acceso a la justicia, para obtener una resolución ajustada al marco legal vigente, que garantice el cumplimiento de los derechos ciudadanos o interés legítimo (véase conceptos básicos primer capítulo).

[9] Se incluyen datos de 2018 en adelante, momento en que la ODCV implementó el Sistema de Registro de Honorarios (SRHE).

Este concepto comprende varias dimensiones, desde temas de equipos e infraestructura hasta la calidad de las resoluciones, y es susceptible de ser evaluado durante todo el proceso judicial. Un incumplimiento de alguna de estas dimensiones estaría configurando un riesgo de tutela efectiva.

El muestreo de expedientes uno a uno fue la metodología utilizada en este estudio para aproximarse a este complejo concepto, dado que las estadísticas generales no permiten identificar el cumplimiento de las garantías de tutela efectiva. El muestreo de expedientes utiliza la técnica de estudio de cohortes, la cual permite el seguimiento de un grupo a lo largo del tiempo, rastrear su historia de principio a fin; es decir, desde la apertura del expediente con el número único hasta su terminación en el proceso judicial. Busca determinar tipos de salida, tipos de casos, duraciones, perfiles de usuarios, riesgos de tutela de derechos en el proceso, entre otros.

El proceso de muestreo dio como resultado el procesamiento de 286 expedientes con las siguientes características: 108 correspondientes a delitos sexuales y 178 asociados a la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, terminados en los circuitos del Gran Área Metropolitana. Esta delimitación territorial es exclusivamente por temas presupuestarios y de logística (cuadro 6).

Cuadro 6
Distribución de expedientes, según circuito judicial y agrupación de delitos incluidos en el estudio
(años o período)

Circuito Judicial	Violación	Femicidio	Maltrato	Maltrato y femicidio	Maltrato y violación	Violación y femicidio	Total
III Circuito Judicial de San José	16	7	35				58
I Circuito Judicial de Heredia	12	21	4	6	3	1	47
II Circuito Judicial de San José	11	11	12	1		1	36
III Circuito Judicial de Alajuela	16	10	6	2			34
I Circuito Judicial de Alajuela	15	10	7	2			34
I Circuito Judicial de San José	13	3	11	2	1		30
I Circuito Judicial de Cartago	3	1	11				15
II Circuito Judicial de Alajuela	1						1

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del muestreo de expedientes de violencia contra las mujeres del PEN, 2024.

Con respecto a la cantidad de expedientes según la instancia, los procesos judiciales seleccionados están ya terminados y se buscó una cuota mínima para cada instancia, por esta razón este tipo de distribución no refleja el mismo comportamiento de las estadísticas generales (cuadro 7).

Cuadro 7
Distribución de expedientes judiciales según instancia de tramitación

Instancia	Cantidad de expedientes
Juzgado Penal[a/]	283
Tribunal Penal	196
Tribunal de Apelación	112
Sala de Casación	55

a/ En el caso de la instancia de Juzgado Penal, existen 3 expedientes que no fueron tramitados por esa fase debido a que se trata de procesos elevados de manera directa ante el Tribunal Penal.
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del muestreo de expedientes de violencia contra las mujeres del PEN, 2024.

A diferencia del balance general de estadísticas judiciales en materia de violencia contra las mujeres, este muestreo sí permite analizar la trazabilidad de los expedientes y su trámite en las diversas instancias procesales. De modo que sí es posible conocer el camino avanzado por cada uno de estos casos y su tratamiento en las diversas etapas del proceso penal.

En el estudio fueron excluidos los expedientes en donde figura como víctima un hombre y tampoco se tomaron en cuenta los casos judiciales relacionados con personas menores de edad. Aunque el cuestionario y la base de datos incluyen múltiples variables de interés, es importante mencionar que en el procesamiento de los datos recopilados desde el muestreo hay expedientes con ausencia de información. Por ejemplo, no todos los expedientes tienen el dato de la fecha de nacimiento de las víctimas y su nivel educativo, o si se presenta alguna condición de discapacidad.

Tal información podría contribuir a conocer con mayor profundidad los riesgos de tutela que se presentan en este tipo de casos judiciales. No obstante, se evidencia que aunque a todos los expedientes se les aplica el mismo procedimiento, incluso empleando las mismas plantillas de información sobre las víctimas, en la práctica se omiten ciertos datos en contraposición con diversas circulares que solicitan la recolección de toda la información de las partes para registros estadísticos.

Una vez caracterizados de manera general los expedientes, se presentan los principales hallazgos del análisis. Las revisiones están orientadas a identificar factores, etapas o elementos judiciales y extra judiciales que ponen en riesgo la tutela judicial efectiva para las víctimas; y en la medida de lo posible, también están organizadas por el orden secuencial del proceso penal.

Riesgo de acceso a la información

El acceso a la información para la toma de decisiones durante el proceso penal refiere a la información certera y oportuna a la víctima, que las agraviadas tengan acceso material a la información, y devolverle poder de decisión a las ofendidas sobre su proceso y proyecto de vida.

Este riesgo se puede manifestar en diferentes momentos tales como cuando la víctima asegura haber entendido y no tener dudas, los tiempos de toma de denuncias, la notificación de actos oportunamente y a la persona correcta por el medio indicado, la gestión de apoyo legal privado, la información sobre ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, el ejercicio o no de la querella y la acción civil resarcitoria, entre otros.

El cuestionario sí incluyó todas estas condiciones, sin embargo, no en todos los temas fue posible contar con información suficiente para el análisis. Por ejemplo, la representación legal privada fue empleado en seis ocasiones. Este bajo número no permitía establecer los cálculos y generalizaciones como en el resto de las variables, pero informa sobre uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres víctimas de estos delitos, a saber la falta de apoyo legal.

A partir del contenido de los expedientes es difícil constatar hasta dónde la víctima fue informada adecuadamente, lo cual no sólo implica leer sus derechos de acuerdo con un listado, sino además explicárselos en un lenguaje sencillo y claro, junto con las implicaciones que tiene cada decisión sobre su proceso judicial.

En los expedientes revisados constaba en los formularios usuales de denuncia diversos artículos transcritos del Código Procesal Penal sobre los derechos y deberes de las víctimas, a manera de plantilla copiada exactamente igual en cada expediente, por lo que no se puede asegurar si la información fue leída, o explicada y comprendida. Aún bajo el supuesto que las víctimas sí se les explicará en un lenguaje sencillo la información que se le brinda, se debe tomar en cuenta que por lo general se trata de una persona que está angustiada por ir a denunciar, tendrá dificultades para entender todos sus derechos en una sola explicación el primer día.

Durante el muestreo se intentó recabar información cuantitativa que pudiera arrojar algunos indicios sobre la atención que recibe la víctima, por ejemplo, recabar la hora de inicio y de finalización de la toma de la denuncia, en la mayoría de los casos, el dato no se consignaba o no coincidía con la otra hora o fecha.

Solamente en uno de los expedientes de un delito de violación se encontró una suspensión de la audiencia preliminar en el juzgado porque no se le había informado de sus derechos a la víctima, motivo por el cual el caso se devolvió al Ministerio Público para subsanar el error. La audiencia fue reprogramada en tres ocasiones. La resolución final fue una sentencia absolutoria en el Tribunal, que se produjo 2.370 días (aproximadamente seis y medio años) después de la interposición de la denuncia.

Después de una profunda lectura de este grupo de expedientes, se puede afirmar que ningún expediente se consignó alguna queja o inconformidad por parte de las víctimas. Ello no puede interpretarse como un nivel de satisfacción perfecto, sino más bien como una ausencia de registro o de información por parte del personal donde se le indique que puede recurrir a la Contraloría de Servicio o la Inspección Judicial.

Ausencia de constancia sobre el acceso material a derechos sexuales y reproductivos por parte de las mujeres víctimas de violación

Del total de expedientes muestreados (286), 114 estaban vinculados a hechos de violación, mientras que solo en 51 causas penales la denuncia se realizó dentro de las 72 horas después de la agresión sexual.

Para analizar el acceso a la información que tuvieron las víctimas, el muestreo se concentró en los casos que fueron atendidos en las primeras 72 horas dado que existen estudios científicos que demuestran que el tratamiento profiláctico para VIH/SIDA (antirretroviral) genera un beneficio si se inicia antes de que pasen 72 horas de la exposición.

El Protocolo de las 72 horas establece tratamiento profiláctico por VIH/SIDA, también busca brindar a las víctimas de violación la opción de obtener primeros auxilios psicosociales, profilaxis en general contra enfermedades de transmisión sexual y anticoncepción de emergencia.

Resulta importante mencionar que es posible activar el protocolo tanto en centros de salud como en las instancias judiciales. En la actualidad, se dispone de 18 equipos de respuesta rápida[10], que se coordinan en tiempo real a través del uso de WhatsApp, 14 unidades medicolegales y se aplican medicamentos antirretrovirales en 29 centros médicos de todo el país (CGR, 2023).

El alcance e impactos de esta medida son inciertos, pues no se han generado datos de calidad para su monitoreo. En un informe de fiscalización la CGR considera al respecto que la calificación que amerita la institucionalidad vinculada al Protocolo es poco favorable, ya que encontraron:

> "Falta información que caracterice a las poblaciones en condición de vulnerabilidad para la implementación de un enfoque de interseccionalidad. Además, se carece de información oportuna, confiable y útil para la toma de decisiones en materia de política pública, como de estimación de recursos, evaluaciones de efectos e impactos, entre otras" (CGR, 2023).

Y aunque la misma CGR considera que el protocolo es una buena práctica para gestionar y coordinar interinstitucionalmente, "(...) carece de mecanismos para medir el desempeño en la atención de las víctimas. Valga aclarar que, con excepción del Poder Judicial y el Sistema de Emergencias 9-1-1, ninguna de las instancias participantes dispone de estadísticas de los casos atendidos", además, a pesar de los esfuerzos de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, misma que "ha remitido oficios a las instancias encargadas de elaborar las boletas para recordar la obligación de su uso, lo cual ha resultado infructuoso. Es decir, para la articulación de las acciones y la toma de decisiones para la mejora continua, dicha Secretaría dispone de información incompleta" (Ibid).

[10] Equipos de Respuesta Rápida actuales: 1. San José / 2. Heredia / 3. Alajuela/ 4. Pérez Zeledón /5. Corredores / 6. San Carlos (Upala) / 7. Cartago / 8. Turrialba / 9. Pococí / 10. Siquirres / 11. Liberia-Cañas /12. Santa Cruz / 13. Nicoya / 14. Puntarenas (Garabito) / 15. Quepos-Parrita / 16. Limón (Bribri- Batán) /17. Grecia 18. San Ramón.

En la actualidad no hay datos sobre el cumplimiento del Protocolo. Otro aspecto del que no se tiene información es sobre la dispensación o no de anticoncepción oral de emergencia por violaciones dentro de las 72 horas después del hecho, ya que Medicina Legal no indica en sus dictámenes médico legales ni constan en otra parte de los expedientes penales las referencias o no a la CCSS de las usuarias. También se consultó con la CCSS pero no lleva datos desagregados sobre entrega de medicamentos en el marco de este Protocolo.

En vista de este nivel de ausencia de información para la toma de decisiones, dentro del muestreo de expedientes, se buscó levantar información con la finalidad de tratar de generar datos sobre la incidencia o no de la aplicación del Protocolo de las 72 horas en los casos de violencia sexual, específicamente los de violación.

Para este estudio se analizaron un total de 286 expedientes, de dicho total, 114 estuvieron vinculados a violaciones y en 51 ocasiones, la denuncia se presentó antes de que pasaran 72 horas después de la agresión sexual, de manera tal que resulta relevante poner bajo la lupa el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas, lo que además permite identificar si existen riesgos de tutela vinculados a la revictimización y acceso a la información.

Conforme al Protocolo de 72 horas en su tercera edición de 2022, únicamente las personas médicas clínicas, no así el personal médico forense, están autorizadas para determinar si una víctima necesita o no tratamiento profiláctico contra enfermedades de transmisión sexual, anticoncepción de emergencia o antirretrovirales. Desde la Fiscalía solo deben remitir a las víctimas a un centro médico de la Caja Costarricense del Seguro Social para dichos efectos (Segura, 2022).

Sin embargo, del estudio realizado a los 51 expedientes susceptibles de aplicar el Protocolo de 72 horas, no fue posible obtener información sobre si dicha remisión se había realizado ni concretado, dado que únicamente se obtuvieron los siguientes datos: en 5 expedientes se consignó que se le dio a la víctima la posibilidad de utilizar tratamiento antirretroviral y que en 3 ocasiones sí se dio.

En cuanto a la anticoncepción oral de emergencia, hasta abril de 2019 que se permitió la dispensación de anticonceptivos dedicados para emergencias o mejor conocidos como “píldora del día después”. El Protocolo de 72 horas establece dentro de las funciones que debe realizar el personal médico de la CCSS: " evaluar los riesgos del embarazo y dar a conocer las opciones de AE, incluyendo los servicios de salud reproductiva". Sin embargo, no fue posible captar información en los expedientes, ni estadísticas de la CCSS sobre esta aplicación.

De manera tal, que existe un riesgo de tutela en cuanto el acceso a la información para las personas víctimas de violación, ya que no existe forma de determinar sí recibieron información completa, entendible, sin sesgos y de calidad.

Asimismo, las consecuencias físicas de una violación, así como su eventual repercusión en la materialización o no del acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres implica un riesgo de revictimización.

De conformidad con el Protocolo de 72 horas, es a la CCSS a quien le corresponde recolectar muestras para determinar un posible embarazo, así como las que determinen si existió el contagio de una infección de transmisión sexual a la víctima y solo bajo excepción lo hace el Poder Judicial (Ibid).

Tampoco fue posible obtener datos sobre las pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual (ITS) ni de embarazos vinculadas a violencia sexual, ya que no existe una base de datos interinstitucional para dichos efectos ni por cada entidad.

En vista de este nivel de ausencia de información para la toma de decisiones, dentro del muestreo de expedientes, el equipo técnico del PEN se abocó a levantar información con la finalidad de tratar de generar datos tendencia sobre la incidencia o no de la aplicación del Protocolo de las 72 horas en los casos de violencia sexual, específicamente los de violación.

De conformidad a la información arrojada por el muestreo de expedientes del PEN, de 51 expedientes vinculados a violaciones que se denunciaron dentro de las 72 horas posteriores a la agresión sexual, se utilizó como prueba pericial en 34 ocasiones la prueba de detección de infecciones de transmisión sexual. En cuanto a las pruebas de embarazo, solo consta en 6 expedientes judiciales que se realizó y en ninguno se hicieron pruebas de paternidad, por lo que aparentemente no se produjeron embarazos vinculados a las agresiones sexuales investigadas en los 51 expedientes del muestreo.

Se considera que implica un riesgo de tutela de revictimización el que las mujeres deban ir de oficina en oficina estatal para que se le realicen los diversos exámenes médicos o de laboratorios necesarios; así como un riesgo de tutela de acceso a la información en cuanto las mujeres tienen derecho a saber su condición de salud posterior a una violación y verificar que efectivamente se tuvo acceso material a los derechos sexuales y reproductivos por parte de las víctimas.

Con la intención de disminuir los inconvenientes prácticos comentados, el 8 de marzo de 2023, la Comisión de Género del Poder Judicial presentó públicamente, el proyecto de ley titulado “Ley para la institucionalización legal del Protocolo de las 72 horas y los equipos de respuesta rápida para la atención de personas víctimas de violación”[11] (expediente 23.633).

Este proyecto de ley pretende establecer una efectiva protección legal a las víctimas de violación sexual mediante la sostenibilidad, permanencia, y obligatoriedad de las instituciones de aplicar el “Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas Víctimas de Violación Sexual” y brindar los servicios requeridos, según sus competencias legales, mediante los Equipos de Respuesta Rápida para Víctimas de Violación (en adelante se citará por sus siglas ERRVV). Entre sus objetivos se encuentra principalmente la recolección de datos a través de una plataforma interinstitucional que permitan generar estadísticas para la toma de decisiones.

[11] La iniciativa fue presentada formalmente en la Asamblea Legislativa el 16 de marzo de 2023 con la firma de 6 diputaciones de 3 fracciones legislativas distintas y a agosto de 2024, se encuentra en trámite en la Comisión de la Mujer con un texto sustitutivo del 28 de febrero de 2024.

85% de los imputados cuenta con salario o bienes a su nombre, pero solo en el 8% de expedientes analizados se presentó una acción civil resarcitoria

En la valoración del nivel de información que se les brinda a las mujeres víctimas de delitos de violencia, resulta de particular interés conocer si ellas y sus personas allegadas (también víctimas de conformidad al artículo 70 del Código Procesal Penal) tienen acceso real y efectivo a la compensación económica vinculada a los delitos de violencia contra las mujeres.

Como se mencionó en el capítulo anterior, la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima (ODCV) del Ministerio Público es la encargada de representar a las víctimas de delitos de manera que puedan presentar una acción civil resarcitoria (ACR), es decir, hacer un reclamo dinerario a la persona imputada por los daños y perjuicios causados con su conducta delictiva. Los registros administrativos apuntaban a un uso muy limitado de este derecho, que se justificaba porque los imputados no tenían capacidad de pago. Dado este antecedente, en el muestreo se exploraron las condiciones económicas de los imputados.

En primer lugar, apenas en 24 de 286 casos analizados en el muestreo se presentó una acción civil resarcitoria (7,8% de los expedientes analizados). Por los delitos de maltrato y violación simple fue que se presentaron más acciones civiles, todas estas bajo representación de la ODCV.

Ante una consulta para este Informe, la ODCV indicó que posee una serie de criterios para determinar si, aunque se delegue (se le pida presentar) una acción civil resarcitoria en favor de una víctima se presenta o no. Estos criterios refieren a aspectos prácticos en el sentido de que se parte de que no vale la pena interponer una acción civil si se sabe que la persona no tiene medios para hacerle frente a una eventual condena dineraria. Según dicha oficina, "se valora la denuncia en cuanto al dato personal sobre su salario, profesión, ingreso mensual, se valora titularidad sobre bienes muebles e inmuebles, participación en sociedades, registros en CCSS, y cualquier otro dato adicional que se vislumbre dentro del expediente"[12].

De la información recopilada en el muestreo 33 imputados contaban con ingresos y bienes a su nombre, número mayor que las 24 acciones civiles resarcitorias presentadas aún bajo el escenario que ante dichas posibilidades económicas hubiera sido viable algún resarcimiento económico para las víctimas. De estos imputados, 14 fueron juzgados por violación y 19 por la familia de delitos de la Ley de Penalización.

En cuanto a salario, en 260 casos muestreados el imputado sí tenía, es decir, en el 85% de los expedientes analizados. Y si bien se podría pensar en que no se puede tratar de embargar un salario poco cuantioso, es importante recordar que el monto de salario no embargable, de conformidad con los artículos 172 y 174 del Código de Trabajo, se apareja al salario mínimo en el país, mismo correspondiente al de empleada doméstica[13], que para 2024 asciende a 246.624 colones por lo que existiría un tramo eventualmente sujeto de embargo.

[12] Correo electrónico del 14 de noviembre de 2023.

[13] Cabe recordar que históricamente se han desvalorizado las tareas domésticas, de manera que existe aún una discriminación hacia las trabajadoras domésticas, ya que el salario mínimo de persona trabajadora no cualificada es de ₡ 358.609,5 mensuales, que presenta una brecha significativa con el salario de las labores domésticas ₡ 246.624.

Cabe recordar que hay casos en que, si bien el agresor no tiene medios económicos, la violencia se da en el marco de su labor como funcionario público o empleado privado, por lo que existe responsabilidad por parte de su empleador y podría cobrársele a este, sin embargo, por el tipo de violencias que se estudia en este capítulo, no es el escenario más común.

Los tipos penales estudiados, lamentablemente, se cuentan por miles cada año, por lo que la baja participación de la ODCV representa un riesgo de tutela para las víctimas en el acceso material a la justicia. Se ha incluido como uno de los riesgos de acceso a la información por cuanto no consta en el expediente que las víctimas hayan entendido cuando se les leen sus derechos a interponer una acción civil resarcitoria, tampoco se consigna las razones para no presentarlas o si la víctima explícitamente decide no presentarla.

Riesgo de labor probatoria

El riesgo por labor probatoria está principalmente asociado a los factores que, en una etapa de investigación, tienen relación con las posibilidades de las víctimas de contar con calidad en la justicia. En este tipo de procesos, la prueba es un elemento muy importante porque a partir de ella se acredita o no el hecho delictivo, pero también es el medio que respalda a la autoridad judicial para declarar la responsabilidad penal e incluso civil de una persona.

Cuando se trata de violencia contra las mujeres, la denuncia y la declaración de la víctima son uno de los principales elementos que apoyan en la pieza acusatoria. Sin embargo, también es necesaria la acción de la Fiscalía para ejecutar un proceso de investigación que contribuya en ese aspecto.

> En el proceso penal, la prueba pericial tiene una finalidad consistente en que la misma puede abundar en perfecto beneficio de la víctima de un determinado hecho criminoso, por lo que, en materia de política criminal, la prueba pericial, vista ideológicamente, aprovecha al concepto de la justicia penal, finalidad primera del Derecho Penal y Procesal Penal (Artículo 1965 del C.J.). También, es dable observar que la prueba pericial, dentro del proceso penal y dado su especial carácter de científica, dispone de un elevado porcentaje de veracidad y consiguiente credibilidad por lo que los dictámenes brindados por el perito penal disfrutan de un elevado sentido de autenticidad científica y, siempre y cuando, la prueba pericial sea cónsona y corresponda con la mecánica legal procesal (CIJUL, 2012).

En el sistema penal costarricense no existe la prueba tasada, es decir, que con una única prueba necesariamente se deba tener un resultado concreto y en este sentido, las pruebas periciales no llevan forzosamente a una única interpretación u obligan a un tribunal a fallar de determinada manera pues no son un elemento con una valoración unívoca. Sin embargo, en casos de violencia contra las mujeres y violencia sexual, al ser hechos que suelen cometerse en la intimidad o sin presencia de personas testigas, una valoración psicológica o psiquiátrica forense, una prueba toxicológica, un estudio de marcadores genéticos, entre otros, podrían brindar apoyo probatorio al dicho de la víctima. Además, ayudaría a disminuir un riesgo extrajurídico o externo, que es que las víctimas no denuncien porque sienten que no tienen prueba, que van solas y no les van a creer.

Aunque las pruebas periciales las puede pedir cualquier parte del proceso, es decir, también podrían ser solicitadas por la Defensa Pública o privada, en el muestreo de expedientes se identificó que la instancia que principalmente la solicita es la Fiscalía. Por ese motivo, tal como se explicará más adelante, se debe prestar atención a las capacidades institucionales para gestionar un proceso de investigación que garantice la existencia de pruebas periciales y su oportuno diligenciamiento.

La prueba pericial impacta el desenlace de los casos de violencia contra las mujeres

El análisis efectuado a los expedientes del muestreo permitió identificar que los casos en los que se incorporó prueba pericial al expediente tuvieron más posibilidades de continuar a la etapa de juicio. De los 293 expedientes que fueron tramitados por la instancia de Juzgado Penal, poco más del 60% de ellos tenía prueba pericial incorporada (cuadro 8).

En el estudio se identificó que el trámite desde la etapa intermedia hacia la instancia de Tribunal estuvo caracterizado por una presencia de este tipo de pruebas; y, a la inversa, la ausencia de ellas se incrementó en aquellos casos que fueron desestimados en el Juzgado Penal.

Cuadro 8
Distribución de expedientes atendidos por Juzgados Penales, según resultado y existencia de prueba pericial
(año o período)

Resultado del proceso en instancia de Juzgado Penal	Expedientes con prueba pericial	Expedientes sin prueba pericial
Auto apertura a juicio	163	52
Sobreseimiento definitivo	16	16
Desestimación	8	28

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del muestreo de expedientes de violencia contra las mujeres del PEN, 2024.

La literatura señala que este tipo de elementos de prueba no solo son de trascendencia a nivel procesal, sino que también son un apoyo para las víctimas de estas conductas delictivas porque tienen una función probatoria que contribuye a su defensa (Asensi, 2008). En el caso de los expedientes muestreados, el acceso a la justicia de las víctimas requiere ser comprendido más allá de las posibilidades de denuncia. Es decir, es necesario garantizar a las ofendidas una capacidad institucional que cubra sus requerimientos judiciales, como es el caso de pruebas específicas y de los peritajes judiciales, como complemento de un apropiado abordaje de la entrevista inicial para determinar las pruebas existentes o que podrían gestionarse para respaldar a la víctima.

Ahora bien, una vez que el caso superó la etapa intermedia, las terminaciones por parte del Tribunal Penal también muestran un resultado distinto si en el expediente se aportó prueba pericial (cuadro 9). Se trata de la diferencia que este tipo de elementos de prueba pueden generar sobre la conclusión del proceso. Aquellos casos en los que existió prueba pericial también concluyeron en mayor medida con una condenatoria; aunque debe precisarse que en esta etapa la significancia es menor con respecto al impacto que tiene la prueba en la fase del Juzgado Penal.

Cuadro 9
Distribución de expedientes atendidos por Tribunales Penales, según resultado y existencia de prueba pericial
(año o período)

Resultado del proceso en instancia de Tribunal Penal	Expedientes con prueba pericial	Expedientes sin prueba pericial
Condenatoria (sin procedimiento especial abreviado)	81	19
Absolutoria	60	25
Homologación de procedimiento especial abreviado	8	3

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos del muestreo de expedientes de violencia contra las mujeres del PEN, 2024.

La prueba pericial en materia de violencia contra las mujeres ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la jurisprudencia interamericana. En particular porque, frente a la posición estructural de desigualdad con la que las víctimas deben enfrentar estos procesos, el Estado debe facilitar las posibilidades probatorias con rigor técnico que sean necesarias para una debida atención del caso (Chamorro, Gómez y Tasies, 2023) y protección de las ofendidas.

Con respecto al uso de estas pericias, la mayor parte de ellas son pruebas psicológicas o pruebas psiquiátricas (cuadro 10). Si se toma en cuenta que la existencia de este tipo de pruebas en el expediente aumenta la posibilidad de una tutela judicial efectiva, existe un riesgo sobre aquellos casos en los que tal elemento probatorio estuvo ausente.

Cuadro 10
Solicitud de prueba pericial en delitos de maltrato y femicidio, según tipo de prueba reportado en los expedientes respectivos

Tipo de prueba	Sí	No
Valoración psicológica forense 1	28	163
Valoración psiquiátrica forense 1	17	174
Prueba marcadores genéticos	7	184
Prueba toxicológica	6	185
Valoración psicológica forense 2	5	186
Prueba enfermedades transmisión sexual	4	187
Valoración social forense	3	188
Valoración psiquiátrica forense 2	2	189
Prueba embarazo	1	190
Valoración médica legal	0	191
Pruebas paternidad	0	191
Estudio radio bases	0	191

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del muestreo de expedientes de violencia contra las mujeres del PEN, 2024.

La LPVcM prevé que si la víctima tiene una afectación de su salud mental puede implicar un aumento de hasta un tercio del quantum de la pena. Por ello, la aplicación de esta norma requiere la articulación de acciones y diligencias necesarias para que la víctima acceda de manera efectiva a sus posibilidades y derechos en materia de prueba pericial. En similar sentido, el numeral 157 inciso 5) del Código Penal establece que la afectación grave a la salud de la víctima (incluyendo la mental) torna en calificada la violación, de forma tal que el extremo menor y mayor de la posible pena a imponer sube en 2 años.

El rol procesal de las pruebas periciales es de importancia para la terminación del proceso, pues en los casos del muestreo se pudo identificar una mayor tasa de éxito en la continuación del expediente; y, además, debe tomarse en cuenta que estos son los tipos de pruebas necesarias para aspectos como la ponderación de la pena que será eventualmente impuesta al imputado.

Las valoraciones psicológicas y psiquiátricas forenses son las más utilizadas como prueba pericial en los expedientes donde se investigaron los tipos penales de femicidio y maltrato. De los expedientes analizados en el muestreo del PEN, hace ver que estos dos tipos de pericias están vinculados directamente con la forma en que terminan las causas, dado que cuando existe una valoración psicológica forense, en la instancia de juzgado, a 26 de 28 expedientes se les dictó un auto de apertura a juicio y en la instancia de tribunales, derivó en la condenatoria (sin procedimiento especial abreviado) en 17 de 28 casos.

A pesar lo anterior, el uso de dichas pericias es muy bajo, a decir, la valoración psicológica únicamente se realizó en 28 de los 191 expedientes de la familia de la ley de penalización, es decir, en tan solo un 14,7%.

En similar sentido con la valoración psiquiátrica forense, misma que únicamente se produjo en el 8,9% de los casos. En la instancia de juzgado, los 17 expedientes en que se practicó dicha pericia, en 17 se dictó un auto de apertura a juicio, mientras que, en la instancia de tribunal, en 13 de 17 causas se obtuvo una condenatoria sin procedimiento especial abreviado, así como una homologación de procedimiento especial abreviado, es decir, en solo 3 de las ocasiones no se condenó al imputado.

Con respecto a otros medios de prueba, como es el caso de los testimonios, en los expedientes muestreados se identificó que en 53 casos se incorporó este tipo de insumos probatorios. Sobre ellos, se pudo identificar también quienes son las personas que más frecuentemente apoyan en esta labor probatoria. Las familias son, primordialmente, quienes brindaron mayor soporte testimonial a las víctimas en este tipo de casos, según se identificó en 22 de esos expedientes. En otros 15 expedientes intervino de manera conjunta la Fuerza Pública o el OIJ y familiares; y, en 9 de ellos, rindieron testimonios únicamente agentes policiales.

En casos en donde no hay personas testigas directas, solo le consta lo que pasó a la víctima y al agresor, y además no se logra recabar prueba documental como epicrisis, fotografías, mensajes de texto u otros, se torna de alta importancia contar con mayor acervo probatorio para sostener el dicho de la víctima. Como se mencionaba líneas atrás, al tener prueba más allá del propio testimonio se podría disminuir la angustia a la víctima por sentir que "va sola" a juicio. Independientemente del nivel de empoderamiento que presenten las víctimas de violencia,

algunos peritajes podrían darle seguridad, por ejemplo: una valoración psicológica forense donde se determine que la víctima desde una agresión física o sexual tiene dificultades para dormir, se siente constantemente angustiada y alerta o presenta cualquier otra sintomatología de crisis, sí refuerza el dicho de la víctima, además de revestir un carácter de imparcialidad y cientificidad que juega en favor de la agraviada.

Si bien, por la naturaleza de esta investigación, en el muestreo no se recabaron conclusiones médico legales, cabe resaltar que el que no existe un único resultado deseable de las pruebas psicológicas o psiquiátricas a las víctimas, no es indispensable que se haga ver un estrés postraumático o una depresión para que se les crea, no toda víctima de violencia intrafamiliar o sexual llega a sufrir ese nivel de efecto en su salud mental.

De acuerdo con diversos estudios científicos consultados en el marco de esta investigación, alrededor del 60% de las víctimas de violencia intrafamiliar sufren el trastorno de estrés postraumático. De manera tal que, ante ese nivel de incidencia, así como los datos tendencia que arroja el muestreo de expedientes, se considera que la no realización de alguna valoración de salud mental a la víctima deviene en un riesgo de tutela por labor probatoria. Estos datos tendencia hacen ver que existe relación directa en los casos que se utilizaron dichas pruebas hubo un mayor porcentaje de éxito para las víctimas.

Los procesos en los que intervienen costarricenses imputados también registraron mayor prueba pericial con respecto a aquellos en los que el imputado era de una nacionalidad distinta (gráfico 23). Aunque la cantidad de imputados de nacionalidad extranjera es reducida en este tipo de casos, sí se presenta una brecha con respecto a la existencia de prueba pericial entre costarricenses y extranjeros.

Gráfico 23
Expedientes judiciales según nacionalidad del imputado y existencia de prueba pericial



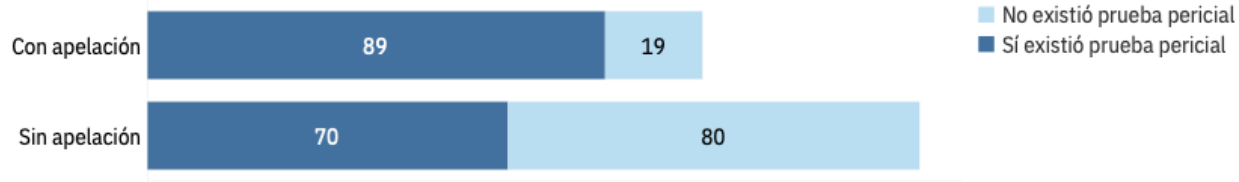
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del muestreo de expedientes de violencia contra las mujeres del PEN, 2024.

En el gráfico anterior es posible observar que existe una distancia reducida entre expedientes con prueba pericial y aquellos que no cuentan con ese elemento cuando se trata de imputados de nacionalidad extranjera. Sin embargo, al tratarse de costarricenses, la brecha es más distante y, según los datos, la cantidad de casos con prueba pericial supera las dos terceras partes.

Un último aspecto para analizar fue cómo se comportaron los expedientes con prueba pericial en relación con la fase recursiva; específicamente en la instancia de apelación. En este caso ocurre algo similar a la situación anterior. La cantidad entre procesos con prueba pericial y sin

prueba pericial no es significativamente distinta sobre los expedientes que no tuvieron apelación. Pero este fenómeno se invierte en aquellas circunstancias en las que sí se presentó una apelación (gráfico 24).

Gráfico 24
Distribución de los expedientes judiciales, según terminación apelación y existencia de prueba pericial



Fuente: Elaboración a partir de la Base de datos del muestreo de expedientes de violencia contra las mujeres del PEN, 2024.

Esto quiere decir que, si bien un proceso con prueba pericial tiene mejores posibilidades de superar la fase de juzgado; también presenta más probabilidad de que el mismo sea apelado. Por su parte, aquellos procesos sin apelación también coinciden en un número superior de casos sin prueba pericial.

La idea clave es que las pruebas periciales tienen un rol importante en este tipo de casos. Particularmente, porque su ausencia en el expediente demostró que los riesgos de tutela por labor probatoria se incrementan y podría comprometer los intereses de las víctimas. Además, se debe tomar en cuenta que la existencia de este tipo de prueba en un expediente también debería ser observada con respecto a la duración o el tiempo que transcurre entre la solicitud del elemento probatorio y su efectiva práctica. Es decir, la sola inclusión de la prueba pericial no significa una tutela judicial efectiva en las diligencias de investigación, pues incluso en esos expedientes se podrían haber presentado plazos amplios entre el momento en que la Fiscalía solicitó la diligencia probatoria, respecto de la fecha en la que efectivamente se le practicó a la víctima.

El rol procesal de las pruebas periciales demostró que estos elementos podrían tener relación con el avance de los expedientes a través de las fases procesales. Por ese motivo se debería prestar atención a los expedientes que, por la multiplicidad de factores que se señalaron, presentaron menos inclusión de estas pericias en los casos judiciales.

Testimonio de la víctima como única prueba

El procesamiento estadístico señala un aumento en el riesgo de no poder continuar con el caso en las siguientes etapas del proceso penal cuando no existen estas evidencias, sin embargo ello no implica que las víctimas logren una condena en un proceso penal con su testimonio como única prueba, y en la muestra se constatan condenatorias sin estos elementos.

Un temor frecuente entre las víctimas de violencia contra las mujeres es sentir que no les van a creer, porque “van solas”, es decir, consideran que no tienen elementos probatorios más que su dicho. Con una buena entrevista a cada víctima, en la mayoría de casos es viable conseguir más prueba, sobre todo documental, como por ejemplo: constancia de matrimonio, contrato de alquiler, publicaciones o mensajes en redes sociales, mensajes de texto por WhatsApp u otra

plataforma de uso común, fotografías de lesiones, epicrisis, constancias de atención o expedientes clínicos; también, dependiendo del caso concreto, podría pedirse un estudio de radio bases para localizar a la persona imputada en el lugar y momento de los hechos, entre otros. Esta debilita diligencia reforzada en el momento de la entrevista es un estándar convencional.

Sin embargo, si por diversos motivos no se dio esta posibilidad, aún si se cuenta únicamente con el dicho de la víctima, de los casos que ingresan al Tribunal penal el 50% son condenatorias, en circunstancias en donde no se contaba con otros testimonios ni prueba pericial.

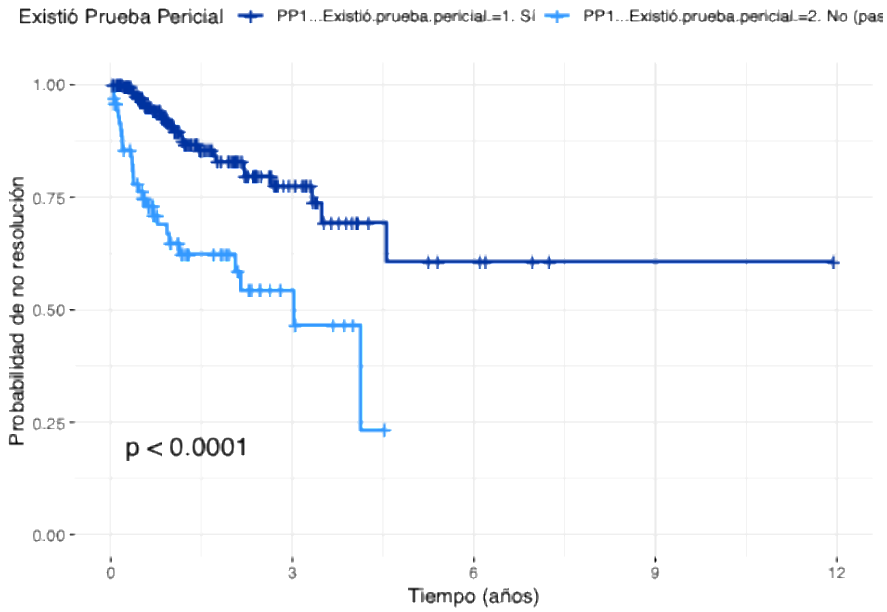
Es posible lograr una condenatoria sin pruebas adicionales al dicho de la víctima, pero sin duda aumenta las dificultades de superar la etapa preparatoria. Por eso es de una alta relevancia que la debida diligencia reforzada y el análisis con enfoque de género de las pruebas sea parte crucial de los primeros momentos de la denuncia. Los testimonios adicionales, por ejemplo, desde la familia, vecinos, colegas, e incluso personal de la Fuerza Pública, OIJ, INAMU, centros educativos que pueden intervenir para reforzar el caso.

Es necesario fortalecer los mecanismos para que las víctimas cuenten con los elementos de prueba que necesitan en sus procesos

El riesgo de tutela vinculado a la labor probatoria tiene un factor asociado de capacidades institucionales. El análisis de supervivencia del expediente en el trámite indicó que, el hecho de que exista prueba pericial (cualquiera) aumenta la posibilidad de sobrevivencia (duración) del caso en el ciclo judicial, con respecto a los que no tienen. Esta podría ser una indicación que la prueba está asociada a que el caso llegue a tribunales y tenga una sentencia e incluso a instancias de apelación o casación, mientras que los demás, en su mayoría, sin prueba no pasan de la etapa preliminar. La supervivencia del expediente implica cuanto tiempo se mantuvo abierto en el proceso, por lo que no puede ser visto siempre como un indicador positivo (gráfico 25).

Durante los talleres de consulta sobre esta investigación, se hizo ver que el pedir ciertas pruebas periciales puede atrasar un expediente varios meses, incluso un año o más, en particular con los informes psicológicos forenses, ante la saturación en el servicio y la ausencia de suficiente personal capacitado para realizar dichas pericias.

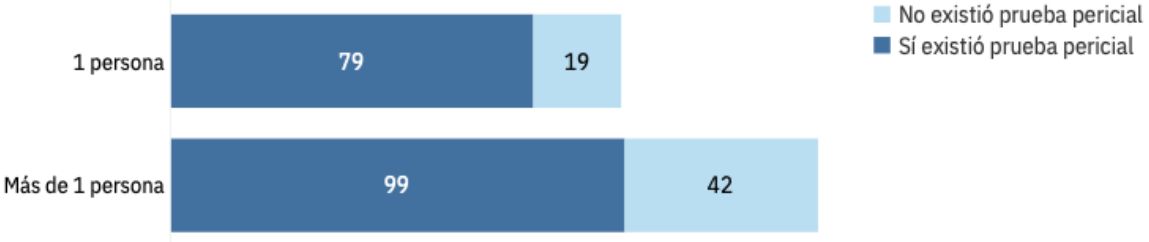
Gráfico 25
Curva de supervivencia de los expedientes según la existencia de prueba pericial



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del muestreo de expedientes de violencia contra las mujeres del PEN, 2024.

En los expedientes en los que sí se tuvo una prueba pericial (cualquiera) también fue posible identificar algunos detalles asociados al expediente. Por ejemplo, los casos en los que solo participó una persona en calidad de Fiscal presentaron mejores posibilidades de que se incorporara este tipo de prueba (gráfico 26).

Gráfico 26
Expedientes judiciales según cantidad de personas fiscalas que participaron en la etapa intermedia y existencia de prueba pericial



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del muestreo de expedientes de violencia contra las mujeres del PEN, 2024.

Ciertamente este es un elemento transversal, pues no solo involucra las capacidades institucionales asociadas con la inclusión de prueba pericial, sino que se relaciona con la capacidad de que los casos puedan ser asumidos en la etapa preparatoria por la menor cantidad de personal posible. La realidad muestra que un número importante de expedientes enfrentan el riesgo de que son atendidos por más de una persona desde el Ministerio Público. Se trata de un riesgo porque, tal como se expuso en el taller, existen escenarios en los que la rotación del

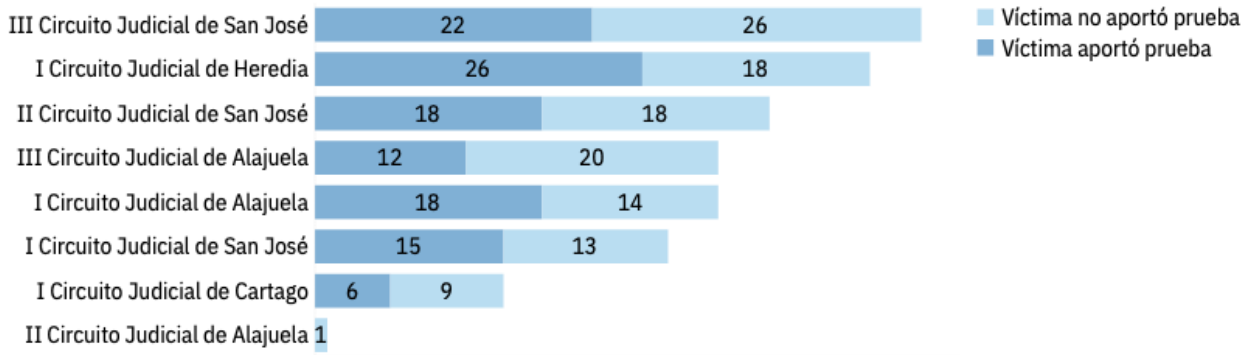
personal ocasiona un seguimiento interrumpido del proceso; y, en ocasiones, esa movilidad de personas fiscales implica una posibilidad más reducida de que la persona responsable pueda tener suficiente tiempo para profundizar en las diligencias procesales que corresponden.

Existen diferencias territoriales con respecto a la inclusión de prueba que proveen las víctimas. Esa realidad visibiliza asimetrías que existen en cuanto a las posibilidades de la víctima de aportar elementos probatorios en los procesos. En el taller de consulta se hizo mención de la necesidad de que las mujeres puedan contar con mayor apoyo para que se genere una representación legal gratuita en sus causas judiciales. Entre los elementos de mayor importancia para estos casos judiciales figura justamente la incorporación de la prueba.

Aunque la prueba pericial puede ser solicitada y gestionada por la propia institucionalidad judicial, no todos los casos se completan con ese tipo de prueba. Algunos de ellos requieren de elementos probatorios que solo están en posesión de las víctimas o de los imputados.

El estudio identificó que las capacidades de las víctimas para incorporar prueba -más allá de su testimonio- varían según el lugar donde se tramitan los procesos. Existen circuitos judiciales en los que se tuvo cantidad similar de expedientes con prueba y sin prueba aportada por las víctimas, como ocurrió en el I y el II Circuito Judicial de San José. Pero en otras circunscripciones se presentan brechas más marcadas (gráfico 27).

Gráfico 27
Expedientes judiciales con prueba aportada por la víctima según circuito judicial



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del muestreo de expedientes de violencia contra las mujeres del PEN, 2024.

En Heredia los procesos involucraron más prueba incorporada por la víctima que en la realidad que enfrentaron estos procesos en otros circuitos judiciales. La necesidad de que las mujeres se vean en una posición de gestión probatoria representa una debilidad institucional, pues el sistema debería contar con las capacidades de brindarles todos los mecanismos al alcance para incluir esos elementos de prueba al proceso y asegurar una tutela judicial efectiva.

La posibilidad de las víctimas de aportar prueba debería ser complementaria a las capacidades institucionales de recabarla. Sin embargo, según se observa en el gráfico anterior, existen circunscripciones judiciales en las que las víctimas recurren con mayor frecuencia a esto.

No resulta meramente simbólico el utilizar más las valoraciones psicológicas y psiquiátricas forenses, evidencias documentales, testimonios, pues no solo podrían variar la denominación o nombre del tipo penal, sino que tiene consecuencias directas en la posible pena a imponer. De forma tal que se estaría ante un riesgo de tutela por labor probatoria, ya que existe la posibilidad de que la búsqueda de material probatorio no sea tan exhaustiva como debiera ser en razón del deber estatal de debida diligencia reforzada si no se diligencian este tipo de pruebas periciales.

En el artículo 8 inciso a) de la LPVcM se prevé que la afectación de la salud mental de la víctima puede implicar un aumento de hasta un tercio del quantum de la pena, y en cuanto las violaciones, el numeral 157 inciso 5) del Código Penal establece que la afectación grave a la salud de la víctima (incluyendo la mental) torna en calificada la violación, de forma tal que el extremo menor y mayor de la posible pena a imponer sube en 2 años.

Con respecto a las pruebas periciales, existen algunos atributos de los procesos penales que también pueden generar brechas que inciden sobre la efectiva presentación de este tipo de elementos. Tal como se indicó anteriormente, un expediente con prueba pericial tiene mejores probabilidades de sentencia condenatoria. La ausencia de este tipo de pruebas, por su parte, incrementa las posibilidades de una terminación absolutoria. Pero la fase en la que más incide es en la posibilidad de que el proceso continúe o no desde la etapa intermedia hacia la etapa de juicio.

En resumen, el riesgo de tutela por labor probatoria se concentró en estos expedientes sobre las implicaciones procesales y de resultados que tiene un caso con prueba pericial, con respecto a otros procesos en los cuales ese elemento está ausente. Un expediente con prueba pericial al que se le complementa prueba aportada por la víctima podría representar mejores oportunidades de una tutela judicial efectiva.

Sin embargo, según se identificó en los datos, existen debilidades institucionales que favorecen la omisión de pruebas periciales en los expedientes; y, en complemento de ello, también se presentan factores territoriales según los cuales hay divergencias entre los casos en los que las víctimas pudieron aportar prueba por sus propios medios.

Existe suficiente respaldo normativo para diligenciar en la fase de investigación las pruebas necesarias para robustecer el expediente. Un ejemplo de ello es el *Protocolo Interinstitucional de Intervención y Valoración de Riesgo en Situaciones de Violencia Contra las Mujeres*. Esa disposición prevé cuáles son los escenarios de riesgo en violencia contra las mujeres, así como los respectivos indicadores y señales que deberían tomar en cuenta las instituciones para actuar frente a este tipo de delitos.

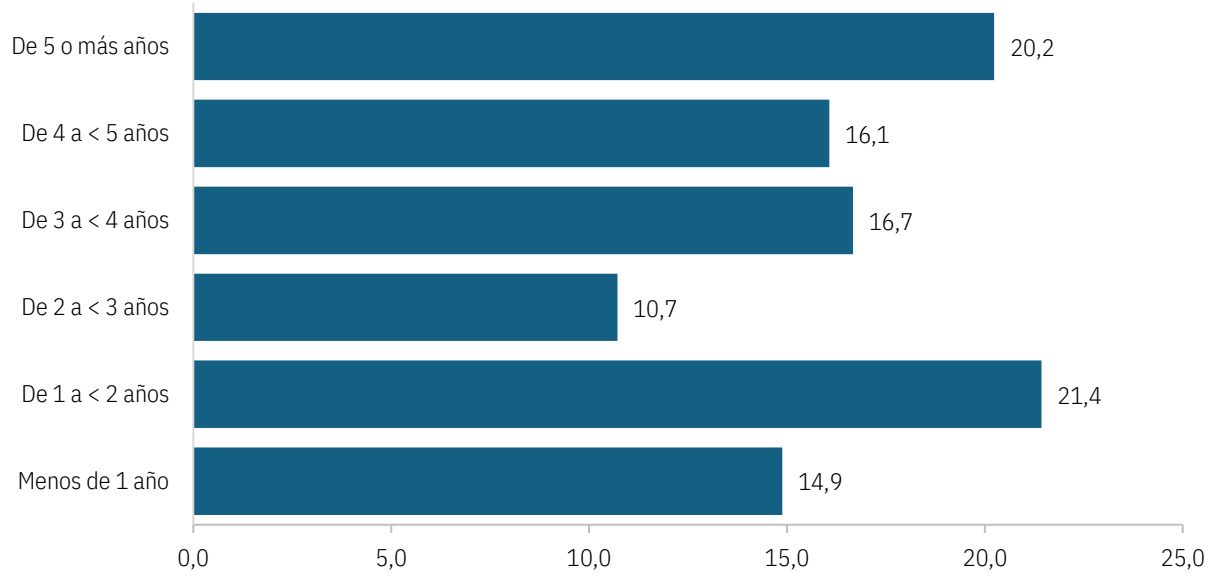
Esos parámetros deberían estar asociados en la práctica con la diligencia de investigación penal necesaria para recabar la prueba pericial según corresponda en cada caso. En la medida en que se omiten las prácticas institucionales asociadas con labor probatoria, también se incrementa el riesgo de una tutela judicial efectiva en perjuicio de las víctimas. Así como se incumple un deber estatal de carácter internacional como lo es el de debida diligencia reforzada que implica dirigir todos los mayores esfuerzos para obtener información y recabar prueba, esta labor probatoria debe realizarse hasta agotar cualquier posibilidad.

Riesgo de duraciones

Las extensas duraciones de los procesos judiciales van en detrimento de derechos de las víctimas y los imputados, independientemente de sus causas, porque prolonga la respuesta y va generando cada vez más riesgos de pérdida de pruebas o elementos que afectan la calidad de la justicia. En los casos de violencia contra las mujeres, este período de espera tiene una repercusión en la integridad física y mental de la víctima, por cuanto está expuesta a la reiteración de la violencia mientras se procesa y sanciona al agresor. En particular, en las etapas iniciales la demora en la denuncia e investigación puede dificultar y provocar fallas que obstaculicen continuar con el proceso. Todo ello aumenta la impunidad en estos casos.

Los muestreos de expedientes permiten sobrepasar los datos estadísticos de duración promedio para medir la duración más detallada por tipos de delitos y formas de resolución, en cada una de las etapas de la vida del expediente judicial. En la muestra analizada, el 53% de los casos presentó duraciones de más de tres años solamente en la primera instancia (gráfico 28).

Gráfico 28
Duración desde el inicio del caso hasta la resolución en primera instancia de delitos asociados con violencia contra las mujeres



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del muestreo de expedientes de violencia contra las mujeres del PEN, 2024.

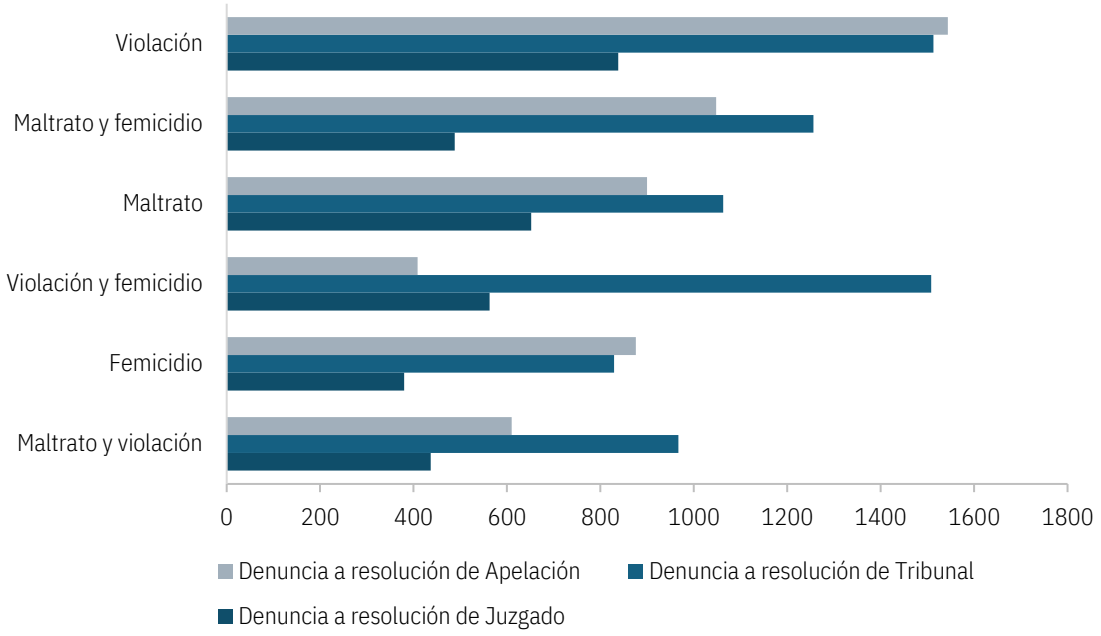
Sin embargo, el dato de los días que tardan los casos de violencia contra las mujeres varía por familias de delito y según la forma en que se terminaron. Como es de esperar, si los casos son cerrados definitivamente en las primeras fases del proceso tienen una duración menor, así en promedio la respuesta más rápida en el juzgado penal es el sobreseimiento definitivo que tarda 384 días en promedio, mientras que una desestimación tarda 551 días, y un auto de apertura de juicio 694 días. Mientras que aquellas personas que logran llegar a un juicio con una sentencia

condenatoria o absolutoria, o un sobreseimiento tienen duraciones mucho más altas que el promedio. El 70% de los juicios con este tipo de sentencias tardaron más de 604 días.

Por otra parte, las duraciones considerando los tipos de delitos, una mayor duración en los tiempos está asociada con más frecuencia a delitos de violación (gráfico 29).

Aunque la muestra de expedientes se tomó en dos años distintos (2019 y 2022), no hay variaciones significativas en las duraciones promedio entre ambos años, por lo que en los datos presentados se suman y no se presentan de manera separada.

Gráfico 29
Duración promedio en días entre el inicio del caso y la resolución final de casos asociados a violencia contra las mujeres, por tipo de delito según instancia



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del muestreo de expedientes de violencia contra las mujeres del PEN, 2024.

El proceso de las víctimas para llegar a la denuncia

La tutela efectiva de derechos para las mujeres no inicia solamente con la interposición de la denuncia. Para llegar ahí, la víctima ha tenido que enfrentar diversos obstáculos fuera del ente judicial. La literatura ha explorado las dificultades de la denuncia de violencia contra las mujeres desde el punto de vista individual o psicológico y, también, desde la perspectiva social o comunitaria, que incluye el marco legal e institucional (Ferrer y Bosch, 2019; Blay, 2014).

Hasta muy recientemente, la violencia contra las mujeres estaba normalizada como parte de la sociedad, por lo que romper con el ciclo de violencia implica superar profundas creencias, comportamientos aprendidos, temores a las represalias que puedan tomar los agresores, dependencia económica propia o de los hijos y, principalmente, el reconocimiento de ser una

víctima de agresión, en muchas ocasiones por parte de sus parejas sentimentales y familiares (Blay, 2014; Pares, 2022).

Durante el taller de consulta de esta investigación se señalaron como obstáculos para el acceso a la justicia la presión de la familia y de la comunidad para no denunciar, la lejanía de las oficinas de algunas comunidades que presentan mayor incidencia, y además la falta de un acompañamiento legal gratuito que guíe a la persona por el complejo entramado judicial del sistema penal.

Otra posible explicación de la baja cantidad de denuncias es la desconfianza existente en las mujeres hacia el Poder Judicial. Esta es una institución concebida globalmente como una estructura machista, liderada por hombres y con sentencias discriminatorias. Se prefieren utilizar otros instrumentos, incluso la policía para detener la agresión en el momento, pero sin acudir a un proceso penal posterior (Blay, 2014).

Distintos estudios de opinión especializados en violencia de género evidencian esta baja denuncia, por ejemplo la encuesta europea indicó que solo un 24% de las mujeres agredidas interpusieron una denuncia (Eurostat, 2023), en Chile el 24% denunció violencia física pero solo 19% denunció violencia sexual (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2020), en México -en el marco de la relación de pareja- este porcentaje es de 20,5 % y el ámbito familiar el 10,1 % de mujeres de 15 años y más presentaron una queja o denuncia ante alguna autoridad y/o solicitaron apoyo a una institución (INEGI, 2021), y en Uruguay sólo el 7,8% de las mujeres víctimas denunció a la policía lo sucedido (Observatorio de violencia basado en género hacia las mujeres, 2022). En este último país, al preguntarles a las mujeres por qué no denunciaron, el 60% consideró que el hecho no era importante, y el 30% dijo creer que la denuncia no generaría ninguna consecuencia.

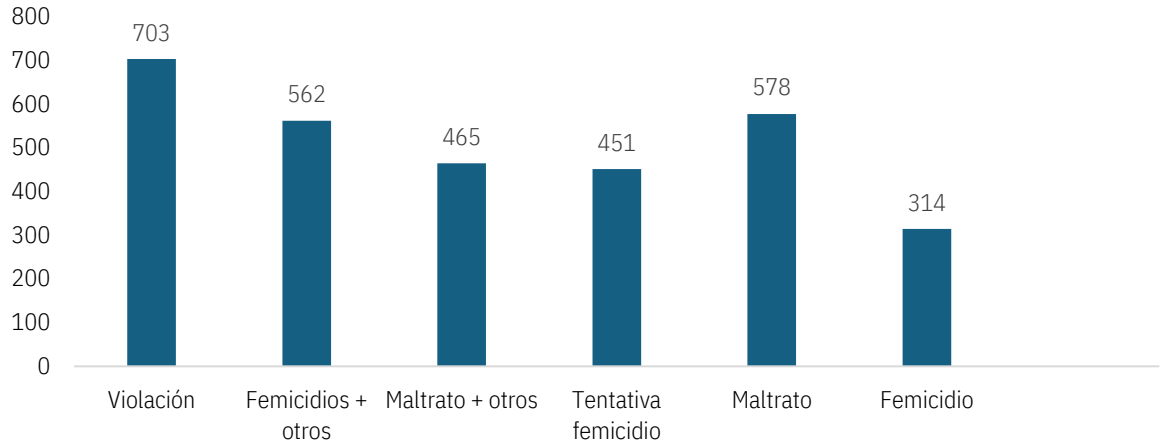
En Costa Rica no existe una encuesta especializada sobre violencia contra las mujeres, que permitiría conocer la incidencia y aproximar la cifra oculta de denuncias con respecto a la cantidad de víctimas. Los registros administrativos de denuncias están dispersos en múltiples entidades desde comisiones municipales de género, la Defensoría de los Habitantes, el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), la policía, las instancias judiciales, entre otras.

A manera de indicador aproximado, en el presente análisis de expedientes judiciales se recopila la duración en la ocurrencia de un hecho de violencia y el momento en que se produce la denuncia judicial. Esta etapa es muy importante porque es una ventana de tiempo donde se pueden recabar más cantidad de las pruebas posibles y de mayor calidad. El tiempo de convencimiento requerido por la persona para acudir a las oficinas judiciales afecta el resultado de su proceso.

Ahora bien, no todas las víctimas quieren o pueden denunciar inmediatamente, sería erróneo promover la idea de que solo los primeros días se puede denunciar un hecho de violencia. Las instancias judiciales deben velar para que las mujeres tengan acceso a la información en cualquier momento, libre de sesgos, estereotipos y presiones, así como en un lenguaje y soporte entendibles para que puedan tomar una decisión en cualquier momento que les resulte.

Desde que se produce el hecho de violencia hasta que las mujeres interpone por primera vez un caso judicial hay un promedio de 84 días de espera, en los extremos más altos de este muestreo se localizaron 3 casos con más de 365 días y uno en que la denuncia se interpuso 1.083 días después. Hay diferencias entre tipos de delito, por ejemplo, entre un maltrato y una violación, pues el primero tiende a tardar más en judicializarse (174 días en promedio versus 32 días, respectivamente; gráfico 30). En estos patrones de espera parece estar influyendo la gravedad del hecho, a mayor gravedad más rapidez en interponer la denuncia, aunque se requerirían más exploraciones específicas con víctimas para confirmarlo.

Gráfico 30
Duración en días desde la ocurrencia del hecho de violencia hasta la interposición de la denuncia en el Poder Judicial, por agrupaciones según tipo de delito

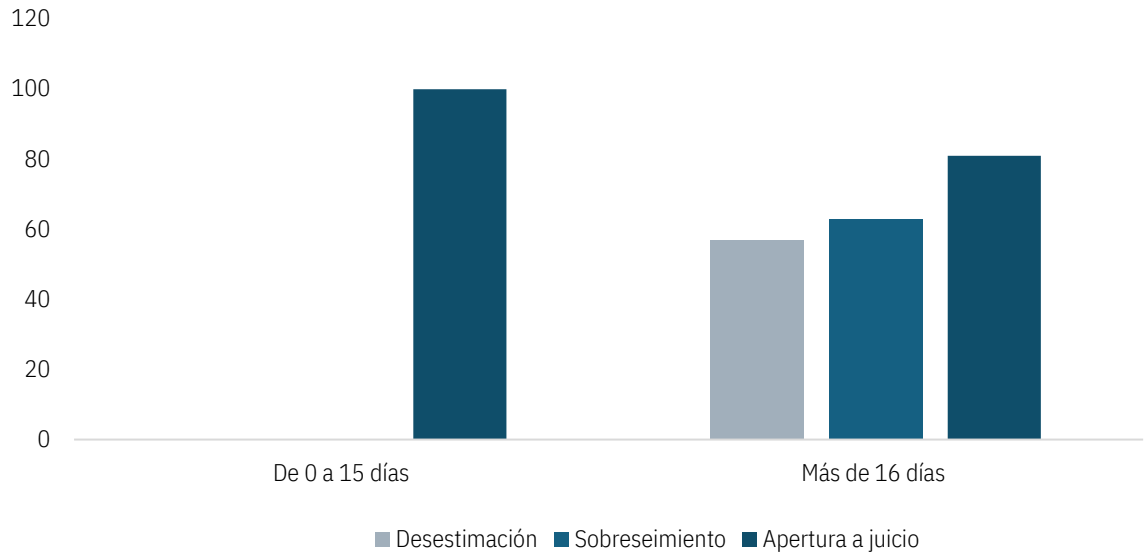


Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del muestreo de expedientes de violencia contra las mujeres del PEN, 2024.

Aunque el femicidio es reportado de manera inmediata, en las tentativas de femicidio se suele depender de la voluntad de la víctima para denunciarlas. En este caso, es importante recordar que la tipificación de un hecho como tentativa de homicidio depende de la Fiscalía. Se ha señalado que existe una distinción -en muchas ocasiones flexible- entre lo que se considera un maltrato y en qué circunstancias de gravedad pasa a ser una tentativa de femicidio (véase recuadro 3). Por ejemplo, en el muestreo de expedientes se documentó que un intento de estrangulamiento puede estar considerado en ambas clases de delitos, dependiendo de las circunstancias, frecuentemente las fiscalías consideran que la conducta encaja como tentativa de femicidio solo si la víctima se estaba quedando sin aire al punto de casi desmayarse y contarlo así de explícito, de lo contrario, si la mujer no lo narra o no se lo preguntan específicamente, podría considerarse erróneamente que es una conducta típica de maltrato. El informe de autopsias sociales de femicidios ILAFEM, anteriormente citado, encontró que en el 70% de los femicidios de 2020 intervino alguna forma de estrangulamiento (PNUD, 2024). Este dato podría generar una alarma especial en el momento de la denuncia, para que se trate de obtener la mayor cantidad de información posible donde se presenta esta modalidad (recuadro 3).

El estudio realizado permitió constatar de varias formas como la denuncia en los primeros momentos del hecho de violencia sí tiene un efecto importante en el tipo de resolución. Ello indica que los obstáculos de acceso a la justicia inician mucho antes de la judicialización en una sede del Poder Judicial. En ese tiempo se puede perder evidencia física, testimonial y disminuye el sentido de urgencia. Para los expedientes que tenían las fechas de ocurrencia del hecho y del día en que se judicializa, la denuncia temprana (antes de 15 días) resultó en una resolución de auto de apertura a juicio en todos los casos (100 expedientes). Ello implica que el caso fue trasladado al tribunal penal para una resolución. Mientras que en las demás denuncias que fueron interpuestas después de los 15 días (201 expedientes) hay una mezcla de resoluciones de desestimación, sobreseimiento y 81 de apertura a juicio (gráfico 31).

Gráfico 31
Duración en días desde la ocurrencia del hecho de violencia y el resultado del proceso en primera instancia



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del muestreo de expedientes de violencia contra las mujeres del PEN, 2024.

Ahora bien, es importante aclarar que, en casos de violación o femicidio la legislación otorga hasta 10 años para denunciar sin que el caso se deba archivar o no se pueda abrir por el paso del tiempo (prescripción). Sin embargo, en relación con el maltrato, las víctimas cuentan con apenas 3 años para iniciar el proceso penal, plazo que no deja de correr aún y cuando se siga en pareja con el agresor y no se haya podido salir de esa relación violenta, lo que representa un riesgo de tutela y es favorable para la impunidad de estas conductas.

Recuadro 3
Resoluciones judiciales que desaplican la legislación especializada[14]

En el 2007 la LPVcM (nº 8589) tipificó expresamente el femicidio. Hoy, luego de algunas reformas, los artículos 21 y 21 bis, regulan una diversidad de escenarios donde las mujeres pueden ser víctimas de la más grave manifestación de violencia en su contra: ser asesinadas por razones de género.

Un estudio jurisprudencial develó que esta ley no contó con una aceptación inmediata en cuanto a su aplicación, pues a nivel práctico se ha cuestionado su validez. Como ejemplos, la resolución nº 1035 del 2021 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José ordenó un juicio de reenvío en un delito juzgado como femicidio, con el argumento de no cumplirse los requisitos de la unión de hecho y no ser posible una interpretación a la luz del Derecho convencional. Esa resolución citó el voto nº 463 del 2020 de la Sala Tercera, que también ordenó la desaplicación de la ley especial en un delito de violación. El mismo voto fue citado en otras resoluciones de la Sala Tercera (nº 1247 del 2021, y un voto salvado de la nº 1189 del 2022). La sentencia nº 346-2022 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste, cuestionó la calificación de tentativa de femicidio, argumentando que la relación de pareja duró solo cuatro meses y para el momento de los hechos el imputado y la víctima tenían tres días de estar separados. Se trata de claras interpretaciones restrictivas a efectos de desaplicar la ley especial.

Es necesario colocar la atención en el ámbito de las tentativas de femicidio, pues el estudio jurisprudencial develó una tendencia a recalificar estos delitos con el objetivo de imponer sanciones menores cuando media "arrepentimiento" del agresor. Esto es así por la aplicación de las figuras penales de *desistimiento voluntario* y *arrepentimiento activo*, las cuales no están reguladas expresamente en la legislación, pero son aplicadas vía doctrina y jurisprudencia[15]. Se aplican cuando, por voluntad del actor el hecho no se consuma, y parten de la premisa teórica de que, quien se arrepiente o desiste de la acción retorna al camino de la legalidad y no requiere sanción.

Se han identificado casos en los que los hechos incluyen escaladas de violencia con previas agresiones y amenazas de muerte, y una vez calificados como tentativas de femicidio, se recalifican en otra instancia como delitos menores, disminuyendo el reproche y la sanción para el agresor. En la resolución nº 243-2020, la Sala Tercera analizó que el imputado incurrió en un *arrepentimiento activo*, pues después de concluir su plan de autor, avisó al hermano de la víctima para que este la auxiliara, razón por la cual se recalificó la tentativa de femicidio a un delito de lesiones. En la resolución nº 1280-2020 de la Sala Tercera, aunque el tribunal de juicio y el de apelación calificaron una tentativa de femicidio, la Sala recalificó a un delito de maltrato alegando la presencia de un desistimiento, disminuyendo una pena de doce años de prisión a una que podía ser de tres meses a un año. Este criterio ha sido retomado por otros órganos con el fin de sustentar recalificaciones de hechos inicialmente acusados como tentativas de femicidio. Así se dio en la resolución nº 232-2023 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José, que confirmó un delito de maltrato

[14] S. Guillén. 2024. "Función social del Derecho en materia de género: Un análisis sobre los desafíos teórico-prácticos de la regulación del delito de femicidio en Costa Rica", 2024. Stephanie Guillén Rivera Tesis completa.pdf - Google Drive

[15] En la doctrina existe una amplia discusión sobre cómo y dónde aplicarlas en la Teoría del Delito. En Costa Rica se asumió como tesis jurisprudencial de la Sala Tercera que el desistimiento afecta el ámbito de la punibilidad, y sin analizar otras posibilidades, se continuó aplicando dicho razonamiento por costumbre. R. Chinchilla. "El desistimiento voluntario: causa de atipicidad en Costa Rica". (2017). Revista Ius Puniendi Nº 3. (99+) El desistimiento voluntario: causa de atipicidad en Costa Rica | Rosaura CHinchilla-Calderón - Academia.edu

en el lugar de una tentativa de femicidio. En todos los casos citados mediaron elementos comunes como ciclos de violencia, previa imposición de medidas de protección para la mujer, previas amenazas de muerte, acciones idóneas para dar muerte, considerables daños físicos a la mujer posterior al hecho, y una disminución de la sanción del agresor debido a la recalificación.

En materia de violencia contra las mujeres, a partir de los aportes de la psicología y la sociología, se comprende que el "arrepentimiento" es una de las fases del Ciclo de Violencia[16] y que, al ser momentáneo, la próxima manifestación sería mucho mayor pudiendo consumarse el femicidio. Esto desvirtúa científicamente la premisa teórica penal del "retorno a la legalidad" contenida en las figuras de *desistimiento* y *arrepentimiento*. Así, la libre aplicación de estas sin un análisis riguroso a la luz de la dogmática penal y sin un enfoque de género, promueve escenarios de reproducción y tolerancia de la violencia.

La investigación que se resume en este recuadro concluye que el análisis de los contextos y condiciones donde operan los ciclos de violencia y la reiteración de agresiones previas al femicidio son esenciales en el abordaje judicial de todas las muertes de mujeres donde ha operado una razón de género, desde la etapa de investigación judicial hasta el dictado de la resolución. Asimismo, se requiere enfocar la atención en las tentativas de femicidio, pues actualmente está operando un tratamiento que propicia escenarios de mayor vulnerabilidad para las mujeres, al enfatizar en el "arrepentimiento" del agresor para disminuir su sanción y reproche. Este ámbito representa un margen de acción u omisión institucional con gran incidencia en el desenlace de los casos de violencia contra las mujeres. El proyecto de ley N° 3742 presentado en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa propone que, una vez incluidas en la normativa penal, las figuras de desistimiento voluntario y arrepentimiento activo reciban un tratamiento diferenciado en delitos donde media de violencia contra las mujeres, como forma de frenar la cultura de justificación, legitimación y tolerancia institucional presente en esta materia.

Fuente: Guillén, 2024.

Denuncia temprana en las siguientes 72 horas tiene efectos positivos en las etapas iniciales

Uno de los objetivos del muestreo de expedientes fue comprobar la aplicación en la práctica de una serie de medidas que ha tomado el Poder Judicial para mejorar el tratamiento de los casos de violencia contra la mujer (véase capítulo 2). En concreto se indagó con mucho detalle sobre el uso del Protocolo de 72 horas, el cual permite atender de manera prioritaria a las víctimas de delitos sexuales con el propósito de disminuir la probabilidad de infección por VIH e ITS y la revictimización, así como obtener las evidencias legales para el proceso judicial. En el momento de redacción de este informe (agosto 2024), estaba en la agenda legislativa una iniciativa para convertirlo en ley, de tal forma que se asegure su acatamiento obligatorio pues hasta ahora es una relación de colaboración voluntaria entre múltiples entidades públicas.

En 2023, la Contraloría General de la República en el "Informe de Auditoría sobre la eficacia de las acciones estatales para la prevención, atención y reparación de la violencia contra la mujer", planteó la necesidad de diseñar indicadores de monitoreo, evaluación e impacto en la aplicación

[16] Compuesto por la fase de acumulación de tensión, la de agresión aguda, y la de arrepentimiento, que lleva a la reconciliación y a una aparente calma. Walker, L. "El síndrome de la mujer maltratada". 1979. https://es.scribd.com/document/416997964/El-Sindrome-de-la-Mujer-Maltratada-Walker-L-pdf

del protocolo y la creación de una comisión para monitorear su logro. Ello debido a que las instituciones involucradas (CCSS, INAMU, etc.) no están sistematizando información sobre el Protocolo de 72 horas, y ello dificulta conocer sus resultados (fuente).

En la muestra analizada no fue posible identificar los expedientes en los que se aplicó este instrumento pues no se solicita que las personas operadoras judiciales lo registren explícitamente en el expediente. Se intentó establecer de maneras aproximadas, por ejemplo, si se usó antirretrovirales o anticonceptivos, pero solo cinco casos registraron esa información, en la mayoría no se consigna ninguna de las posibilidades que implica el Protocolo. Debido a este vacío de información se ha utilizado como un indicador aproximado los casos de delitos sexuales en los cuales la denuncia se hizo dentro de las 72 horas posteriores al hecho acusado y se asume que en todos esos casos se ha aplicado el Protocolo.

En los expedientes muestreados, cuando la denuncia se judicializa en estos primeros 3 días después, las etapas de investigación y preparatoria se acortan casi a la mitad, con respecto a los casos sin protocolo, que siguen siendo la mayoría.

Los resultados del muestreo de expedientes arrojaron que la aplicación del Protocolo de las 72 horas en los casos de violencia sexual, reduce notoriamente los tiempos entre cada evento del proceso, en comparación en los casos donde no se aplica dicho protocolo. El tiempo total del proceso tarda hasta tres años menos. En consecuencia, el protocolo tiene un éxito en el acortamiento de los tiempos, tanto entre etapas como en la duración total del proceso.

Si se comparan los motivos de cierre en la instancia de tribunal en casos de violación entre casos denunciados dentro de las 72 horas del evento y todos en conjunto, se tiene que, con el filtro de 72 horas, se condena al 66,7% de las veces, frente a un 44,7% cuando se elimina dicho filtro. Se denota que la rapidez con que se denuncie desempeña un rol importante en las posibilidades de obtener una sentencia condenatoria.

Ahora bien, el efecto del protocolo se diluye en las siguientes fases del proceso. Los procesos en la familia de delitos de la LPVcM fueron menores a largo plazo que en los delitos de violencia sexual. A pesar de que en los delitos de violencia sexual las primeras etapas son más cortas en tiempo que los de la LPVcM debido al protocolo de 72 horas, pero largo plazo se resuelven antes la familia de delitos de la LPVcM que los sexuales.

Duraciones extendidas en las etapas iniciales se incrementan por cambios de audiencias

La etapa preparatoria se extiende desde que ingresa la denuncia y se convierte en un expediente judicial hasta el momento en que el Ministerio Público hace el traslado hacia el juzgado penal respectivo. Ello incluye la investigación que realiza la policía judicial dirigida y ordenada por el MP, la presentación de informes, y la preparación dentro del MP. Mientras que la etapa intermedia inicia cuando el expediente ingresa al juzgado penal para que éste realice una audiencia preliminar y dicte una resolución sobre la continuidad del caso hacia la etapa de juicio (resolución de auto de apertura a juicio) o su finalización en ese momento (desestimación, sobreseimiento u otras).

En esta sección se analizarán los plazos para llegar a esta primera resolución judicial, que deben esperar las víctimas de los delitos relacionados con violencia contra las mujeres analizados en este capítulo. Las duraciones en estas fases dependen en primera instancia del MP, el OIJ, los juzgados penales, y por supuesto, de las intervenciones de las partes involucradas, quienes pueden introducir solicitudes y cambios que alteren el proceso.

En primer lugar, las tareas de investigación son el sostén del caso y por lo tanto tienen una relevancia crucial. El informe sobre acceso de la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género (OEA, CIDH, 2007) subrayan que las deficiencias en las investigaciones –como la no realización de pruebas clave para lograr la identificación de los responsables o la gestión de las investigaciones por parte de las autoridades que no son competentes imparciales– obstaculizan los procesos de juzgamiento. La CIDH identificó la ausencia de pruebas físicas, científicas y psicológicas para establecer los hechos, lo que ha significado el estancamiento por falta de prueba.

Como se verá más adelante, las pericias y exámenes se localizaron solamente en el 28% de expedientes revisados, con lo cual es posible aislarles y darles seguimiento. En cuanto a la duración, la existencia de informes y peritajes no tienen un efecto directo en la duración de los procesos a nivel global. Sí es cierto que puede aumentar la etapa preparatoria levemente en ese porcentaje, pero se compensa con una etapa preliminar y de juicio que no difieren del promedio general.

Si solamente se analiza desde la denuncia hasta la primera resolución del juzgado penal, las duraciones oscilan entre más de 700 días para delitos de violación, y en el otro extremo menor para maltratos. En esta fase aún no se ha dictado ninguna resolución de responsabilidad penal, solamente es la preparación para argumentar y documentar que un caso tiene mérito para ser ventilado en un tribunal penal.

En esta etapa intermedia, un factor que incrementa las duraciones son las múltiples convocatorias a audiencias. En el 66% de los casos se convocó a audiencia solo una vez, en promedio tardaron 460 días entre el ingreso de la denuncia y esta cita. Mientras que, en el tercio restante, se suspendió la primera audiencia y se pospuso. Cuando hay dos o tres convocatorias a audiencias la duración aumenta 100 días.

La sustitución de fechas de audiencias es una problemática que se ha señalado también en otros *Informes Estado de la Justicia* (2015, 2022). Aunque es generalizada en la materia penal (60% de los casos totales), en los casos de violencia contra las mujeres esta postergación resulta un agravante por el riesgo de revictimización y el peligro que conlleva de extensas duraciones o prescripción.

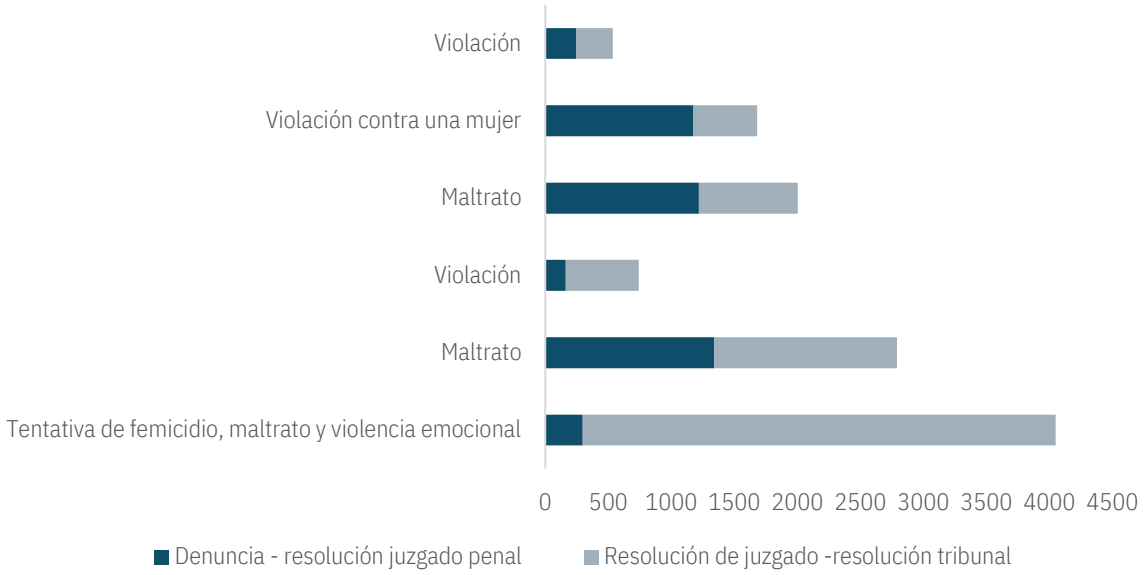
Prescribieron siete casos relacionados con violencia contra las mujeres

En ediciones anteriores del *Informe Estado de la Justicia* se ha señalado que la prescripción es un riesgo de tutela de derechos ya materializado, es decir la denegación de justicia, por cuanto las personas involucradas no lograron una resolución por una tardanza del propio sistema judicial, y no por los méritos del caso en cuestión.

Tres denuncias de maltrato, tres de violaciones y una de tentativa de femicidio prescribieron durante el proceso judicial, 4 a nivel de juzgado penal y 3 en los tribunales. El único delito que no presenta prescripciones es el femicidio. Es importante mencionar que únicamente se consignaron las prescripciones que están explícitamente señaladas en el expediente como tales.

Los casos prescritos presentan duraciones de hasta 21 o 10 años y otros 910 días, contabilizadas desde la denuncia hasta la resolución de cierre del caso. Se puede establecer una responsabilidad compartida en la etapa preliminar como en la etapa de juicio pues las duraciones son elevadas en ambas instancias con variaciones en cada caso (gráfico 32).

Gráfico 32
Duración de los casos prescritos relacionados con violencia contra las mujeres, por etapa
(duraciones en días)



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del muestreo de expedientes de violencia contra las mujeres del PEN, 2024.

Los casos prescritos tienen varias características en común, sin embargo, sobresale el hecho de que en seis de los siete el imputado es un hombre de nacionalidad nicaragüense, mientras que dos de las víctimas son también de esta nacionalidad. Las medidas cautelares sí estuvieron presentes ante un riesgo de fuga hacia su país de origen, en dos casos hubo dictado de prisión preventiva y otros dos la solicitud de firma periódica en el juzgado e impedimento de contactar a la víctima (cuadro 11).

En tres casos no se pudo realizar la audiencia porque los imputados no se presentaron, paradójicamente, dos de ellos estuvieron en prisión preventiva por un tiempo, pero la realización del juicio tardó varios años y tuvieron que ser puestos en libertad. Mientras que los tres juicios en tribunal penal no se llevaron a cabo por la no asistencia del imputado, los testigos y por suspensión a raíz de la pandemia por covid-19.

Cuadro 11
Casos que prescribieron por la duración en cada etapa del proceso judicial, según características de las partes y lugar

Resolución final	Tipo de delito	Circuito	Nacionalidad de la víctima	Nacionalidad del imputado	Duración total
Sobreseimiento por Prescripción	Tentativa de femicidio	I Circuito Judicial de Alajuela	Nicaragüense	Nicaragüense	4.600
Sobreseimiento por prescripción	Maltrato	I Circuito Judicial de San José	Nicaragüense	Nicaragüense	4.394
Sobreseimiento por prescripción	Violación	I Circuito Judicial de San José	Costarricense	Nicaragüense[a/]	910
Absolutoria	Maltrato	III Circuito Judicial de San José	Costarricense	Costarricense	NA
Sobreseimiento definitivo	Maltrato	I Circuito Judicial de San José	Costarricense	Nicaragüense	7.986
Sobreseimiento definitivo	Violación contra una mujer	III Circuito Judicial de San José	Costarricense	Nicaragüense	4.788
Sobreseimiento definitivo (art 311. incisos a, b, c, d)	Violación	I Circuito Judicial de Alajuela	Costarricense	Nicaragüense[a/]	874

a/ Dictado de prisión preventiva como medida cautelar.
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del muestreo de expedientes de violencia contra las mujeres del PEN, 2024.

Riesgo de revictimización en la labor judicial

La revictimización refiere a una situación en la cual se expone a las personas víctimas de delitos o testigos y testigas a revivir el sufrimiento causado por la situación de agresión, por ejemplo, cuando deben rendir sus declaraciones oralmente. La persona ya ha sufrido de por sí el hecho delictivo, y en la búsqueda de justicia debe presentar y recordar los hechos de nuevo. El personal judicial debe procurar que el acceso a la justicia no implique repeticiones innecesarias que vulneren a la víctima en muchas ocasiones durante el proceso.

La revictimización puede ser analizada en el muestreo de expedientes en aquellos casos donde se constatan reprocesos tales como ampliaciones o aclaraciones de la denuncia, repetición de pruebas periciales por errores, cambios de personal (defensor (a) o fiscal (a)) que implica poner al corriente a otra persona distinta, suspensiones de audiencias o juicio, declaraciones de incompetencia, entre otras.

Suspensiones de audiencia y juicios atribuibles a personas operadoras judiciales
De los casos analizados aquí que sufrieron una reprogramación, el 63% tiene su origen en las instancias judiciales, mayoritariamente por un choque de audiencias, es decir que alguna de las personas operadoras judiciales tenían otra convocatoria previamente programada, o por

ausencia de personal por diversos motivos (incapacidad, vacaciones, salida del país, huelga), especialmente de parte de la Defensa Pública que presentan mayores dificultades -tanto jurídicas como administrativas- para hacer sustituciones en un proceso en marcha. En estas causas se denota una saturación de agendas y falta de personal en el contexto de recursos humanos limitados por la congelación de plazas y presupuesto judicial decreciente. Además, en el período de estudio 2019 y 2022 se encontraron cancelaciones de audiencias debido a la pandemia por covid-19 o existencia de órdenes sanitarias en los centros penitenciarios (12% de los casos suspendidos; cuadro 12).

Mientras que el 25% de suspensiones de audiencias son de índole externa al Poder Judicial, se deben a la ausencia de las partes, mayoritariamente el imputado. El riesgo de fuga o de ocultarse está presente en 15 casos, lo que puede ameritar una aplicación más rigurosa de medidas cautelares para garantizar la localización de los sospechosos durante el plazo de la etapa preparatoria. Además, es preciso acortar los tiempos de espera en esta etapa para que dichas medidas cautelares no se diluyan por los retardos, por ejemplo, cuando la etapa de investigación tarda más de lo que es posible mantener las medidas cautelares más fuertes como las prisiones preventivas.

Nótese que solamente se encontraron dos casos de la muestra en los que la víctima no se presentó. Este hallazgo es muy importante para demostrar que no es el desinterés de las mujeres el obstáculo para la realización de esta primera audiencia. Eso contradice un argumento generalizado de que este tipo de casos no prosperan porque las víctimas los abandonan. Al menos en la primera instancia no se evidenció esta justificación en el muestreo.

El riesgo de tutela de derechos en esta fase del proceso se concentra en la revictimización de las mujeres, debido a las anulaciones de audiencias por motivos de actividad procesal defectuosa, falta de pruebas periciales, poca información sobre sus derechos a la víctima, falta de notificaciones, cambios de defensa, entre otros, que generan reprocesos y exposiciones una y otra vez de las mujeres con sus agresores.

Cuadro 12
Suspensiones de audiencia, según el motivo expresado en expedientes de violencia contra las mujeres

Atribuibles a personas operadoras judiciales		Atribuibles a las partes	
Choque de audiencias o reorganización de agendas	17	Imputado no se presentó	15
No se trasladó imputado del Centro Penitenciario	6	Ausencia de la víctima	2
Incapacidades de operadores judiciales	6	Abogado solicita más tiempo	2
Actividad procesal defectuosa	5	Abogado privado no se presenta	1
Ausencia defensora público (vacaciones, fuera del país)	4	Cambio de defensa privada	1
Huelga	3	Subtotal	21
Falta de notificaciones	3	Otros	
Falta prueba pericial o informes	3	Pandemia	10
Cambio de defensa pública	2		

Atribuibles a personas operadoras judiciales		Atribuibles a las partes	
Choque de audiencias o reorganización de agendas	17	Imputado no se presentó	15
No se trasladó imputado del Centro Penitenciario	6	Ausencia de la víctima	2
Incapacidades de operadores judiciales	6	Abogado solicita más tiempo	2
Actividad procesal defectuosa	5	Abogado privado no se presenta	1
Ausencia defensora público (vacaciones, fuera del país)	4	Cambio de defensa privada	1
Huelga	3	Subtotal	21
Falta de notificaciones	3	Otros	
Falta prueba pericial o informes	3	Pandemia	10
No se consignó informar los derechos de la víctima	1		
Juzgado no sabía que imputado era reo preso	1		
Incompetencia territorial	1		
Subtotal	52		

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del muestreo de expedientes de violencia contra las mujeres del PEN, 2024.

Riesgo por factores externos

Las principales causas de la violencia contra las mujeres son la inequidad de género y la discriminación, ambas influenciadas por los "desequilibrios históricos y estructurales de poder entre hombres y mujeres" (ONU Mujeres, 2010a) que trascienden las esferas públicas y privadas, así como, los derechos culturales, económicos, políticos y sociales. Las inequidades entre hombres y mujeres se manifiestan en "limitaciones de libertades, opciones y oportunidades de las mujeres" (ONU Mujeres, 2010a).

Sin embargo, la violencia contra las mujeres no solo es una consecuencia de la inequidad de género y la discriminación. Existe una serie de características o situaciones que aumentan la probabilidad de que ocurra un hecho de violencia contra una mujer. De acuerdo con el enfoque ecológico (cuadro 13), los factores de riesgo varían según las condiciones biológicas, culturales, económicas, normativas y sociales existentes a nivel individual, familiar, comunitario y social/institucional (ONU Mujeres, 2010b).

Cuadro 13
Factores de riesgo, por tipo de nivel según el modelo ecológico para evaluar la violencia

Tipo de nivel	Ejemplos de factores de riesgo
Individual	Atestiguar o experimentar abuso desde la infancia Tener un padre ausente o que manifiesta rechazo Abuso de sustancias Pertenencia a grupos marginados o excluidos
Familiar	Conflicto y tensión dentro de una relación íntima Control masculino en la toma de decisiones y respecto a los bienes Presencia de disparidades económicas, educativas, etarias y laborales entre hombres y mujeres al interior de una relación íntima Actitudes y prácticas que refuerzan la subordinación femenina y toleran la violencia masculina como dote, pagos por la novia y matrimonio precoz
Comunitario	Limitadas oportunidades económicas Acceso inseguro al control de derechos de propiedad y de tierras. Influencia negativa de pares sociales Aislamiento de las mujeres respecto a sus familias y pares sociales Falta de espacios físicos y/o virtuales que permitan la libre expresión y comunicación de mujeres y niña. Falta de encuentros para desarrollar redes de apoyo que permitan vincular asesores y buscar consejos en un entorno de apoyo
Social/institucional	Limitado marco legislativo y de políticas para prevenir y enfrentar la violencia Uso generalizado de la violencia para enfrentar conflictos Falta de sanción (impunidad) para perpetradores de la violencia Bajos niveles de concientización por parte de los proveedores de servicio, actores judiciales y encargados de hacer cumplir la ley

Fuente: Elaboración propia con datos de ONU Mujeres, 2010a y 2010b.

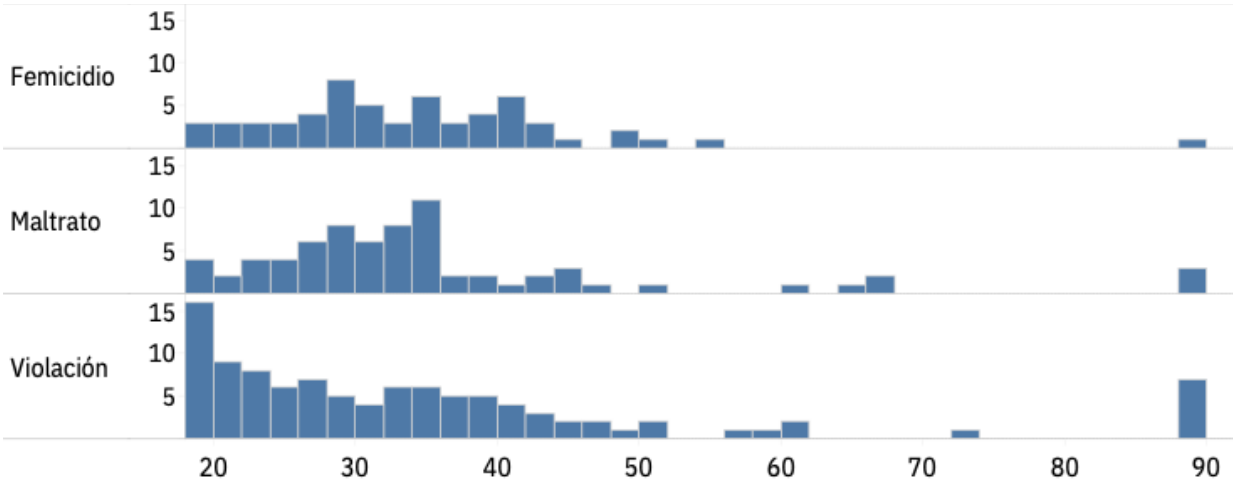
Una de las realidades que enfrentan las víctimas de este tipo de violencia es la desigualdad social que está presente en sus contextos. En el Informe Regional sobre Desarrollo Humano del 2021 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se hizo mención sobre cómo la violencia en perjuicio de las mujeres puede agravarse si se presentan múltiples realidades de desigualdad y brechas sociales (PNUD, 2021).

Afectación diferenciada según perfil de las partes

Para el caso del estudio efectuado a los expedientes, se indagó la existencia de elementos que trascienden a la institucionalidad judicial pero que de igual modo podrían perjudicar el acceso y la calidad de la justicia a las víctimas. La identificación de los riesgos por factores extrajudiciales reconoce el enfoque de interseccionalidad y la presencia de estigmatización social e institucional cuando se presenta este tipo de violencia. La desigualdad asociada a este riesgo se debe principalmente a las relaciones jerárquicas y asimétricas entre la víctima y su agresor, pero también por las características sociales y económicas de las víctimas, las diferencias de edad, entre otros.

La edad de las ofendidas se identificó como un factor que se comporta de modo distinto según el tipo penal del expediente. Por ejemplo, cuando se trató de casos en los que mediaba el delito de violación, el valor se incrementa significativamente en víctimas menores de 25 años. Ese aspecto es diferenciador en relación con las otras formas delictivas (gráfico 33).

Gráfico 33
Distribución de expedientes judiciales, por delito según la edad de la víctima al momento de la denuncia en Fiscalía

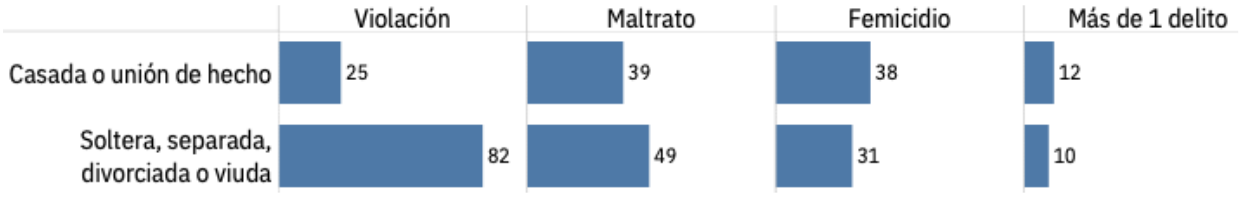


Nota: Se han excluido los expedientes que corresponden a delitos agrupados.
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del muestreo de expedientes de violencia contra las mujeres del PEN, 2024.

El delito de maltrato perjudica principalmente a mujeres de entre 25 y 35 años. Las diferencias etarias en este caso sí inciden como un factor extrajudicial, de modo que el riesgo de comisión delictiva se diferencia según la edad de la víctima. Las previsiones institucionales asociadas a protección de las mujeres deben contemplar este tipo de patrones, de modo que se pueda brindar una respuesta procesal que también reconozca tales realidades; incluso para efectos de prevención.

Otro factor que visibiliza un comportamiento diferenciado entre los delitos es la situación conyugal de las víctimas. El delito de violación se incrementa en aquellos expedientes sobre los cuales se registró que la víctima era soltera o no tenía un vínculo conyugal (gráfico 34).

Gráfico 34
Distribución de expedientes, por tipo de delito según situación conyugal de las víctimas



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del muestreo de expedientes de violencia contra las mujeres del PEN, 2024.

Cuando se trata del delito de maltrato, la brecha de expedientes entre la existencia de un vínculo conyugal o no se disminuye. Pero cuando se trata del delito de femicidio, incrementa levemente la cantidad de casos con respecto a las víctimas sobre las cuales sí existe algún tipo de ligamen conyugal activo. Una hipótesis de investigación a futuro a partir de estos datos podría explorar cuáles son las razones por las que el delito de violación presenta un descenso importante cuando se trata de casos judiciales en los que la ofendida mantiene un vínculo. Sobre esto, Martínez, (2021) señala:

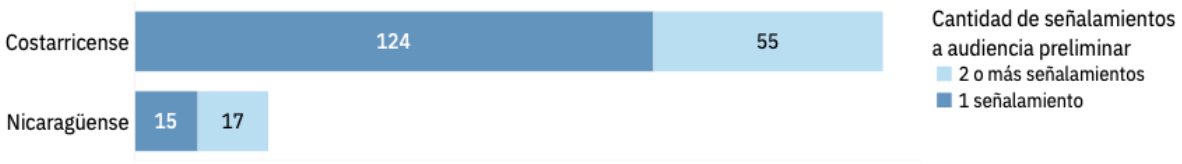
> Dada la naturaleza de la violencia infligida por la pareja y la violencia sexual, su acaecimiento y repercusiones se suelen "ocultar", lo cual da origen a una subestimación considerable de la magnitud real del daño causado. Sin embargo, las encuestas poblacionales realizadas indican que estas formas de violencia son frecuentes. Por ejemplo, el Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer (García-Moreno et al., 2005) reveló que entre 15% y 71% de las mujeres han sufrido violencia física o violencia sexual infligida por una pareja en algún momento de sus vidas (OMS, 2010).

Se trata de un riesgo por factores extrajudiciales, porque son aspectos sociales que impiden, por ejemplo, la posibilidad de que el caso pueda judicializarse. La ausencia del expediente en el circulante judicial no representa necesariamente que la violencia no ocurra.

Además, como se ha indicado, estos procesos tuvieron una dificultad en el registro de los datos. No siempre se logra que la oficina judicial que tramita el caso consigne la información de interés de las personas intervinientes. La disponibilidad de estos registros tiene el potencial de generar más y mejores insumos para la toma de decisiones, así como de contribuir en análisis de este tipo.

Existen otros factores que no están necesariamente asociados con el fenómeno delictivo, sino con el tratamiento institucional que se brinda a las víctimas a partir de atributos, rasgos o características socio demográficas. Un ejemplo de esto es que las mujeres nicaragüenses tuvieron menos posibilidades de que sus procesos tuvieran audiencia preliminar en el primer señalamiento (gráfico 35).

Gráfico 35
Expedientes judiciales con nacionalidad de la víctima registrada, según cantidad de señalamientos a audiencia preliminar

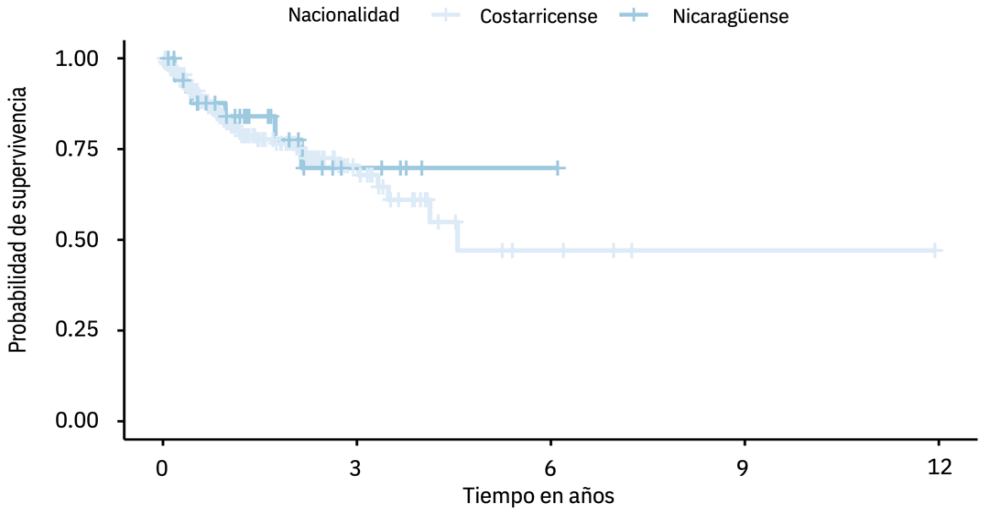


Nota: Se excluye a 7 expedientes que corresponden a otras nacionalidades.
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del muestreo de expedientes de violencia contra las mujeres del PEN, 2024.

Mientras que la realización de la audiencia preliminar en el primer señalamiento pudo ser una realidad en casi 6 de cada 10 casos de costarricenses, la situación se invierte cuando se trata de expedientes en los que las víctimas eran de nacionalidad nicaragüense. Esto materializa un riesgo para la tutela judicial efectiva. Cada vez que a una mujer se le obstaculizó la realización de la audiencia preliminar en el primer señalamiento, eso ocasionó un mayor atraso en la atención de su proceso, un riesgo de revictimización y un retardo en el acceso a la justicia.

Por otra parte, un análisis de probabilidad con el modelo Kaplan-Meier permitió conocer la sobrevida de los expedientes en el proceso judicial, según la nacionalidad de las víctimas. Este análisis se realizó con los casos en los que se consignó ese dato. Una precisión importante es que mide el ciclo de supervivencia del expediente en el trámite; sin embargo, el hecho de que el proceso concluya no necesariamente representa que se haya brindado una respuesta satisfactoria a la víctima. Los expedientes en los que figura una víctima de nacionalidad nicaragüense sobreviven casi la mitad en el ciclo judicial, con respecto a los que corresponden a mujeres de nacionalidad costarricense (gráfico 36).

Gráfico 36
Probabilidad de supervivencia de los expedientes judiciales, por año según nacionalidad de la víctima



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del muestreo de expedientes de violencia contra las mujeres del PEN, 2024.

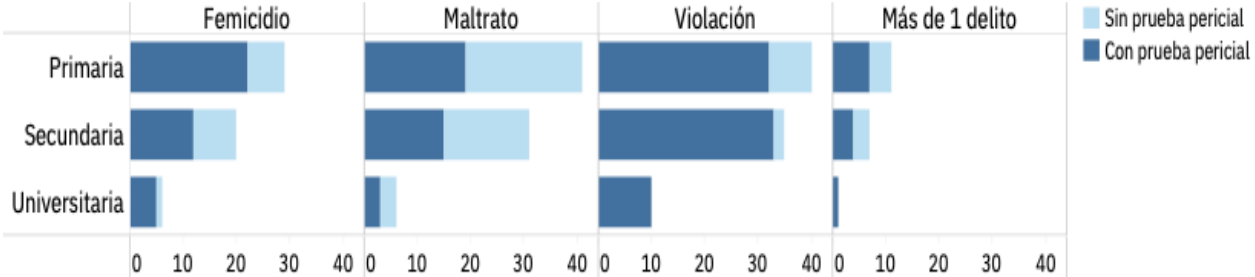
Según se anotó en el riesgo de duraciones, prolongar un expediente en el tiempo representa una afectación porque brinda una respuesta tardía del sistema judicial. No obstante, considerando los plazos promedios de duración, aquellos expedientes con rangos temporales en el ciclo judicial inferior a esos promedios podrían haber sido objeto de un riesgo por terminación anticipada del proceso. Esa conclusión del caso estaría eventualmente asociada, por ejemplo, a una desestimación. Por ello, al abordar el tratamiento de las víctimas en estos casos, es necesario resaltar en la mayor medida posible la necesidad de un abordaje interseccional.

> Los fenómenos de la migración y la violencia de género parecen constantes en la vida de las sociedades centroamericanas. Sin embargo, ambos factores no conviven separados, y es en espacios sociales como las rutas migratorias donde se da una interseccionalidad de sus efectos negativos, en especial para las mujeres que migran (Loría, 2021).

La garantía de una diligencia procesal a las víctimas sin distinción de su nacionalidad es un riesgo. Aunque se trata de factores externos al sistema penal, los datos muestran que existen relaciones entre esas características de las víctimas que, al canalizarse en el proceso penal, podrían ocasionarles un perjuicio.

Otro aspecto significativo que pone de manifiesto las brechas desiguales entre los expedientes judiciales es el nivel educativo de las víctimas. El análisis de los expedientes muestra que una gran proporción de los casos analizados corresponde a procesos penales en los que las víctimas tienen primaria completa o incompleta. Este hallazgo es particularmente relevante cuando se examina la relación entre el nivel educativo y si cuentan con prueba pericial (gráfico 37). El análisis revela que en todos los expedientes de violación existió prueba pericial cuando las víctimas tenían un nivel educativo universitario. Esto contrasta con los casos donde las víctimas poseían un nivel educativo equivalente a secundaria, en los cuales la prueba pericial estuvo presente en menor medida. La situación es aún más pronunciada cuando las víctimas tienen un perfil educativo de primaria, ya que la inclusión de pruebas periciales en estos casos es menor. Esta variación sugiere que el nivel educativo de las víctimas tiene relación con la posibilidad de que exista prueba pericial en el expediente. En el caso del delito de maltrato, en menos de la mitad de los expedientes se contó con este elemento probatorio cuando se trataba de mujeres con el nivel de primaria.

Gráfico 37
Expedientes judiciales que cuentan con información de prueba pericial, por delito según nivel educativo de la víctima



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del muestreo de expedientes de violencia contra las mujeres del PEN, 2024.

En resumen, el nivel educativo de las víctimas no solo parece vincularse con el tipo de delito del que son víctimas, sino que también impacta la disponibilidad y la aplicación de pruebas periciales en los procesos judiciales. Este patrón destaca la importancia de considerar factores educativos al analizar las desigualdades que puedan existir en el tratamiento de las víctimas de estos delitos.

La violencia contra las mujeres es un problema social, cuyas implicaciones son estigmatizadas también en el plano de la institucionalidad judicial. Los riesgos identificados hasta ahora con respecto a factores extrajudiciales demuestran que el proceso penal no es ciego ante las brechas de desigualdad que enfrentan las víctimas. Sin embargo, lejos de tomar en cuenta esos factores para generar medidas afirmativas, en realidad persisten relaciones que amplifican tales desigualdades en menoscabo de una tutela judicial efectiva para las mujeres.

Consideraciones finales

La presente investigación recopiló información exhaustiva sobre el tratamiento de los casos relacionados con la violencia contra las mujeres en el ámbito judicial. Se emplearon una variedad de técnicas de investigación y se recopilaron datos de fuentes de información primarias o inéditas, así como el reprocesamiento o sistematización de múltiples fuentes secundarias. Con esa información el estudio buscó generar un análisis de esta compleja problemática desde la mirada de lo que ocurre cuando las mujeres víctimas de agresión acuden al ámbito judicial. El objetivo no sólo es valorar el acceso a la justicia y la tutela de los derechos, si no también generar una serie de desafíos y propuestas que puedan ser útiles para diseñar las mejoras necesarias.

Esta es la primera vez que se presenta un acercamiento empírico a la judicialización de la violencia contra las mujeres, y por razones prácticas, de disponibilidad de información o legales se ha tenido que delimitar a una serie de dimensiones específicas dentro de esta compleja y sensible temática. Los anexos de la investigación detallan las barreras de investigación encontradas, las delimitaciones y decisiones que tuvieron que tomarse para viabilizar el estudio. El conocimiento generado se ofrece como una primera aproximación para profundizar en análisis futuros.

A manera de valoración general, este estudio muestra un esfuerzo continuado desde hace más de una década por incorporar el enfoque de género en el marco institucional del Poder Judicial. Paralelamente a nivel nacional, el país acumula más de una docena de leyes relevantes en materia de equidad de género y, también específicamente en el tratamiento de la violencia contra las mujeres. Estos avances no se traducen, sin embargo, en una mejora sustantiva de los procesos y la respuesta que se les da a las víctimas de delitos relacionados con violencia de género. De 100 denuncias presentadas en delitos de violación, femicidio o maltrato, solo 16 tiene una apertura a juicio y con ello una sentencia de un tribunal penal. Las resoluciones como la desestimación y el sobreseimiento son la mayoría, y aunque no necesariamente son anómalas, el muestreo de expedientes permitió evidenciar que este volumen responde a una serie de dificultades prácticas y legales para dar respuesta desde la jurisdicción penal a este tipo de violencia.

El Poder Judicial ha sido pionero en materia de incorporación de la perspectiva de género. Con años de más y otros de menos dinamismo, ha incorporado a su normativa y estructura interna órganos nuevos, procedimientos e iniciativas en cumplimiento de las convenciones internacionales, compromisos con agendas de derechos de las mujeres, y legislación interna. Esta base institucional y normativa es importante porque es el contexto que condiciona cómo se desarrolla este ámbito temático en el órgano judicial, y cómo se gestionan -en lo concreto- cada una de las denuncias de violencia contra las mujeres.

En este tema, como ha sido el caso con otros estudiados en el Informe Estado de la Justicia (PEN, 2020), es claro el impacto que tiene el liderazgo de alguna de las magistraturas cuando lo asumen como causa personal y ello favorece la producción e implementación de esfuerzos en esa línea, siguiendo el modelo denominado por el Informe como "Corte-céntrico". Así mismo, se reitera como un vacío importante la falta de evaluaciones de resultados de las iniciativas y políticas judiciales, pues esto dificulta alimentar la actualización y toma de decisiones para mejorar la respuesta a la población usuaria del Poder Judicial, especialmente en un área tan sensible.

Los resultados de una búsqueda exhaustiva de medidas tomadas por el Poder Judicial en materia de género fueron compilados en un inventario de 221 iniciativas, que abarca desde 2017 hasta el 2022. Una mayoría de estos esfuerzos son espacios de trabajo inter institucional, con lo cual se aborda el carácter integral que tiene la violencia contra las mujeres y sobrepasa por mucho las competencias de los tribunales. También es de notar que la capacitación y concientización está en el primer lugar de frecuencia de actividades desarrolladas, lo cual contribuye a promover el cambio necesario en el personal judicial.

En muchas de estas iniciativas, sin embargo, no se ha logrado una implementación para todo el Poder Judicial debido a limitaciones presupuestarias, de infraestructura, de recursos humanos calificados, sostenibilidad, voluntad y convencimiento de la Corte Suprema y debilidades en la gestión. Se cuenta con información de impactos o resultados para muy pocas de estas acciones, por lo que es difícil conocer si dieron el fruto que se esperaba a la hora de diseñarlas. Casos concretos de estas limitaciones se presentaron a lo largo del documento, como por ejemplo el Protocolo de las 72 horas, los CLAIS, la Oficina de Atención a Víctimas y Testigos, que, pese a que muestran indicios de resultados positivos para la tutela efectiva de derechos, se documentó que no tienen un apoyo presupuestario ni político fuerte y sostenido.

Un órgano que merece especial atención es la Fiscalía Adjunta de Género y Delitos Sexuales por su crucial papel en la preparación de los casos. La creciente demanda en este tipo de casos ya alcanza el segundo lugar entre los tipos de delitos con mayor incidencia, después de los delitos contra la propiedad. Esa presión hace necesario fortalecer esta Fiscalía como puerta de entrada al sistema de justicia para las mujeres víctimas. Las estadísticas de su labor no muestran una mejora en la persecución y sanción de los delitos que atiende. Durante la investigación fue difícil el acceso a datos desagregados, algunos vacíos como el dato de casos atendidos por fiscal en este despacho o las distintas discrepancias entre sus registros y los de los compendios estadísticos oficiales no pudieron solventarse. Un preocupante hallazgo fue que, a pesar de su especialización, esta Fiscalía solamente solicita apertura de juicio en el 16% de los casos que le ingresan.

Más del 80% de las denuncias presentadas por mujeres en los delitos analizados tuvo otro tipo de resolución distinta a la sentencia del Tribunal Penal, ni siquiera llegaron a la etapa de juicio, sino que se terminaron en la etapa intermedia. Si bien es cierto estos tipos de resolución son alternativas válidas en el proceso penal, la muestra de expedientes analizada ilustra que buena parte de estos casos se deben a debilidades en el uso de las pericias, el acceso a la información, los constantes riesgos de revictimización y las extendidas duraciones atribuibles a la gestión del sistema de administración de justicia, en lo que se podrían agrupar una serie de riesgos de tutela para las mujeres víctimas de violencia.

De los principales riesgos identificados en el análisis destaca la baja probabilidad de que los casos tengan prueba pericial, con lo cual se dificulta la labor probatoria del caso al recaer únicamente en el testimonio de la víctima o testigos. Cuando tienen pericias, la más frecuente es la valoración psicológica (28 casos de un total de 286 expedientes revisados) y resulta en un impacto en la forma de resolución, pues la gran mayoría tiene un auto de apertura a juicio.

Además, se destaca el riesgo de las duraciones, que es una constante en diversas materias jurisdiccionales, pero en el caso de violencia contra las mujeres perjudica de varias formas la continuidad del proceso por la revictimización y la falta de apoyo que tienen durante el largo proceso judicial. No obstante, resulta imperioso mencionar que de todos los expedientes muestreados solamente se localizaron tres en los cuales la víctima abandonó el proceso y por ello no se pudo proseguir. Este dato contrasta con la percepción y justificación frecuente de que los casos de violencia contra las mujeres se terminan prematuramente por la falta de interés de la víctima.

El riesgo de excesivas duraciones y revictimización es aún mayor cuando el caso ha tenido reprogramaciones de audiencias preliminares en el juzgado, o procesos de apelación y casación que implican el reenvío del caso a instancias anteriores, es decir, el reproceso una o más veces.

El perfil de las partes involucradas en los casos de violencia contra las mujeres detectó resultados aún más desfavorables cuando la nacionalidad del imputado o la víctima es nicaragüense. La edad y el nivel educativo también tienen un efecto, aunque se deben tomar como hallazgos preliminares para futuras exploraciones, pues la cantidad de información de la que se dispone es muy reducida debido a que muchos de los expedientes están incompletos en estas secciones de información socioeconómica de las partes.

En estos análisis hay que distinguir variaciones por tipo de delito, por instancia y por distribución territorial, ya que presentan resultados muy diferenciados, pese a que todos trabajan con el mismo marco legal, operativo y de recursos. Las generalizaciones de este Informe se realizan para facilitar la comprensión y redacción final del texto que no sea excesivo, pero para obtener resultados más finos deben ser combinados siempre con estos criterios.

El análisis de las características de este subgrupo de delitos asociados a violencia contra las mujeres permite concluir que la evolución institucional, normativa e inclusión de tipos penales y penas más altas, no han estado acompañados de un fortalecimiento en la capacidad de sanción de los tribunales. Esto se debe a una mezcla perjudicial de elementos débiles en la gestión, infraestructura, especialización del personal, y, en menor medida, en la legislación. La tendencia

es similar a los resultados de otros muestreos que se han realizado en el Estado de la Justicia: en 2015 para la materia penal -en general- se señaló que el 17% de casos obtenían una sentencia, y en el 2020 para los delitos relacionados con corrupción este porcentaje fue de 7% (IEJ, 2015 y 2020).

El estudio presentado sistematiza el nivel de preparación del Poder Judicial y focaliza los puntos débiles de la tutela de derechos para la violencia contra las mujeres, a partir de datos precisos para contribuir a la toma de decisiones política y administrativa del conglomerado judicial. Este esfuerzo es posible gracias a la conjunción de saberes y aportes de casi una docena de investigadores que participaron en su construcción.

Recomendaciones

El Poder Judicial es un actor fundamental para lograr un cambio cultural en la sociedad costarricense hacia la disminución de la violencia contra las mujeres. A la luz de estos hallazgos, el presente informe pretende identificar, contribuir a subsanar algunos de los pendientes o reforzar las iniciativas que están funcionando bien en esta área de la materia penal. A continuación, se presentan para la consideración reformas que pueden tener un impacto concreto en las estadísticas de persecución y sanción, y por ende, en el tipo de respuesta que se les da a las víctimas.

Estas recomendaciones se elaboraron con base en los aportes de los y las participantes en los talleres de consulta que se efectuaron para este estudio, de manera particular en el último de estos talleres que se enfocó en la generación de propuestas.

Centralidad de las víctimas

Una importante cantidad de sugerencias recopiladas se concentran en la reivindicación e incorporación de las víctimas como parte central de todo el proceso. Para ello debe crearse canales de comunicación y realimentación expeditos con la víctima, que permitan escucharles, para poder estar cercanos a su conocimiento de los hechos y a sus necesidades judiciales.

El papel de las víctimas es central durante la **etapa de investigación**. El objetivo es crear una **ruta de denuncia amigable** a las usuarias que contenga además sus derechos dentro del proceso penal. Es el momento en el cual se requiere acompañamiento para que la víctima brinde su testimonio, logre articularlo y mantenerlo con un buen resultado a lo largo de todo el proceso judicial. El Ministerio Público debe brindarles las herramientas y el empoderamiento de las víctimas, recordarles que su voz es la más importante para llegar hasta las últimas instancias y así los culpables sean castigados.

Se sugirió generar como una buena práctica un **documento en un lenguaje amigable** que contenga la descripción de los artículos del Código Procesal Penal que se leen en el momento de denunciar. Idealmente, las personas que atienden estas denuncias deben contar con los conocimientos técnicos necesarios, de forma tal que no se queden en la lectura de los artículos sino que puedan explicarles ampliamente a las víctimas sus derechos, y brindarles un documento básico, que les otorgue mayores herramientas a la población usuaria para su

empoderamiento. Puede ser a través de un documento electrónico muy visual e intuitivo que se pueda compartir por redes sociales y así brindarle a la víctima el tiempo de revisarlo, sin la limitación de tiempo de una visita, indagatoria o toma de denuncia.

En esta etapa la atención integral es crucial, por ello se debe **extender la cobertura de programas** como los Pisav o los equipos de respuesta rápida, cuyo objetivo principal es acercar el abanico de servicios del Poder Judicial a las víctimas, sin moverse de una misma oficina. Aunque, un aspecto que se debe evitar es reunir en un mismo espacio físico a la víctima con el imputado, pues a veces las oficinas de la Defensa Pública están en el mismo sitio y puede generar inseguridad a las víctimas.

Un asunto específico de mejora a los Pisav, mencionado en las consultas, es que se diseñe su **propio sistema de desempeño** integrando todas las oficinas, de tal forma que se tengan indicadores cuantitativos y cualitativos de sus resultados. Si bien los distintos profesionales se concentran en una única oficina, sus reportes los generan por separado, en la misma lógica institucional pues cada dependencia debe seguir contando por aparte sus casos y midiendo su desempeño individual en cada órgano auxiliar o judicatura, no llevan métricas de la intervención en conjunto coordinada. Por eso puede ser contraintuitivo que los lugares que tienen PISAV tengan menos acusatorias a juicio, pero otro tipo de intervenciones que hacen no se cuantifican como logros.

Acompañamiento a las víctimas

La representación letrada gratuita como un recurso para las mujeres víctimas marca la diferencia en las posibilidades de culminar un proceso judicial. Se ha establecido la necesidad de que las víctimas de violencia de género tengan abogado o abogada. Se estima que se requieren al menos 230 plazas para dar este acompañamiento legal, en caso de agregársele la función a la Defensa Pública. Alternativamente, se propuso revisar y reactivar la iniciativa de defensa de las víctimas en el Inamu y recuperar las plazas que se tenían anteriormente.

Además de esta asistencia legal, se enfatizaba en la necesidad de dar apoyo psicológico, aunque puede ser una función que se comparta con otras entidades públicas como la CCSS, Inamu, y a lo interno la OATV y el Departamento de Psicología y de Trabajo Social. Estas oficinas atienden todos los tipos de delitos, no tienen un enfoque solamente de género, por ejemplo los profesionales en psicología deben realizar los peritazgos de todas las materias.

En los casos que involucren niñas y adolescentes, este acompañamiento además se encuentra establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia:

> "Las personas menores de edad víctimas de delitos siempre deberán ser asistidas y reconocidas por expertos en tratar a este grupo. Todas las autoridades judiciales o quienes deban colaborar en la tramitación del proceso. Los profesionales especializados del Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial y los auxiliares de la policía técnica o administrativa, deberán ser capacitados previamente (Art. 120).
>
> El personal médico, los profesionales en psiquiatría y psicología forense, estarán obligados a acompañar a las víctimas menores de edad, en especial cuando se trate de delitos sexuales, cuantas veces la autoridad judicial lo estime necesario (Art. 121).
>
> El Departamento de Trabajo Social y el Departamento de Psicología del Poder Judicial deberán asistir al menor ofendido y a su familia durante el proceso. Finalizado este, la persona menor de edad deberá ser remitida a la institución correspondiente para el debido tratamiento."(Art. 123)".

Fortalecimiento de la Fiscalía Adjunta de Género

Se hizo evidente durante la investigación y los talleres de consulta, que una mayor disponibilidad de **recursos financieros y humanos** es necesaria para poder mejorar el servicio y cubrir adecuadamente todo el territorio. Esto posibilitaría una respuesta más ágil, hacer supervisiones y acompañamiento a las fiscalías territoriales, entre otras cosas. Por ejemplo, por las limitaciones de personal, el fiscal que instruye es diferente al de juicio. No tienen capacidad de ir al juicio las personas fiscalas especializadas porque no les da tiempo de asumir ambas funciones, con la consecuente afectación para los procesos.

Propuestas como implementar las Cámaras de Gesell en una mayor cantidad de oficinas, mejorar los sistemas informáticos, protección de víctimas y testigos, disponibilidad de autos y gasolina para giras y visitas, son todas acciones que requieren inversión financiera del Poder Judicial.

Algunas propuestas se refieren a una **mejor gestión del personal y los recursos existentes**. En ese sentido, se aboga por una mayor especialización de la Fiscalía de Género, tanto de las personas fiscalas como del personal de atención al público. Debe llevarse una métrica con indicadores específicos de éxito para esta Fiscalía, que dé cuenta del impacto que genera la especialización en los casos que se tramitan, más allá de los números que se contabilizan en la estadística oficial.

Es fundamental promover capacitaciones, tanto continuas como de inducción o nivelación. Motivar al personal de la Fiscalía adjunta a capacitarse más y de manera permanente, tanto a los nuevos ingresos como a los que ya están nombrados, implica que se les brinde tiempo dentro del espacio laboral y se permita el nombramiento de personas sustitutas si los cursos son extensos.

Se debe establecer un **programa recurrente de capacitaciones** debido a la alta rotación del personal de la Fiscalía. Como parte de los módulos o cursos de dicho programa, cada persona que labora en la Fiscalía especializada debe conocer el enfoque de género en la administración de justicia, en el tratamiento de delitos de violencia contra las mujeres y habilidades blandas para el tratamiento hacia la persona usuaria, manejo de pruebas, toma de la denuncia, entre

otros; en conformidad con el marco convencional, las distintas normas, los lineamientos internos y circulares de los órganos judiciales competentes.

La modalidad de las capacitaciones depende de la población meta, pues en algunos casos funcionan muy bien los cursos virtuales, pero para otros lugares no son del todo efectivas. Se debe hacer un trabajo de diseño y herramientas adecuadas, novedosas, con mediación pedagógica y seguimiento adaptado para cada modalidad. En la modalidad presencial se sugiere trasladarse hasta los circuitos, y en la virtualidad es importante revisar el formato y alcances del Aula Virtual de la Escuela Judicial.

La **supervisión a las fiscalías territoriales** (especializadas o no) contribuye al acercamiento entre las dependencias y la difusión de las directrices o manuales existentes, y posibilita detectar falencias del personal. Se pueden implementar mecanismos de revisión desde las fiscalías territoriales especializadas en dos sentidos: a) para que den el visto bueno a las acusaciones de otras fiscalías no especializadas vinculadas a violencia contra las mujeres o delitos sexuales; y b) para que realicen valoraciones aleatorias de resoluciones de desestimación o sobreseimientos, que permitan tomar acciones en áreas débiles. Se mencionó como ejemplo que estas valoraciones puedan tomar resoluciones del mismo delito y con la misma evidencia que hayan tenido desenlaces distintos, para comparar los procedimientos utilizados. En ese mismo sentido, en el taller de consulta se mencionó que a raíz del caso "Keibril" se habían realizado revisado desestimaciones similares y reabierto más de 200 casos.

Investigación judicial

Las investigaciones en delitos de violencia contra las mujeres tienen **protocolos especiales** y debe ser efectuada con perspectiva de género, de tal forma que se recuperen evidencias que serían ignoradas sin esta especialización. Es por ello que varias agencias internacionales han propuesto lineamientos al respecto:

- Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio). ONU-Mujeres.
- Guía Práctica para la investigación del feminicido. ONU- Mujeres.
- Metodología de Análisis de Investigaciones de Feminicidios y Muertes Violentas de Mujeres y Niñas, Iniciativas Spotlight.

Si bien se han generado normativa interna en el Poder Judicial en este sentido, está dispersa en varios documentos y circulares, además es necesario aplicar controles más estrictos para su cumplimiento de parte de las jefaturas inmediatas del OIJ que estén especializadas en la materia. La actuación de la policía (Fuerza Pública y judicial) desde la denuncia es la base del caso, por ello deben aplicarse los protocolos de intervención para delitos sexuales y femicidios, los peritajes específicos, las reglas para la inspección de la escena y la valoración de riesgos establecida en los informes policiales para estos casos.

Estudios previos sobre las autopsias sociales de los femicidios (PNUD, 2024) determinaron una serie de detonantes que pueden ser incorporados en las indagaciones judiciales como factores de alto riesgo, por ejemplo los intentos de ahorcamiento, consumo de drogas, control de la víctima con dispositivos electrónicos, entre otros.

Además, se señaló que hay una necesidad de mayor recurso humano y tecnológico para aumentar la efectividad en las investigaciones de violencia contra las mujeres, desde insumos para los laboratorios y medicina forense hasta una mayor capacitación sobre el trato empático a la persona usuaria para eliminar los estereotipos machistas, especialmente en el personal que tiene contacto directo con las víctimas.

Presupuesto con enfoque de género

La propuesta indica darle una perspectiva de género al presupuesto del Poder Judicial, de forma tal que se le brinde la importancia y urgencia debida a la atención y sanción de las conductas de violencia contra las mujeres. Con ello se visibilizará con qué recursos se cuenta para atender a las víctimas y las diligencias judiciales. Particularmente, asignar suficiente presupuesto para desarrollar las herramientas que ya ha aprobado el Poder Judicial, en especial para la Secretaría Técnica de Género y el Observatorio de Género puedan tener una verdadera oportunidad material de transversalizar la perspectiva de género en todo el Poder Judicial.

Información estadística homogénea y compartida

A lo largo de todo este documento se hace varias referencias a que los datos oficiales son parciales, no conciliables entre sí o claramente incompletos. Los datos del Observatorio Judicial, la Dirección de Planificación, el Observatorio de Género, anuarios estadísticos y los obtenidos por solicitudes oficiales de información no concuerdan entre sí. Ello dificulta no sólo la posibilidad de investigar sobre la violencia contra las mujeres, sino también la toma de decisiones para mejorar la gestión judicial.

Una propuesta específica fue realizar un informe desde la Dirección de Planificación sobre los motivos por los cuales difieren los indicadores de gestión entre los circuitos judiciales, por ejemplo, en algunos despachos específicos las duraciones son mucho menores o mucho mayores que otras, en casos de similar naturaleza. De esta forma, buscar replicar las buenas prácticas de despachos específicos a nivel nacional.

Difusión y comunicación de lineamientos o iniciativas en canales más ágiles

La sensibilización de las directrices que influyen en esta materia requiere un canal especializado o focalizado, primero a nivel permanente que centralice todo el material, convenciones, normas, herramientas, foros, cursos, literatura existente, etc. en un solo sitio web (el Observatorio de Violencia de Género tendría ese rol). Y, en segundo lugar, un canal esporádico que haga amplia difusión de novedades recientes, por ejemplo, un boletín trimestral, una semana dedicada al tema cada año, por mencionar dos opciones. La cantidad de correos institucionales e iniciativas del conglomerado judicial saturan las cuentas del personal, y no son un mecanismo efectivo para que la información se interiorice.

Agenda de investigación futura

La violencia contra las mujeres es una problemática con dimensiones sociales estructurales muy complejas. Dado que va más allá del derecho penal, en un futuro estudio se podría incluir los juzgados de familia y violencia doméstica. Por ejemplo, el incumplimiento de medidas de protección es uno de los delitos a investigar con más incidencia.

En función de la dinámica de violencia, se recomienda incorporar aquellos delitos, como amenazas y ofensas, que son predictores, es decir pueden evitar otros delitos más graves y, por ende, dar luces acerca de la forma en la que se puede prevenir la violencia contra las mujeres. Específicamente investigar si tales delitos tienen una respuesta ágil y efectiva, podrían ocasionar un efecto disuasivo en otros.

También, se sugiere realizar experimentos antropológicos, grupos focales y talleres con víctimas para obtener información no registrada en el expediente y evidenciar el impacto del acompañamiento y asesoramiento. Por ejemplo: ¿Cómo fueron atendidas? ¿Cómo les dicen el derecho de abstención? ¿Cuál es el impacto psicológico en el momento de la entrevista?

Una sugerencia de los especialistas participantes en los talleres fue la de construir un indicador de impunidad, que sirva de punto de partida y monitoreo para valorar la atención de las instancias judiciales en los distintos lugares e instancias.

Reconocimientos

Investigadores principales

Evelyn Villarreal Fernández, Jose Mario Achoy Sánchez y Karlissa Calderón Zúñiga.

Insumos

Capacidades institucionales en el Poder Judicial en materia de violencia contra las mujeres, de Amanda Segura Salazar, Fátima Monterrosa Detrinidad, Karlissa Calderón Zúñiga y Milagro Núñez Solís; Un acercamiento a las estadísticas judiciales vinculadas a casos de violencia contra las mujeres, de Amanda Segura Salazar y Jose Mario Achoy Sánchez; Riesgos de tutela efectiva de derechos en el proceso judicial en los casos de violencia contra las mujeres en Costa Rica, de Amanda Segura Salazar, Carmen Bogantes Camacho, Cathalina García Santamaría y Evelyn Villarreal Fernández; Informe preliminar de riesgos de tutela efectiva de derechos en casos judiciales de violencia contra las mujeres, de Amanda Segura Salazar; Los femicidios en Costa Rica y su cobertura mediática, de Karlissa Calderón Zúñiga, Amanda Arce Picado, Daniel Mendoza Valverde, Jolyana Corrales Marenco y Josué Cabalceta Cruz; Insumo para recuadro de Femicidios y Medios de Comunicación en Costa Rica 2020-2023, de Carolina Urcuyo Lara; Tratamiento histórico del femicidio y desafíos jurídicos actuales, de Stephanie Guillén Rivera.

Asimismo, el equipo del Estado de la Justicia agradece a las siguientes personas funcionarias del Poder Judicial por los insumos brindados para la elaboración de esta investigación: Ana Daisy Quirós Barrantes, Debby Garay Boza, Gabriela Ugalde Pereira, Jeannette Arias Meza, José Ángel Peñaranda Chaverri, Juan Carlos Pérez Murillo, Juan Gabriel Mena Araya, Laura Villarreal

Loáiciga, Mauricio Solano Castro, Patricia Solano Castro, Raquel Ramírez Bonilla, Roxana Chacón Artavia y Xinia Fernández Vargas.

Edición técnica

Evelyn Villarreal Fernández, Jose Mario Achoy Sánchez y Karlissa Calderón Zúñiga.

Bibliografía y formato: Gisselle Rojas Arias y José Montero Flores.

Revisión y corrección de cifras

Jose Mario Achoy Sánchez, Javier Bogantes Retana y Karlissa Calderón Zúñiga.

Actualización y procesamiento de datos

Amanda Segura Salazar, Jose Mario Achoy Sánchez, Luis Carlos Benavides Mora y Rafael Segura Carmona.

Visualización de datos y gráficos

Jose Mario Achoy Sánchez y Rafael Segura Carmona.

Bases de datos

Base de datos de expedientes terminados sobre violencia contra las mujeres (Oficio 680-PLA-ES-2023) del Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación del Poder Judicial; Inventario de medidas y políticas judiciales en materia de violencia contra las mujeres 2017-2022, de Ernesto Valladares Solís, Fátima Monterrosa Detrinidad, Karlissa Calderón Zúñiga y Milagro Núñez Solís; Matriz de indicadores judiciales del Ministerio Público, de María Lourdes Navarro Granados; Muestreo de expedientes de los casos de delitos relacionados con violencia contra las mujeres terminados en el período 2019 y 2022 en la GAM, de Carmen Bogantes Camacho.

Lectores críticos

Carlos Núñez, Jorge Vargas Cullell, José Manuel Arroyo Gutiérrez, Karen Chacón Araya, María Esther Brenes Villalobos, Rafael Segura Carmona, Randall Brenes Suárez, Stephanie Guillén, y Xinia Fernández Vargas.

Participantes en los talleres de consulta

Alfredo Chirino Sánchez, Amanda Segura Salazar, Ana Carcedo Cabañas, Ana Daisy Quirós Barrantes, Ana Hidalgo Solís, Aurora Camacho, Daniel Mendoza Valverde, Debby Garay Boza, Elizabeth Odio Benito, Erika Rojas Calderón, Evelyn Villarreal Fernández, Fátima Monterrosa Detrinidad, Fernanda Medina Navarro, Fiorella Ramírez González, Gabriela Ugalde Pereira, Gerald Mora Muñoz, Giselle Boza Solano, Jean Franco Montiel Carrillo, Jeannette Arias Meza, Jolyana Corrales Marenco, Jorge Vargas Cullell, José Ángel Peñaranda Chaverri, José Mario Achoy Sánchez, Josué Cabalceta Cruz, Juan Carlos Pérez Murillo, Karlissa Calderón Zúñiga, Lilliana Castro López, Marcela Arroyave Sandino, María Lourdes Echandi Gurdián, María Lourdes Navarro Granados, Marianela Vargas Acuña, Miguel Gutiérrez Saxe, Nancy Marín Espinoza,

Natalia Morales Aguilar, Óscar Morera Herrera, Rafael Segura Carmona, Randall Brenes Suárez, Raquel Ramírez Bonilla, Ronald Alfaro Redondo, Roxana Chacón Artavia, Sonia Navarro Solano, Tatiana Ballestero Zúñiga, Valery Zúñiga Navarro, Xinia Fernández Vargas, y Yendry Rodríguez Pizarro.

Referencias bibliográficas

Achoy, J.M. 2024. *Visualizaciones*. Contribución especial realizada para el Quinto Informe Estado de la Justicia. PEN, Conare.

Álvarez, J. et al. 2021. *Delitos contra la integridad sexual*. Ediciones DyD. En: https://ebook.edicionesdyd.com.ar/reader/delitos-contra-la-integridad-sexual-javier-t-alvarez?location=26

Ananías, C. y Vergara, K. 2016. *Tratamiento informativo del feminicidio en los medios de comunicación digitales chilenos en marzo de 2016*. En: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5771124

Arguello, A. 2023. *Informe de análisis de los indicadores del Sistema Unificado de Medición Estadística de la Violencia de Género contra las mujeres (SUMEGIV), periodo del 2006 al 2021*. PNUD: Infosegura.

Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. 1994. *Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)*. En: https://www.oas.org/es/mesecvi/convencion.asp

Blay, E. 2014. *"Voy o no voy": el recurso a la policía en el caso de la violencia de género. Perspectivas de las víctimas*. Estudios Penales Y Criminológicos, 33. En: https://revistas.usc.gal/index.php/epc/article/view/1502

Bogantes, J. 2024. *Visualizaciones*. Contribución especial realizada para el Quinto Informe Estado de la Justicia. PEN, Conare.

Brenes, R. y Camacho, A. 2024. *El poder de la investigación, la generación de datos y la transformación cultural para la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas en Costa Rica.* En: https://infosegura.org/costa-rica/el-poder-de-la-investigacion-la-generacion-de-datos-la-transformacion-cultural-para-la-erradicacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-las

Calderón, K. 2024. *Visualizaciones*. Contribución especial realizada para el Quinto Informe Estado de la Justicia. PEN, Conare.

Calderón, K. et. al. 2024. *Los femicidios en Costa Rica y su cobertura mediática*. PEN, Conare.

Carcedo, A. y Sagot, M. 2002. *Femicidio en Costa Rica: balance mortal.* En: https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152002000100002

Catania, A. 2005. *Primera parte: Breve estudio de las nociones generales y de los principios fundamentales*. Capítulo III. Derecho Penal. En Régimen Penal Tributario: Estudio sobre la ley 24.769, 2da ed., 37-47. Buenos Aires, Argentina: Editores del Puerto, p. 44.

CEJIL. 2010. *Debida Diligencia en la Investigación de Graves Violaciones de Derechos Humanos*. En: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25129.pdf

CEPAZ. 2020. Femicidios y medios de comunicación. Centro de Justicia y Paz. En: https://bit.ly/3QUwRq9

CGR. 2023. *Informe de Auditoría N° DFOE-GOB-IAD-00004-2023 sobre la eficacia de las acciones estatales para la prevención, atención y reparación de la violencia contra la mujer.* En: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2023/SIGYD_D/SIGYD_D_2023013762.pdf

Chamorro, M. y Gómez, C. 2023. *Estándares en materia pericial frente a casos de violencia de género. Propuesta de investigación sobre el impacto de las actividades de la Comisión-IDH en la jurisprudencia costarricense. Costa Rica, 2001-2021.* En: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/iusdoctrina/article/view/57064

CIJUL. 2012. *El perito en el proceso penal*. En: https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MzM5NA==

COMESCO et. al. 2018. *Violencia contra las mujeres en Costa Rica durante el período 2015-2017.* En: https://infosegura.org/sites/default/files/2023-02/violencia_contra_mujeres_2015-2017_2.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2021. *Caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas).* En: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_422_esp.pdf

Corti, H. 2003. *Evasión tributaria (causas y consecuencias)*. Revista Jurídica Argentina La Ley, n° LL, 1232.

Corti, H. 2011. *Derecho Constitucional Presupuestario*. Buenos Aires, Argentina: Abeledo Perrot

Echeburúa, E., y Guerricaechebarria, C. 2021. *Abuso sexual en la infancia: nuevas perspectivas clínicas y forenses.* Ariel.

Escalante, C. 2022. *Sistematización de indicadores de género en el sistema educativo costarricense y su aporte para la construcción de la política para la igualdad y equidad de género en el Ministerio de Educación Pública.* En: https://www.mep.go.cr/sites/default/files/2023-10/indicadores-deie-2022.pdf

Eurostats. 2023. *Encuesta Europea sobre violencia de Género 2022*. Madrid, Ministerio de Igualdad. En: https://violenciagenero.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/EEVG.pdf

Fry, D., Padilla, K., Germanio, A., Lu, M., Ivatury, S., y Vindrola, S. 2021. *Violencia contra niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe 2015-2021*. En: https://www.unicef.org/lac/media/29031/file/Violencia-contra-ninos-ninas-y-adolescentes-en-America-Latina-y-el-Caribe-2015-2021.pdf

Ferrer, V. y Bosch, E. 2016. *Barreras que dificultan la denuncia de la violencia de género: reflexiones a propósito de los resultados de la macroencuesta.* En: https://idus.us.es/handle/11441/51815

Fundación Paz y Reconciliación (Pares). 2022. *Vivir sin Miedo: Balance de violencias basadas en género durante 2021 y el primer cuatrimestre de 2022*. En: https://e7c20b27-21c2-4f2b-9c38-a1a16422794e.usrfiles.com/ugd/e7c20b_7ef1b9570dc84d29974d67717b3288b9.pdf

Guillén, S. 2024. *Función social del Derecho en materia de género: Un análisis sobre los desafíos teórico-prácticos de la regulación del delito de femicidio en Costa Rica*. Tesis de Licenciatura en Derecho, 2024. Universidad de Costa Rica.

IIDH. 2006. *I Informe regional: situación y análisis del femicidio en la región centroamericana*. En: https://www.iidh.ed.cr/images/Publicaciones/PersonasColect/I-informe-regional-femicidio-espanol-2006.pdf

INAMU. 2009. *Femicidio en Costa Rica 2000-2004.* En: https://www.inamu.go.cr/documents/10179/20949/Femicidio+en+costa+rica.pdf/cb99bc48-0ddc-493d-9083-c36bfafe4bfa

_____.2011. *Primer Estado de los Derechos de las Mujeres en Costa Rica*. En: https://www.inamu.go.cr/documents/10179/275546/Primer+Estado+de+los+Derechos+de+las+Mujeres+en+CR+%282011%29/b744fe8b-6ce7-4aae-b6e4-4600a2da9079

_____. 2015. *Segundo Estado de los Derechos de las Mujeres en Costa Rica*. En: https://www.inamu.go.cr/documents/10179/275546/Segundo+Estado+de+los+Derechos+de+las+Mujeres+en+CR+%282015%29/72b90f77-e590-40b1-b9f0-16b76a2774c6

_____. 2018. *Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las Edades Costa Rica 2017-2032*. En: https://www.mcj.go.cr/sites/default/files/2021-06/PLANOVI%202017-2032.pdf

_____. 2019. *Tercer Estado de los Derechos de las Mujeres en Costa Rica.* En: https://www.inamu.go.cr/documents/10179/275546/Tercer+Estado+de+los+Derechos+Humanos+de+las+Mujeres+en+Costa+Rica+%282019%29.pdf/f1affa72-985f-4489-bcf6-28206a661e4d

_____. 2021. *IV Encuesta Nacional de Percepción sobre los Derechos de las Mujeres (ENPEDEMU 2021)*. En: https://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/archivosLibros/IV%20ENPEDEMU.pdf

INEGI. 2021. *Panorama nacional sobre la situación de la violencia contra las mujeres en México (ENDIREH 2021)*. En: https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463917236.pdf

Infosegura. 2020. *Costa Rica: violencia contra las mujeres a lo largo del ciclo de vida 2020*. https://infosegura.org/costa-rica/violencia-contra-las-mujeres-costa-rica-2020

_____. 2021. *Costa Rica: violencia contra las mujeres a lo largo del ciclo de vida 2021*. https://infosegura.org/sites/default/files/2023-02/VCM-COSTA-RICA-2021-B.pdf

_____. 2022. *Costa Rica: violencia contra las mujeres a lo largo del ciclo de vida 2022*. En: https://infosegura.org/costa-rica/violencia-contra-las-mujeres-lo-largo-ciclo-de-vida-costa-rica-2022

Loría, M. 2021. *Mujeres migrantes centroamericanas y el reto de la violencia de género*. En: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/article/download/47171/46667/184980

Martínez, A. 2014. *Proporción de violencia en mujeres adultas con sobrepeso y obesidad que asisten al servicio de nutrición en el Hospital Municipal Guadalupe Victoria, Villa Victoria, Estado de México durante enero-marzo de 2013*. En: http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/14949/419337.pdf?sequence=1

McConnell, A. 2015. *What is policy failure? A primer to help navigate the maze*. Sydney, Australia: University of Sydney.

Mueller, B. 2020. *Why public policies fail: Policymaking under complexity*. EconomiA, 21(2), 311–323. https://doi.org/10.1016/j.econ.2019.11.002

Naciones Unidas. 1979. *Convención sobre la elimiación de todas las formas de discriminación contra la mujer*. En: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women

OEA-CIDH. 2007. *Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las América*. En: https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Informe%20Acceso%20a%20la%20Justicia%20Espanol%20020507.pdf

Observatorio de violencia basado en género hacia las mujeres. 2022. Datos y estadísticas. En: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/observatorio/violencia-genero

Olivera, M. et al. 2011. *Diseño de un índice de capacidad institucional para la efectividad del gasto público*. En: https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/325/Diseno%20de%20un%20indice%20de%20capacidad%20institucional%20-%20Informe%20Final%20_AID_PAGINAWEB.pdf?sequence=2&isAllowed=y#:~:text=La%20capacidad%20institucional%20se%20puede,et%20al

ONU Mujeres. 2010a. *Causas, factores de riesgo y de protección*. En: https://www.endvawnow.org/es/articles/300-causas-factores-de-riesgo-y-de-proteccin.html

ONU Mujeres. 2010b. *Operar dentro del modelo ecológico*. En: https://www.endvawnow.org/es/articles/310-operating-within-the-ecological-model-.html

ONU Mujeres. 2023. *Guía para la cobertura periodística de femicidios y violencia basada en género*. En: https://bit.ly/4auCm5W

Organización Panamericana de la Salud (OPS). 2013. *Comprender y abordar la violencia contra las mujeres*. En: https://oig.cepal.org/sites/default/files/20184_violenciasexual.pdf

Ortega, S. 2021. *Tratamiento disímil de los medios de comunicación en los casos de Sharon y Gaby. Ecuador 2013-2015.* Tesis de maestría en Estudios de la Cultura. Mención en Género y Cultura. Universidad Andina Simón Bolívar. En: https://bit.ly/4bsVyCz

PEN. 2015. *Primer Informe Estado de la Justicia*. PEN, Conare. En: https://hdl.handle.net/20.500.12337/879

_____. 2017. *Segundo Estado de la Justicia.* PEN, Conare. En: https://hdl.handle.net/20.500.12337/878

_____. 2020. *Tercer Informe Estado de la Justicia*. PEN, Conare. En: https://hdl.handle.net/20.500.12337/7918

_____. 2022. *Cuarto Informe Estado de la Justicia*. PEN, Conare. En: http://hdl.handle.net/20.500.12337/8331

_____. 2023a. *Base de datos de estadísticas judiciales en materia de violencia contra las mujeres*. PEN, Conare.

_____. 2023b. *Base de datos del inventario de medidas en materia de violencia contra las mujeres 2017-2022*. PEN, Conare.

_____. 2024. *Base de datos del muestreo de expedientes de los casos de delitos relacionados con violencia contra las mujeres terminados en el período 2019 y 2022 en la GAM*. PEN, Conare.

Peralta, A., y Segura, A. 2023. *Guía básica de actuación en casos de violencia sexual contra personas menores de edad y jóvenes participantes de los programas de Aldeas Infantiles SOS*. Aldeas Infantiles SOS.

PNUD. 2021. *Informe Regional sobre Desarrollo Humano del 2021*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ONU.

PNUD et al. 2024a. *Informe Anual de Situación de Femicidios 2020. Estrategia ILAFEM: Autopsias psicosociales de femicidios. Primera Parte*. En: https://pnud-conocimiento.cr/wp-content/uploads/2024/07/Informe-Situacion-Nacional-de-Delito-de-Femicidio-2020.pdf

_____. 2024b. *Informe Anual de Situación de Femicidios 2020. Estrategia ILAFEM: Abordaje jurídico de los casos. Segunda Parte*. En: https://pnud-conocimiento.cr/wp-content/uploads/2024/07/ILAFEM-Abordaje-Juridico-de-Casos-1.pdf

Poder Judicial. 2008. *Protocolo institucional de atención integral de víctimas de violación sexual en edad joven y adulta (Primeras 72 horas de ocurrido el evento). Poder Judicial.* En: https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/images/Protocolos/Obsgenero-Protocolo-Revictimizacin-MP-Atencin-72-horas.pdf

_____. 2011. *Guía rápida sobre: Protocolo de las 72 horas. Secretaría Técnica de Género y acceso a la Justicia, Poder Judicial.* En: https://secretariagenero.poder-judicial.go.cr/images/Documentos/ERRVV/Documentos/Gua_Rpida_sobre_Protocolo_de_las_72_horas_-_2021.pdf

_____. 2020a. *Cuadros estadísticos del Ministerio Público 2019. Oficio 1231-PLA-ES-2020.* Dirección de Planificación, Poder Judicial. En: https://planificacion.poder-judicial.go.cr/index.php/estadisticas-e-indicadores/anuarios-aprobados-por-consejo-superior

_____. 2020b. *Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia*. Poder Judicial. En: https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/index.php

_____. 2021. *¿Qué es del derecho al acceso a la justicia?* En: https://poderjuvenil.poder-judicial.go.cr/explora/menu-adolescentes/modulo-2-justicia-penal-para-ninas-ninos-y-adolescentes/nuestros-derechos-ante-la-justicia/15-que-es-el-derecho-al-acceso-a-la-justicia#:~:text=El%20acceso%20a%20la%20justicia,la%20poblaci%C3%B3n%2C%20y%20en%20el

_____. 2022. *Anuarios aprobados por el Consejo Superior.* Poder Judicial. En: https://planificacion.poder-judicial.go.cr/index.php/estadisticas-e-indicadores/anuarios-aprobados-por-consejo-superior

_____. 2023a. *Balance general interactivo para especialista.* Dirección de Planificación, Poder Judicial. En: https://planificacion.poder-judicial.go.cr/index.php/estadisticas-e-indicadores/estadisticas-para-especialistas

_____. 2023b. *Cuadros estadísticos del Ministerio Público 2022. Oficio 2412-PLA-ES-TR-2023.* Dirección de Planificación, Poder Judicial.

_____. 2023c. *Estadísticas.* Observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia. En: https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/index.php

_____. Varios años. *Anuarios Estadísticos*. Sección de Estadística, Dirección de Planificación, Poder Judicial.

Rojas, M. 2022. *Vivas en la memoria: tensiones por el reconocimiento y las luchas por la justicia en torno a los femicidios en Costa Rica*. Tesis doctoral. Universidad de París. En: https://bit.ly/3QU5IDW

Rosas, A. 2019. *Capacidad institucional: revisión del concepto y ejes de análisis*. En: https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/DocumentosyAportes/article/view/8482/11943

Segura, A. 2021. *Bien jurídico tutelado y asistematicidad en la legislación penal tributaria costarricense.* Conferencia del Segundo Seminario Virtual de Derecho Penal: Temas actuales de la Teoría del Delito, Derecho Penal Parte Especial y Derecho Penal Constitucional, Universidad de Costa Rica, 19 de octubre de 2021. En: https://www.youtube.com/watch?v=MZX_3KuuWfU

Segura, A. 2024. *Visualizaciones*. Contribución especial realizada para el Quinto Informe Estado de la Justicia. PEN, Conare.

Segura, A. et al. 2023. *Capacidades institucionales en el Poder Judicial en materia de violencia contra las mujeres*. PEN, Conare.

Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ). 2023. Menú de búsquedas avanzadas. En: https://www.pgrweb.go.cr/scij/avanzada_pgr.aspx

Subcomisión Interinstitucional para la prevención del Femicidio. s.f. *Guía para el registro y clasificación de muertes y femicidios cometidos en Costa Rica.* En: https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/images/Estadisticas/Femicidio/Documentos/Guia_para_el_registro_y_clasificacion_de_muertes_violentas_de_mujeres_y_femicidios_en_Costa_Rica.pdf

Subsecretaría de Prevención del Delito. 2020. IV Encuesta de Violencia contra la Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar y en Otros Espacios (ENVIF-VCM). En: https://cead.spd.gov.cl/estudios-y-encuestas/

Sumegiv. 2009. *Sistema Unificado de Medición Estadística de la Violencia de Género en Costa Rica: indicadores 2006-2007*. Sumegiv. En: https://inec.cr/wwwisis/documentos/INAMU/Sistema_Unificado_Medicion_Estadistica_Violencia_Genero_Costa_Rica_2006_2007.pdf

_____. 2014. *Sistema Unificado de Medición Estadística de la Violencia de Género en Costa Rica: indicadores 2008-2011*. En: https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/material-informativo/material-publicado/indicadores-en-salud/indicadores-de-genero-y-salud/violencia-de-genero/1788-indicadores-2008-2011-sistema-unificado-de-medicion-estadistica-de-la-violencia-de-genero-en-costa-rica/file

_____. 2018. *Sistema Unificado de Medición Estadística de la Violencia de Género en Costa Rica: indicadores 2012-2016*. En: https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2018/5/ActInforme%20SUMEVIG%20FINALweb.pdf

Torres, C.A.B. 2006. *Metodología de la investigación: Para administración, economía, humanidades y ciencias sociales*. Pearson Educación.

Urcuyo, C. 2024a. *Guía para el abordaje noticioso de casos de femicidio desde una perspectiva de género y análisis interseccional*. USAID. En: https://bit.ly/3WLClrb

Urcuyo, C. 2024b. *Visualizaciones*. Contribución especial realizada para el Quinto Informe Estado de la Justicia. PEN, Conare.

World Health Organization (WHO). 2021. *Violencia contra la Mujer*. En: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

Comunicaciones personales

Castillo, B. 2023. Asistente Administrativa, Unidad de Capacitación y Supervisión, Ministerio Público.

Escalante, K. 2023. Subdirectora a.i., Escuela Judicial, Poder Judicial.

Pérez, J. 2023. Director, Defensa Pública, Poder Judicial.

Quirós, A. 2023. Fiscala Adjunta, Oficina de Defensa Civil de la Víctima, Ministerio Público.

Anexos metodológicos

Anexo 1

Inventario de medidas y políticas judiciales en materia de violencia de género contra las mujeres

En esta primera parte del estudio, se elaborará un inventario de acciones realizadas por las oficinas judiciales relacionadas con la atención de la violencia de género, y cualquier documentación de diagnóstico o evaluaciones que se hayan realizado. En el cuadro A1, se detallan las variables y las categorías de análisis del inventario.

Cuadro A1

Variables de análisis del inventario de medidas y políticas judiciales en materia de violencia de género contra las mujeres

Variable	Descripción
Consecutivo de la medida (ID_medida)	Se indica un número consecutivo a cada medida de la base de datos, iniciando con el número uno (1).
Identificador del documento (ID_documento)	Se indica un número consecutivo a cada documento, iniciando con el número uno (1).
Tipo de documento (documento)	Se especifica el medio por el que se emite la medida. Por ejemplo: acuerdo, acta, circular, comunicado, convenio, directriz, informe, lineamiento, oficio, resolución, otro.
Título del documento (titulo_documento)	Debe registrarse el título completo del documento tal y como aparece en la fuente.
Texto de la medida (texto_medida)	Debe registrarse literalmente aquella parte del texto del documento al que pertenece la medida, que se refiera expresamente a la medida y como aparece en la fuente, siempre y cuando este refleje la función, intención y características principales de la medida. No debe mezclarse el texto de dos o más medidas. Es incorrecto poner todo el texto contenido de la norma, salvo cuando la norma contenga solo una medida y, aún en este caso, solo poner la parte referente a la medida, excluyendo motivaciones, reflexiones y consideraciones.
Tipo de medida (tipo_medida)	Esta variable realiza una clasificación simplificada del tipo de medida según los efectos que se buscan. Atención a usuarios y virtualización de trámites y servicios: corresponde a los nuevos servicios en la atención a personas usuarias; además de la virtualización de trámites y servicios por parte de las instancias del Poder Judicial. Campañas y materiales informativos: corresponde a las nuevas campañas y materiales informativos por parte de las instancias del Poder Judicial. Capacitaciones: corresponde a las nuevas capacitaciones por parte de las instancias del Poder Judicial. Gestión del personal: la medida refiere a la gestión del personal. Por ejemplo: cargas laborales, rotaciones, salud ocupacional, entre otras. Mesas de diálogo: la medida promueve la conformación de mesas de coordinación. Otros: cuando la medida no calce en ninguna de las opciones anteriores.

Variable	Descripción
Instancia del Poder Judicial (instancia)	Debe registrarse el nombre de la instancia del Poder Judicial responsable de emitir la medida.
Interinstitucionalidad de la medida (Interinstitucionalidad)	Esta variable responde a la existencia de la interinstitucionalidad de las medidas, se responde con: Si: la medida señala explícitamente el trabajo conjunto entre dos instituciones, despachos, oficinas, entre otros, del Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo con el Poder Judicial. No: la medida solo menciona el accionar de dependencias del Poder Judicial sin ninguna relación con instituciones, despachos, oficinas, entre otros, del Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo.
Fecha de aprobación del documento (fecha)	Corresponde a la fecha exacta en la que el documento fue aprobado por la institución. Para efectos de la base de datos, la fecha siempre se debe registrar con el formato Día/Mes/Año siempre. Por ejemplo, el 18 de marzo de 2020 debe indicarse de la siguiente forma: 18/3/2020.
Efecto de la medida (efecto)	Esta variable señala el efecto de la medida sobre las personas y las comunidades. A continuación, se detallan los tipos de efecto y su definición, asimismo, los tipos de medidas correspondientes a cada tipo de efecto. Alto: medidas con efectos directos sobre los derechos fundamentales de las personas y la provisión de servicios públicos. Por ejemplo: atención a usuarios y virtualización de trámites y servicios. Medio: medidas administrativas y operativas con efectos sobre las entidades y sus funcionarios públicos. Por ejemplo: capacitaciones, gestión del personal y mesas de diálogo. Bajo: medidas administrativas con efectos no identificados. Por ejemplo: campañas y materiales informativos y otros.
Alcance geográfico (alcance)	Esta variable señala el alcance territorial de la medida. Nacional: la medida afecta todo el territorio nacional. Provincial: la medida afecta una provincia del territorio nacional. NI: la medida no indica el alcance geográfico.
Circuito judicial (circuito judicial)	Esta variable señala el circuito judicial al que aplica la medida. En caso de que la medida afecte todo el territorio nacional se deberá registrarse “todos los circuitos judiciales”.
Tipo de población afectada directamente (tipo población)	Debe registrarse el tipo de población afectada directamente por la medida: Personas funcionarias. Personas usuarias.
Mecanismo de control en el texto de la medida (control)	Esta columna está definida para señalar si el texto de la medida indica explícitamente el mecanismo de control. Se insertará “SI”, si la respuesta es afirmativa, “NO” si es negativa y “NA” en caso de no aplicar.
Detalle del mecanismo de control en el texto de la medida (detalle control)	Aquí se registra el mecanismo de control indicado explícitamente en el texto de la medida. En caso de que el texto de la medida no indique el mecanismo de control, se deberá señalar “NI”.
Cuantificación de la medida (cuantificable)	Esta variable está diseñada para discernir si la medida puede ser cuantificada a partir de indicadores y es dicotómica, se responde con:

Variable	Descripción
	Si: la medida posee indicadores. No: la medida no posee indicadores. NI: en caso de no indicar.
Fecha de vigencia de la medida (fecha vigencia)	Corresponde a la fecha de vigencia de la medida, es decir, cuando la medida comienza a regir. Para efectos de la base de datos, la fecha siempre se debe registrar con el formato Día/Mes/Año siempre. Por ejemplo, el 18 de marzo de 2020 debe indicarse de la siguiente forma: 18/3/2020. En caso de que el documento no indique explícitamente la fecha de vigencia, se deberá registrarse "NI".

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 2
Volumen y comportamiento de delitos relacionados con violencia de género

Fuentes de información estadística para el capítulo

En este capítulo se utilizaron las siguientes fuentes de información para el análisis general de las estadísticas oficiales disponibles:

- Base de datos de la Dirección de Planificación del Poder Judicial:

Es tomada a partir del Balance general interactivo para especialistas (Power BI) de la Dirección de Planificación del Poder Judicial (2023). Este cuadro se publica en la página web de la Dirección y, según se indica en la plataforma, los datos en esta son extraídos de las mismas fuentes que consultan el Sistema SIGMA y el Observatorio Judicial.

- Base de datos del Ministerio Público y Fiscalía Adjunta de Género:

Contiene la sistematización de los datos del OIJ y Ministerio Público que se extrajo desde los Anuarios Estadísticos aprobados por el Consejo Superior del Poder Judicial, así como las estadísticas policiales aprobadas por ese mismo órgano.

En el caso del OIJ, la información fue extraída desde su sitio web oficial; específicamente, en el apartado de estadísticas policiales que se encuentran accesibles para consulta descarga. El periodo de estos datos abarca desde el año 2015 y hasta el 2022. Además, se tomó como insumo de referencia las Memorias Institucionales del OIJ que se encuentran disponibles en ese mismo sitio web y cuentan con información para el periodo que va del año 2011 al 2022.

- Base de datos PEN de casos terminados en violencia contra las mujeres PEN:

El PEN creó una base de datos sobre estadísticas judiciales en materia de violencia contra las mujeres, a partir de la información facilitada mediante el **oficio 680-PLA-ES-2023**, que corresponde al listado de expedientes de violencia contra las mujeres terminados o cerrados en los años 2019 y 2022 en todos los despachos jurisdiccionales de la materia penal en el país. En las fuentes de este capítulo se denominará Base de datos PEN de casos terminados.

Se incorporan los delitos sexuales previstos en el Código Penal y los delitos de la LPVcM, para un total de 16 tipos penales más frecuentes que corresponden a:

- Abuso sexual contra persona mayor de edad
- Abuso sexual contra persona mayor de edad (tentativa de)
- Abuso sexual contra persona menor de edad o persona incapaz
- Abuso sexual contra persona menor de edad o persona incapaz (tentativa de)
- Femicidio
- Femicidio (tentativa de)
- Femicidio en otros contextos
- Incumplimiento de una medida de protección
- Maltrato
- Relaciones sexuales con persona menor de edad
- Relaciones sexuales con persona menor de edad (tentativa de)
- Trata de personas con fines de embarazo forzado, aborto forzado y la ejecución de cualquier forma de explotación sexual
- Violación
- Violación (tentativa de)
- Violación calificada
- Violación contra una mujer"

La base de datos tiene un total de 56.421 registros de expedientes cerrados en los años 2019 y 2022, distribuidos 44117 registros para Juzgados Penales, 9828 para Tribunales Penales, 1786 para Tribunales de Apelación y 690 para el caso de los procesos tramitados ante la Sala de Casación Penal.

El cierre estadístico de estos expedientes se produce por haber concluido en al menos una de las instancias. La terminación del expediente en una instancia representa la eventual posibilidad de que el mismo expediente se contabilice como terminado en otra instancia (superior o inferior).

Anexo 3

Muestreo de expedientes judiciales de violencia de género

El capítulo 4 corresponde a una revisión de expedientes de violencia contra las mujeres. Se utilizó la técnica de muestreo de expedientes para lograr un nivel de datos desagregados (microdatos) y su cruce y procesamiento, que es imposible de lograr con las estadísticas judiciales oficiales. Esta revisión exhaustiva identificó áreas de riesgo de tutela efectiva de derecho, identificadas así por especialistas en esta área.

El muestreo de expedientes utiliza la técnica de estudio de cohortes, la cual permite el seguimiento de un grupo a lo largo del tiempo, rastrear su historia de principio a fin, es decir desde la apertura del expediente con el número único hasta su terminación en el proceso judicial. Busca determinar tipos de salida, tipos de casos, duraciones, perfiles de usuarios, riesgos de tutela de derechos en el proceso, entre otros.

La distribución de la muestra deberá definirse con base en criterios técnicos muestrales y los énfasis que se requieran para el estudio.

Los pasos seguidos para la realización del estudio consistieron en:

- Cuestionario revisado que incluya el perfil de usuarios, la verificación del cumplimiento de los principios de tutela efectiva y la cuantificación de la duración por etapas.
- Prueba piloto aplicada y correcciones realizadas al cuestionario.
- Hoja de ruta de los distintos tipos de casos de delitos relacionados con violencia contra las mujeres.
- Entrega de base de datos y respaldos (expedientes de los casos de delitos relacionados con violencia contra las mujeres terminados en el periodo 2019 y 2022 en la GAM).

Durante la fase de preparación, desarrollo y tratamiento posterior de los datos, se enfrentaron dificultades con respecto a los expedientes de la muestra.

En los listados totales originales, enviados por la Dirección de Planificación del Poder Judicial, se tenía 12682 expedientes de casos terminados (en esa instancia), distribuidos según instancia y delito.

El planteamiento inicial era hacer una muestra de igual tamaño por instancia y delito, es decir un muestreo estratificado desproporcionado dentro de cada celda.

Desde el inicio se tenían riesgos identificados en los listados, como sigue: duplicados, expedientes que no se pueden ubicar físicamente, la muestra requerida es superior al universo en la casilla, los casos de violación podrían ser de personas menores de edad, que no serían considerados como parte del proyecto.

Había posibilidad de cumplir con la muestra en las instancias de Juzgado y Tribunal, pero en el caso de Apelación y Sala de Casación, el número total de casos era superado por la muestra afijada, por lo que fue necesario asignar más casos a otros delitos o instancias.

En un primer momento, los expedientes seleccionados para la muestra requirieron ser ubicados físicamente; particularmente para el caso de los despachos que no han implementado la digitalización de su circulante. Para la fase previa del muestreo, si bien cada registro estaba consignado como terminado respecto de un despacho judicial específico, lo cierto es que la información oficial de los registros del Subproceso de Estadística podía variar por estos motivos:

- El expediente había sido solicitado por algún otro despacho judicial, de modo que no se encontraba físicamente en la oficina de origen.
- El expediente podía aparecer como terminado a nivel de juzgado, pero eso no excluía la posibilidad de que estuviera aún en trámite a nivel de Tribunal o de las instancias recursivas. De hecho, fue posible identificar casos de expedientes que estadísticamente estaban registrados como terminados, pero en la ubicación real y física presentaban una reapertura por algún motivo procesal.
- El expediente había sido destruido.
- El expediente estaba en proceso de traslado desde el despacho de origen hacia un despacho de fase recursiva (apelación o casación) o hacia el Archivo Judicial.

- El expediente se consignó como terminado a nivel estadístico en despacho de Apelación o de Casación, pero se encontraba físicamente en el Tribunal de juicio de origen y esa trazabilidad no había sido consignada.
- El expediente había sido ingresado recientemente al Archivo Judicial pero no había sido procesado por esa dependencia, de modo que la remesa tomaba más tiempo para ser accedida y consultada.
- Existencia de duplicidad en el número único de expediente (NUE) consignado para un expediente terminado, porque al interponerse la gestión de casación en la Sala Tercera se genera un número de consecutivo distinto.
- Incluir el tema de la sala (solo ellos tienen el registro) y que el oficio lo extiende a testimonio de piezas.

En el momento del muestreo y en la fase posterior también se identificaron situaciones que hicieron más complejo el estudio de los expedientes. Entre estas circunstancias es posible mencionar la ausencia de datos sobre aspectos que institucionalmente se asumen como generalizados para todos los legajos. Por ejemplo, es frecuente que en los expedientes se omita información de importancia como el nivel educativo de las víctimas o la edad al momento de la denuncia; lo mismo ocurre con el caso de la información correspondiente a los imputados.

En los expedientes que son enviados para el Archivo Judicial no se respeta necesariamente que cada legajo inicie y concluya en una misma remesa. Por ello, fue posible identificar expedientes incompletos o que requirieron de una búsqueda más exhaustiva para ser muestreados en su totalidad.

Este último detalle es de importancia para tomar en cuenta desde la perspectiva de acceso a la información en materia de justicia. La limitación de un expediente incompleto por motivo de que la remesa supera el tamaño institucionalmente previsto, es una realidad a la que se enfrentan las personas usuarias que acuden al Archivo Judicial para consultar sus expedientes.

Aunque este estudio se limitaba a expedientes judiciales de mujeres mayores de edad, estadísticamente no existía un filtro que permitiera separar los expedientes cuanto la víctima era menor de edad. Como resultado de eso, casi un 40% de los expedientes seleccionados para la muestra inicial debió ser descartado y ese detalle solo fue identificable hasta el momento de abrir cada uno individualmente.

Lo mismo ocurrió con la clasificación por delito. En la fase posterior de limpieza de los datos se descartaron 19 expedientes de los 305 del muestreo porque los delitos registrados estadísticamente (maltrato, violación o femicidio) por el Poder Judicial, no se correspondían con la realidad documental del proceso. Es decir, se trataba de casos judiciales asociados a delitos distintos a esos tipos penales. Con ello los expedientes analizados en total fueron 286.

La justificación metodológica para la usabilidad de los datos recolectados radica en la rigurosa selección y revisión de expedientes, así como en la adaptabilidad del proceso frente a los desafíos encontrados. A pesar de las dificultades iniciales para acceder a permisos completos y la presencia de expedientes incompletos o destruidos, se implementaron estrategias efectivas para asegurar la integridad y representatividad de la muestra. El diseño de la muestra, que

incluyó una sobremuestra para compensar posibles pérdidas, y la exhaustiva verificación manual de los expedientes garantizan que los datos obtenidos sean robustos y fiables. Estos datos son esenciales para el análisis de los delitos de femicidio, maltrato y violación contra la mujer, proporcionando una base empírica sólida que puede informar políticas públicas y mejorar la administración de justicia en estas áreas críticas.

Cuadro A2
Población total para la selección de la muestra

Delito	TOTAL			
	Juzgado	Tribunal	Tribunal de apelación	Sala de casación
Femicidio o tentativa	185	111	36	24
Maltrato	8433	567	56	10
Violación o tentativa	2036	580	331	313
TOTAL	10654	1258	423	347

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro A3
Cálculo de la muestra a un margen de error del 90%

MUESTRA				Margen de error al 90%			
Juzgado	Tribunal	Tribunal de apelación	Sala de casación	Juzgado	Tribunal	Tribunal de apelación	Sala de casación
36	36	36	24	12%	11%	0%	0%
36	36	36	10	14%	13%	8%	0%
36	36	36	74	14%	13%	13%	8%
108	108	108	108	8%	8%	7%	7%

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro A4
Cálculo de la sobremuestra para sustitución de expedientes que no corresponden

	SOBREMUESTRA			
Delito	Juzgado	Tribunal	Tribunal de apelación	Sala de casación
Femicidio o tentativa	46	46	36	24
Maltrato	46	46	46	10
Violación o tentativa	56	56	56	94
TOTAL	148	148	138	128

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro A5
Oficinas que forman parte de la muestra GAM

Juzgado	Expedientes
Juzgado Penal Cartago	11
Juzgado Penal Grecia	6
Juzgado Penal Hatillo	4
1 Juzgado Penal Heredia	18
Juzgado Penal I Circ. Jud. Alajuela	20
Juzgado Penal I Circ. Jud. San José	15
Juzgado Penal II Circ.Jud. Alajuela	8
Juzgado Penal II Circ. Jud. San José	21
Juzgado Penal I Circ. Jud. Alajuela (Atenas)	1
Juzgado Penal III Circ. Jud. Alajuela (San Ramón)	7
Juzgado Penal III Circ. Jud. San José (Desamparados)	16
Juzgado Penal Puriscal	1
Juzgado Penal San Joaquín de Flores	6
Juzgado Penal Turrialba	4
Juzgado Penal La Unión	5
Juzgado Penal Pavas	5
Total general JUZGADOS	148
Tribunal	Expedientes
Tribunal De Cartago (materia Penal)	18
Tribunal De Heredia (materia Penal)	23
Tribunal Del I Circuito Judicial De Alajuela (materia Penal)	24
Tribunal Del II Circuito Judicial De Alajuela (materia Penal)	15
Tribunal Del III Circuito Judicial De Alajuela (san Ramón) (materia Penal)	2
Tribunal Penal Del I Circuito Judicial De San José	18
Tribunal Penal Del II Circuito Judicial De San José (Goicochea)	11
Tribunal Penal Del III Circuito Judicial De San José Sede Suroeste (Pavas)	19
Tribunal De Flagrancia De San José (Goicochea)	5
Tribunal De Flagrancia I Circuito Judicial De San José	1
Tribunal Del II Circuito Judicial De Alajuela (flagrancia)	1

Juzgado	Expedientes
Tribunal Del III Circuito Judicial De Alajuela (san Ramón) (flagrancia)	5
Tribunal Penal (flagrancia) Circuito Judicial De Heredia	1
Tribunal Penal Del III Circuito Judicial De San José (Desamparados)	8
Tribunal De Cartago, Sede Turrialba	1
Tribunal Del III Circuito Judicial De Alajuela, Sede Grecia (materia Penal)	8
Total general TRIBUNALES	160

Fuente: Elaboración propia.

Selección de tipos de delitos

Para efectos de la investigación, es necesario que estos conceptos se refieran a tipos de delitos específicos, susceptibles de judicializarse. Es decir, que basadas en el concepto teórico se escogen ciertas figuras penales que se relacionan directamente con el fenómeno de violencia contra las mujeres.

Para efectos de delimitar el concepto de violencia contra las mujeres en este estudio, se identificaron preliminarmente un total de 49 tipos de delitos (cuadro A6), a los que se les aplicó tres filtros: 1) criterios de inclusión y de exclusión (cuadro A7) fusión de delitos y 3) priorización de criterios de víctima, incidencia y pena.

Es necesario recordar que para hacer viable operativamente la investigación se excluyeron los casos de violencia doméstica que ingresan a los juzgados de familia.

Cuadro A6
Tipos de delitos penales relacionados con el concepto de violencia contra las mujeres que se consideraron para el estudio

ID	Delito	Normativa	Pena mínima	Pena máxima
1	Violación	Código Penal	10 años	16 años
2	Violación calificada	Código Penal	12 años	18 años
3	Violación contra una mujer	Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres	12 años	18 años
4	Relaciones sexuales con PME (relación impropia)	Código Penal	3 años	10 años
5	Actos remunerados con PME	Código Penal	2 años	10 años
6	Abuso sexual contra PME o persona incapaz	Código Penal	3 años	10 años
7	Abuso sexual contra persona mayor de edad	Código Penal	2 años	6 años

ID	Delito	Normativa	Pena mínima	Pena máxima
8	Conductas sexuales abusivas	Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres	3 años	6 años
9	Turismo sexual	Código Penal	4 años	8 años
10	Rapto propio	Código Penal	2 años	6 años
11	Rapto impropio	Código Penal	6 meses	3 años
12	Rapto con fin de matrimonio	Código Penal	3 meses	2 años
13	Corrupción	Código Penal	4 años	12 años
14	Grooming / seducción o encuentros con PME o incapaz por medios electrónicos	Código Penal	2 años	5 años
15	Corrupción agravada	Código Penal	6 años	12 años
16	Proxenetismo	Código Penal	2 años	5 años
17	Proxenetismo agravado	Código Penal	4 años	10 años
18	Rufianería	Código Penal	2 años	10 años
19	Trata de personas con fines de embarazo forzado, aborto forzado y la ejecución de cualquier forma de explotación sexual	Código Penal	6 años	16 años
20	Explotación sexual de una mujer	Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres	2 años	5 años
21	Fabricación, producción o reproducción de pornografía	Código Penal	4 años	9 años
22	Tenencia de material pornográfico	Código Penal	2 años	5 años
23	Difusión de pornografía	Código Penal	4 años	9 años
24	Pornografía virtual y pseudopornografía	Código Penal	6 meses	2 años
25	Exhibicionismo o masturbación	Código Penal	6 meses	1 año
26	Persecución o acorralamiento	Código Penal	8 meses	1 año
27	Producción de material audiovisual	Código Penal	10 meses	3 años
28	Acoso sexual	Código Penal	15 días	30 días
29	Agresión sexual	Ley Integral para la Persona Adulta Mayor	1 mes	6 meses
30	Femicidio	Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres	20 años	35 años

ID	Delito	Normativa	Pena mínima	Pena máxima
31	Femicidio en otros contextos	Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres	20 años	35 años
32	Maltrato	Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres	3 meses	2 años
33	Tipos penales de lesiones	Código Penal	NI	NI
34	Agresión física	Ley Integral para la Persona Adulta Mayor	1 mes	3 meses
35	Restricción a la libertad de tránsito	Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres	2 años	4 años
36	Ofensas a la dignidad	Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres	6 meses	2 años
37	Restricción a la autodeterminación	Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres	2 años	4 años
38	Amenazas contra mujer	Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres	6 meses	2 años
39	Agresión psicológica	Ley Integral para la Persona Adulta Mayor	1 mes	6 meses
40	Sustracción patrimonial	Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres	6 meses	3 años
41	Daño patrimonial	Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres	3 meses	2 años
42	Limitación al ejercicio del derecho de propiedad	Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres	8 meses	3 años
43	Fraude de simulación sobre bienes susceptibles de ser gananciales	Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres	2 meses	10 años
44	Distracción de las utilidades de las actividades económicos familiares	Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres	6 meses	1 año
45	Explotación económica de la mujer	Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres	6 meses	3 años
46	Explotación de personas adultas mayores	Ley Integral para la Persona Adulta Mayor	1 año	2 años
47	Obstaculización del acceso a la justicia	Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres	3 meses	3 años
48	Incumplimiento de deberes agravados	Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres	2 años	6 años
49	Incumplimiento de una medida de protección	Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres	6 meses	2 años

Fuente: Elaboración propia.

En total, se identificaron 49 tipos de delitos a los que se les aplicó tres filtros: 1) criterios de inclusión y de exclusión (cuadro A7), 2) fusión de delitos y 3) priorización de criterios de víctima, incidencia y pena.

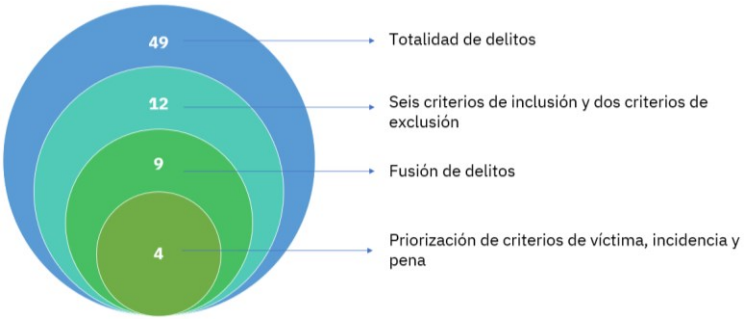
Cuadro A7
Criterios de inclusión y de exclusión de tipos de delitos

Tipo de criterio	Subtipo de criterio	Pregunta crítica
Inclusión	Incidencia	¿El delito está entre los cinco más frecuentes según la estadística del Poder Judicial, sea para delitos sexuales o vinculados a la LPVcM?
	Cuantía de la pena	¿Dentro del rango de pena prevista por el tipo penal se encuentran 5 años de prisión o más?
	Impacto	¿Representa una delincuencia con impacto mediático o el estudio de este delito podría tener un impacto práctico más allá del Derecho previsiblemente mayor frente al estudio de otros?
	Archivo de causas	¿Los expedientes penales tienen un porcentaje mayor al 60% en que terminan por archivo fiscal, desestimación o sobreseimiento definitivo?
	Problemática técnico-jurídica	¿La aplicación del tipo penal tiene dificultades o problemas técnico-jurídicos de relevancia e impacto práctico?
	Víctimas (mujeres o niñas)	¿Las víctimas son mujeres o niñas por serlo?
Exclusión	Estadísticas desagregadas	¿Hay datos estadísticos que permitan diferenciar por género o sexo a las personas víctimas?
	Problemática administrativa	¿La investigación de esta clase de expedientes llevaría a tener que estudiar expedientes conexos de otras materias, como Violencia Doméstica?

Fuente: Elaboración propia.

Luego de la aplicación de los filtros (diagrama A1), se seleccionaron cuatro tipos de delitos: 1) femicidio (femicidio y femicidio en otros contextos), 2) maltrato, 3) relaciones impropias (relaciones sexuales con persona menor de edad) y 4) violación (violación, violación calificada y violación contra una mujer).

Diagrama A1
Resultados de la aplicación de los filtros para seleccionar los tipos de delitos que se investigarán a profundidad con el muestreo



Fuente: Elaboración propia.

Muestreo de expedientes

El muestreo de expedientes utiliza la técnica de estudio de cohortes, la cual permite el seguimiento de un grupo a lo largo del tiempo, rastrear su historia de principio a fin; es decir, desde la apertura del expediente con el número único hasta su terminación en el proceso judicial. Busca determinar tipos de salida, tipos de casos, duraciones, perfiles de usuarios, riesgos de tutela de derechos en el proceso, entre otros.

Un profesional de estadística especializada en muestreos se encargará de seleccionar el número y el grupo de expedientes a muestrear, distribuidos en dos años. Este período permitirá hacer comparaciones de la evolución de los indicadores en el tiempo, además permitirá ver los datos prepandemia (2019) y postpandemia (2022).

La distribución de la muestra deberá definirse con base en criterios técnicos muestrales y los énfasis que se requieran para el estudio. Una opción es seleccionar las cinco causas más denunciadas en delitos sexuales y en la LPVCM. La selección también puede incluir criterios territoriales (las zonas más violentas) u otros criterios como la existencia de algún programa específico en una oficina versus otra que no lo tenga. Otra opción es tomar el universo completo de denuncias de cada año y hacer la muestra completamente aleatoria. Estas decisiones metodológicas se realizarán con base en consulta a especialistas.

Es muy importante, paralelamente a la selección, contar con los permisos de acceso y constatar la disponibilidad de los expedientes según oficina, o juzgado porque pueden tener distintas condiciones de acceso.

Una vez obtenida la información de cada expediente se crea una base de datos que permite la aplicación de técnicas estadísticas para determinar patrones, según los criterios o estándares definidos. En los muestreos de expedientes anteriores se han utilizado análisis bivariado, regresiones logísticas, tipologías o conglomerados, distribuciones de duraciones, entre otros.